

**Poder Judicial**  
**Tribunal de Juicio Oral en lo Penal**  
**Curicó**

---

<b>RESUMEN</b>	
<b>Acusados</b>	1) Martín Abdón Arriagada Urrutia 2) Isabel Alejandra Vásquez Espinoza
<b>Delito / Decisión</b>	Fraude al Fisco, art. 239 del Código Penal (autor – consumado) / Condenados
<b>RIT</b>	20-2023
<b>RUC</b>	1.500.342.994-3

**SENTENCIA DEFINITIVA**

Curicó, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En los días uno al trece de diciembre del año en curso, ante esta Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral para conocer de la acusación dirigida en contra de los acusados, **Martín Abdón Arriagada Urrutia**, Cédula de Identidad N°9.540.040-K, nacido en Curicó, el día 14 de febrero de 1968, 55 años de edad, mecánico de helicópteros y cesado en funciones como Alcalde de la comuna de Sagrada Familia, casado, domiciliado en Santa Leonor S/N, comuna de Sagrada Familia; y de **Isabel Alejandra Vásquez Espinoza**, Cédula de Identidad N°9.525.418-7, nacida en Molina, el día 11 de junio de 1963, 60 años de edad, ingeniero en ejecución de empresas, casada, domiciliada en San Francisco N°40, Sagrada Familia.

Fue parte acusadora en el presente juicio el Ministerio Público de Curicó, representado por el Fiscal Miguel Gajardo Lizama.

El Consejo de Defensa del Estado, como acusador particular, estuvo representado por la abogada Fernanda González Faúndez y el abogado Roberto Rojas Valenzuela.

La Defensa del acusado Martín Arriagada Urrutia estuvo a cargo del abogado Defensora Penal Privado, Marcos Rivera Baeza.

Por su parte, la acusada Isabel Vásquez Espinoza, fue representada por los Defensores Penales Privados, Juan Carlos Manríquez, Yamil Yaivar Camerino y Javiera Valenzuela Fabres.

**PRIMERO:** Que las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público en contra del acusado, según consta de los autos de apertura, son del siguiente tenor:

Entre los días 30 de marzo y 01 de abril de 2015, mientras Felipe Andrés Paredes Baeza desempeñaba funciones como cajero encargado del giro y recaudación de Permisos de Circulación al interior de la Municipalidad de Sagrada Familia, concertado previamente con Raúl Alejandro Betancourt Diaz, actualmente fallecido, procedió el primero a renovar a este último, los Permisos de Circulación de 8 vehículos : PPU BSSB.83-3, BWFR.71-5, CLTF.43-K, CYPB.98-1, NY.6788-K, LW.8279-K, UR3964-7 Y RF.4076-4, en circunstancias que Paredes Baeza se encontraba impedido de hacerlo, toda vez que dichas patentes presentaban numerosas multas de tránsito impagas cursadas por diversos Juzgados de Policía Local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°18.287, que prohíbe la renovación de Permisos de Circulación de vehículos que presenten multas de tránsito no pagadas, defraudando de esta manera al Fisco de Chile en la suma de \$19.122.192.-, de acuerdo al siguiente detalle:

Además, Raúl Alejandro Betancourt Diaz, durante el proceso de renovación de permisos de circulación del año 2015, concurrió en forma reiterada a la Municipalidad de Sagrada Familia para adquirir múltiples Permisos de Circulación de otros vehículos que mantenían multas impagas, siendo atendido, la mayoría de las veces, por Felipe Andrés Paredes Baeza, quien vendió esos Permisos de Circulación sin cobrar o exigir el pago de las multas pendientes de pago.

<b>N°</b>	<b>PPU</b>	<b>PROPIETARIO (según RNVM)</b>	<b>Cantidad multas impagas</b>	<b>Monto equivalente en pesos al valor UTM a marzo 2015 (\$43.068.-)</b>
1	BSSB.83-3	Yessenia Paloma Herrera López	121	\$ 5.211.228.-
2	BWFR.71-5	Alberto Alejandro Lastra Fuentes	103	\$ 4.436.004.-
3	CLTF.43-K	Aislaciones y Servicios Ltda.	57	\$ 2.454.876.-

**Poder Judicial**  
**Tribunal de Juicio Oral en lo Penal**  
**Curicó**

4	CYPB.98-1	María Francisca Godoy Cortés	56	\$ 2.411.808.-
5	NY.6788-K	Rossana María Céspedes Meza	35	\$ 1.507.380.-
6	LW.8279-K	Matias Andrés Montes del Campo	29	\$ 1.248.972.-
7	UR.3964-7	DEMOTRON S.A.	23	\$ 990.564.-
8	RF.4076-4	José Adán Ibañez Campos	20	\$ 861.360.-
	<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>\$19.122.192.-</b>

La venta de Permisos de Circulación a Raúl Alejandro Betancourt Díaz por parte de Felipe Andrés Paredes Baeza, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedecía a una autorización previa efectuada por el Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia Martín Abdón Arriagada Urrutia.

Asimismo, durante diversos períodos del año 2014 Felipe Paredes Baeza vendió, a diversos contribuyentes, 37 Permisos de Circulación con 180 multas impagas por un monto de \$7.804.807.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 581 Permisos de Circulación con 11.433 multas impagas por un monto de \$531.629.789.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, don Julio Enrique Hormazábal Muñoz, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 121 Permisos de Circulación con 959 multas impagas por un monto de \$46.121.504.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 155 Permisos de Circulación con 1.623 multas impagas por un monto de \$78.471.607.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Del mismo modo, Sonia Jimena Cuevas Jara durante diversos períodos del año 2014 vendió, a diversos contribuyentes, 74 Permisos de Circulación con 1189 multas impagas por un monto de \$52.754.407.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 151 Permisos de Circulación con 605 multas impagas por un monto de \$29.322.023.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Fabián Elías Riquelme Solís, durante diversos períodos del año 2014 vendió 39 Permisos de Circulación con 198 multas impagas por un monto de \$8.797.538.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió 19 Permisos de Circulación con 134 multas impagas por un monto de \$6.132.514.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Asimismo, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez, durante diversos períodos del año 2014 vendió 35 Permisos de Circulación con 496 multas impagas por un monto de \$25.225.755.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionaria municipal, desarrollando labores específicamente en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 35 Permisos de Circulación con 71 multas impagas por un monto de \$3.077.350.- y, en el año 2015, vendió 1 Permiso de Circulación con 1 multas impaga por un monto de \$43.068.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas; asimismo, instruyó a funcionarios a su cargo a realizar dicha acción ilícita.

El monto total defraudado al fisco, por concepto de multas de tránsito no cobradas, por los imputados de esta causa, asciende a la suma de \$805.382.136.-

Los imputados, ya sea en su calidad de funcionarios municipales como Felipe Andrés Paredes Baeza, Martín Abdón Arriagada Urrutia, Julio Enrique Hormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez e Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, tenían pleno conocimiento de la existencia de dichas multas pendientes de pago, debido a que dicha información había sido remitida a todos los Municipios de Chile por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación Nacional en forma previa al inicio del proceso de venta de Permisos de Circulación del año 2014 y 2015, tal como lo hace todos los años y además está disponible para cualquier persona que lo requiera.

Todos los delitos son en grado de Consumado y la responsabilidad de ambos acusados es en calidad de autor.

Se hace presente que, con fecha 30 de agosto de 2022, se arribó a una Suspensión Condicional del Procedimiento con los imputados Felipe Andrés Paredes Baeza, Julio Enrique Hormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís y Leticia Gabriela Saavedra Ramírez.

Los hechos descritos, en concepto del Ministerio Público, tipifican el delito de **Fraude al Fisco**, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en calidad de autores y en grado de desarrollo de consumado, correspondiendo a los acusados, responsabilidad a título de autores en el delito señalado, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

A juicio del Ministerio Público, respecto de los acusados Marín Abdón Arriagada Urrutia e Isabel Alejandra Vásquez Espinosa, concurre la circunstancia atenuante de responsabilidad penal señalada en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, su irreproachable conducta anterior y solicitó se condene al acusado Arriagada Urrutia a sufrir, la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a la pena de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y al pago de las costas, como autor del delito de fraude al Fisco, en grado de desarrollo consumado. A su vez, respecto a la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, solicitó se condene a sufrir, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y al pago de las costas, como autora del delito de fraude al Fisco, en grado de desarrollo consumado.

En la apertura el Ministerio Público expuso que el artículo de la Ley N°18.287, señala que mientras una anotación de multa esté vigente no se puede otorgar el permiso de circulación, que se hizo para poner fin a la alta morosidad en el pago de las multas. Los hechos ocurrieron en la comuna de Sagrada Familia, donde no se cumplió la norma, por el contrario, se promovió por las autoridades la venta de permisos sin que las multas estén pagadas, respecto de determinados contribuyentes que hicieron el favor de comprar el permiso para apoyar las actividades de la comuna. Personas con cercanía al alcalde o con su mano derecha, en los años 2014 al 2015. Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, comadre del

alcalde, tenía una lista de los colaboradores. Estamos frente a un ganar-ganar, lo hacía el contribuyente, porque se saltaba la ley y no pagaba las multas y la municipalidad que recibía recursos, el 37 % de esos montos quedaba en la municipalidad, el resto iba al fondo comunal municipal. Cobrar la multa era menos rentable, porque se retiene el 20%, siempre que no están asociadas a TAG. Cobrar las multas parecía no bueno, porque no atraía a los contribuyentes que querían burlar la ley. Se podría pensar que es un buen fin, pero no es así, no es altruista, lo que motivó el actuar fue egoísta y personal, causando un efecto en el sistema democrático, para mantenerse en el poder. Podrán decir descuido o negligencia, sin embargo, el actuar doloso fluirá de las declaraciones de los testigos, que demostrarán que cada año el Registro Civil envía un disco compacto con las multas de tránsito del año anterior, todo girador sabe que si hay multas impagas y no se puede otorgar el permiso de circulación, al hacerlo el fisco deja de percibir los dineros y en dos años, dejó de percibir más de ochocientos cinco millones de pesos. Se pretenderá por las defensas imputar a los giradores, pero es el caso que todos ellos eran funcionarios a contrata, salvo Isabel Vásquez Espinoza, dependían su permanencia de la decisión del alcalde, arriesgaban su fuente laboral. Se podrá acreditar los elementos de la acusación, tanto fácticos como jurídicos y solicitó una sentencia condenatoria para los acusados.

En la clausura expresó que Con ocasión del alegato de clausura, expuso que Sagrada Familia es una pequeña comuna de la Provincia de Curicó, de poco más 20.000 habitantes, con una tasa de pobreza cercana al 20%, que carecen de los servicios básicos, con necesidades y carencias, en ese lugar se originaron los hechos, los que se remontan al año 2015, cuando el concejal Floriano Cruz Muñoz, tomó conocimiento que se renovaban permisos de circulación sin cobrar las multa impagas, lo dio a conocer a la Contraloría Regional, Ministerio Público y al Consejo Municipal, lo mismo hizo, la Concejal Anselma Hernández del mismo espectro político que el alcalde, ambos dijeron que éste se molestó con las denuncias y no dio respuestas concretas. Carmen Velasco Ponce, Tesorera Municipal, se percató que había un contribuyente que se repetía, se trataba de Raúl Betancourt, lo consulto en las bases de datos del Registro Civil, tenía muchas patentes con multas impagas, validó la información, se dio cuenta que los hechos eran efectivos, las multas estaban vigentes y no se cobraron en la oportunidad, puso en conocimientos de sus superiores la situación, se lo comunicó al Administrador Municipal, al Director de Tránsito,

pero nadie tomó medidas concretas. Luego, el alcalde la sacó del cargo y la trasladó a Villa Prat, como una especie de castigo, como lo indicó Floriano Cruz y Anselma Hernández. El objetivo era vender permisos, el 36% quedaba en la municipalidad que recauda la multa, si se trata de TAG no queda ningún peso. Esta mayor recaudación, que pretendían generar y se generó, se gastaba en cosas superfluas, artistas famosos, fiestas y regalos, sin invertir en necesidades permanentes, solo daba satisfacciones rápidas, que generaban votos. En los años 2014 y 2015, Fabián Riquelme Solis, Leticia Saavedra Ramírez, Jimena Cuevas Jara, Julio Hormazábal Muñoz y Felipe Céspedes Baeza, vendieron cientos de permisos sin cobrar las multas, en el juicio declararon estas personas, dieron cuenta que fueron obligados, obedecieron órdenes de Martín Arriagada Urrutia y de su mano derecha, Alejandra Vásquez, los cuales tienen vínculos de familiaridad. Felipe Paredes dijo en la primera declaración en el Ministerio Público, que dio acompañado por un abogado, que le dispuso el alcalde, que la culpa era del sistema que tenía errores, por indicación del alcalde y de Enzo Hormazábal, preocupado de blindar al jefe comunal, pero finalmente fue abandonado y desvinculado, decidió hablar y expuso todos y cada uno los elementos, como fue a vender a Santiago, Talca, Machalí, incluso dijo que algunas veces con el alcalde. Dio cuenta como en esos viajes recibió el alcalde un llamado de Enzo Hormazábal, quien le dio cuenta que en la municipalidad estaba Raúl Betancourt y venía a comprar permisos, al alcalde autorizó que fuera atendido por Ignacio Arancibia y que usara la clave de Felipe Paredes. Arancibia al prestar declaración, dijo que el alcalde le presentó a Betancourt como su amigo. En el 2014, Felipe Paredes atendió junto a otros giradores a un conjunto de contribuyentes de Santiago, entre ellos a José Usuari Larruy, que traía muchos permisos con multas impagas, Alejandra Vásquez Espinosa lideraba este proceso. En el 2015 Felipe Paredes vendió junto a Julio Hormazábal en Santiago, en un departamento de Isuani Larruy, donde incluso estuvo presente el alcalde, permisos de circulación con multas impagas. Felipe Paredes lo hizo por necesidad de seguir trabajando, su renovación dependía del alcalde. Julio Hormazábal dijo que en el año 2014, fue llamado a la oficina del alcalde, le dijeron que tenían una lista de contribuyentes para visitar en terreno y no cobrar las multas impagas, se sorprendió, pero temeroso, accedió a ello, no tenía opción, también en el año 2014, fue convocado a la venta exclusiva de permisos de circulación de Isuani Larruy, con gran cantidad de permisos con multas impagas, en el 2015 estuvo en Santiago

alojado en el departamento de Isuani Larruy con un computador, impresora y lo necesario para girar los permisos, tomó fotografías en el departamento, era un funcionario a contrata y no tenía continuidad en el cargo. Jimena Cuevas declaró que, en 2014, Alejandra Vásquez le exigió que atendiera a contribuyentes sin cobrar las multas, se vio obligada por su inestable situación laboral, debió ir a Talca y Santiago para vender permisos de circulación, en Santiago acompañó a Isabel Vásquez, al alcalde en otra oportunidad, para vender patentes de buses. La razón del actuar fue la inestabilidad laboral, lo que se concretó en su posterior desvinculación. Fabián Riquelme en el 2014, declaró que llegó el alcalde y le pidió girar un permiso del auto de la madre, al ingresar la patente tenía multas impagas, el alcalde le dijo que lo girara si quería seguir en la municipalidad, no le quedo más que acceder, tenía 17 años estaba realizando la práctica profesional, que tal como dijo Ana Lillo, actual jefa de tránsito, al año 2014 tenía 3 multas impagas que figuraban en el registro. Leticia Saavedra en 2014 fue a vender permisos a terreno en Santiago, junto a Isabel Vásquez, que cuando los permisos tenían multas impagas, le consultaba a ella, quien le decía, lo vamos a ver. También, fue convocada al grupo de giradores para vender a Isuani Larruy, permisos que en su mayoría tenían multas impagas. Más allá de los dichos, existen elementos objetivos, del permiso de la madre del alcalde, FGYL 85, con multas impagas de los años 2013 y 2014, que al girar en el año 2014, Fabián Riquelme, no se cobró las tres multas ingresadas al 30 de noviembre de 2013, porque lo amenazó con que dependía su continuidad. En el 2015 le exigió girar un permiso sin cobrar las multas, que debía entregar a un empleado de la Automotora Alameda y días después se pagaron las seis multas que no no fueron acompañadas a la renovación del permiso. Luego, había 2 multas pendientes y nuevamente concurrió el nuevo dueño a exigir el pago de las multas y debieron de la Automotora consultar al respecto en la municipalidad el día 11 de abril de 2016, así Ximena Cuevas a petición del alcalde, dio los valores y se pagaron el en esa fecha. Ni la familia del alcalde, ni el auto del juez de Policía Local de Sagrada Familia, pagaban las multas oportunamente. Así lo expresó Francisco Barrios Bravo, que pagó el permiso de circulación sin pagar cuantiosas multas impagas. Los fiscalizadores dieron cuenta de múltiples irregularidades, lo que se hizo en el informe de 2016, dispusieron remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al municipio instruir un sumario, que concluyó que al 2018, no sancionaron a nadie, la razón fue errores de sistema, con una



coincidencia que no se puede soslayar que quien estuvo a cargo del sumario, fue la secretaria del Juzgado de Policía Local de Sagrada Familia, entendiendo que el propio auto del alcalde estuvo considerado para emitir un permiso de circulación sin el pago de una multa, además, en el sumario solo declararon los involucrados. Carlos Castillo, funcionario de la Bridec dio cuenta de la investigación, que incluye grabaciones al alcalde, que indican que estaba al tanto, conocía a Betancourt, no obstante, lo negaba. Betancourt dijo que se encontró con el alcalde, éste lo invitó a compra los permisos sin pago de las multas. La perito contable del Lacrim, que apoyó la incautación y revisó 7482 permisos de circulación del año 2014 y más de 11.500 en el año 2015 y llegó a la conclusión que se detectaron en 2014, 397 vendidos con 3248 multas impagas y un perjuicio fiscal de \$150.707.784, en el año 2015, se detectaron 939 permisos vendidos con 14.493 multas impagas, que causaron un perjuicio de \$675.585.982. La perito dio fe que, a la época de la venta, las multas existían y estaban vigentes, las que debieron cobrarse o abstenerse de girarlas, como señala la ley. Isabel Vásquez giró en 2014, 35 permisos, con 71 multas impagas por un valor de \$ 3.077.350, en el 2015 giró un permiso por \$43.068. Atendida la prueba se estableció que Martín Arriagada Urrutia e Isabel Vásquez Espinoza, en los años 2014 y 2015, lideraban un proceso sistemático de venta de permisos de circulación sin cobrar las multas impagas con la intención de allegar recursos municipales de forma irregular y asegurar el éxito en las próximas elecciones, como aconteció. En la réplica, señaló respecto a lo expresado por el Defensor del acusado Arriagada Urrutia, el delito que nos convoca se consuma desde el momento en que se gira el permiso de circulación y no se cobra la multa, lo que ocurra después, no tiene ningún resultado positivo con el tipo penal, eventualmente puede ser reparación celosa del mal causado. Por tanto, no tiene trascendencia. El libro sobre la estafa de Hernán Silva Silva, indica que el fraude tiene similares elemento del tipo, es una figura especial de estafa, el perjuicio debe producirse al tiempo de comisión del delito. El reintegro de perjuicio no lo desnaturaliza. En el mismo sentido trae a colación, lo señalado por Laura Meyer el libro “delito económico de estafa y otras defraudaciones”, pagina 96, donde señala que es irrelevante que se reintegren los bienes objeto material del fraude o sean reparados por un tercero, solo puede servir para fundar la atenuante del artículo 11 N°7 del Código Penal. Lo mismo ha señalado la Corte Suprema en las causas Rol Corte N°0301-2006, 2284-2005 1933-2007. Se debe estar al momento en que se comete el delito

cuando se giran las multas. En los años 2014 y 2015, la información que la municipalidad ingresó al sistema fue validada y confrontada, la perito tuvo en vista el CD con las multas impagas que todos los años el registro Civil, manda a la municipalidad. Sobre los montos que cuestiona la defensa, acogieron la presentación. La Defensa, estimó que se consideró dos veces las multas de 149 patentes, repetidas en el 2014 y 2015, se hizo un análisis y eliminaron las del 2014, se restó las 149 PPU y el total asciende a \$62.981.344 y el resultado del perjuicio en 2014 es la suma de \$87.726.440, que deben sumarse al perjuicio del año 2015, no cuestionado de \$675.585.922, lo que da un total de \$763.312. 422. Las Multas del 2015 de la PPU FGYL85, reclamó la Defensa que los pagos no estaban registrados en la municipalidad, por tanto, la perito no debió considerarlos, peor el artículo 24 señala que si no están deben pagarse. La Defensa de la señora Vásquez, hizo un análisis interesante del artículo 239 del Código Penal, con referencias doctrinarias, sin embargo, la norma básica interpretativa es el artículo 19 del Código Civil, cuando el sentido ley es claro, no se desatenderá su tenor literal para consultar su espíritu, el artículo 24 de la Ley N°18.287 es claro. La acusación se dirige en contra del alcalde y de Alejandra Vásquez como encargada de permisos de circulación en los años 2014 y 2015 y giradora, como se señala en los decretos acompañados y directora de control interno, dentro de sus altas funciones, debe velar por el cumplimiento de la ley, entre ellos el artículo 24 ley 18.287, que es una ley de la república y que obliga a todos los ciudadanos, más aun a los funcionarios públicos.

En la audiencia prevista por el artículo 343 del Código Procesal Penal, manifestó reconocer la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal respecto de ambos acusados, y pidió se imponga a la acusada Vásquez Espinoza la penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, las accesorias respectivas, la multa establecida en la ley, de acuerdo al perjuicio establecido. Para el acusado Arriagada Urrutia solicitó la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en consideración a la extensión del mal causado, la accesoria del artículo 29 del Código Penal, la inhabilidad absoluta temporal en su grado máximo, la multa en relación al monto defraudado, con condena en costas para ambos acusados. Solicitó el 50% de la multa y la inhabilitación absoluta temporal en grado medio para la acusada Vásquez Espinoza y en el caso del acusado Arriagada Urrutia la inhabilidad absoluta temporal en su grado máximo. Solo reconoce la atenuante del artículo

11 N°6, no hay reparación celosa con el pago de las multas, por la venta a Guiliano Espinoza necesitó sacar los permisos, no tiene el sentido de una minorante. Sobre la media prescripción, el artículo 96 del Código Penal dice que se suspende la prescripción desde que el procedimiento se dirige contra una persona, en relación con el 7 del Código procesal penal, inciso segundo, la primera actuación fue una diligencia o actuación por o ante un tribunal, el Ministerio Público o las policías, en que se atribuya responsabilidad. En la especie Martín Arriagada fue desde el inicio uno de los sospechosos en la causa, el día 20 de abril de 2017, declaró en calidad de imputado, acompañado del abogado Luis Reyes Guzmán. Alejandra Vásquez, igualmente el informe pericial, desde los primeros análisis figura AVASQU como giradora, es un acto de procedimiento que se dirigió en su contra y se habría suspendido la prescripción. No procede alguna sanción sustitutiva respecto de Martín Arriagada Urrutia, si respecto de Alejandra Vásquez. En relación a las inhabilidades, deben imponerse en todo caso, el inciso final señala que es obligatorio.

**SEGUNDO:** Que, el Consejo de Defensa del Estado, según consta del auto de apertura de juicio oral, interpuso una acusación particular en contra de Martín Abdón Arriagada e Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, atribuyendo los siguientes cargos:

Entre los días 30 de marzo y 01 de abril de 2015, mientras Felipe Andrés Paredes Baeza desempeñaba funciones como cajero encargado del giro y recaudación de Permisos de Circulación al interior de la Municipalidad de Sagrada Familia, concertado previamente con Raúl Alejandro Betancourt Diaz, actualmente fallecido, procedió el primero a renovar a este último, los Permisos de Circulación de 8 vehículos : PPU BSSB.83-3, BWFR.71-5, CLTF.43-K, CYPB.98-1, NY.6788-K, LW.8279-K, UR3964-7 Y RF.4076-4, en circunstancias que Paredes Baeza se encontraba impedido de hacerlo, toda vez que dichas patentes presentaban numerosas multas de tránsito impagas cursadas por diversos Juzgados de Policía Local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°18.287, que prohíbe la renovación de Permisos de Circulación de vehículos que presenten multas de tránsito no pagadas, defraudando de esta manera al Fisco de Chile en la suma de \$19.122.192.-, de acuerdo al siguiente detalle:

**Poder Judicial**  
**Tribunal de Juicio Oral en lo Penal**  
**Curicó**

<b>N°</b>	<b>PPU</b>	<b>PROPIETARIO (según RNVM)</b>	<b>Cantidad multas impagas</b>	<b>Monto equivalente en pesos al valor UTM a marzo 2015  (\$43.068.-)</b>
1	BSSB.83-3	Yessenia Paloma Herrera López	121	\$ 5.211.228.-
2	BWFR.71-5	Alberto Alejandro Lastra Fuentes	103	\$ 4.436.004.-
3	CLTF.43-K	Aislaciones y Servicios Ltda.	57	\$ 2.454.876.-
4	CYPB.98-1	María Francisca Godoy Cortés	56	\$ 2.411.808.-
5	NY.6788-K	Rossana María Céspedes Meza	35	\$ 1.507.380.-
6	LW.8279-K	Matías Andrés Montes del Campo	29	\$ 1.248.972.-
7	UR.3964-7	DEMOTRON S.A.	23	\$ 990.564.-
8	RF.4076-4	José Adán Ibáñez Campos	20	\$ 861.360.-
	<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>\$19.122.192.-</b>

Además, Raúl Alejandro Betancourt Díaz, durante el proceso de renovación de permisos de circulación del año 2015, concurrió en forma reiterada a la Municipalidad de Sagrada Familia para adquirir múltiples Permisos de Circulación de otros vehículos que mantenían multas impagas, siendo atendido, la mayoría de las veces, por Felipe Andrés Paredes Baeza, quien vendió esos Permisos de Circulación sin cobrar o exigir el pago de las multas pendientes de pago.

La venta de Permisos de Circulación a Raúl Alejandro Betancourt Díaz por parte de Felipe Andrés Paredes Baeza, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedecía a una autorización previa efectuada por el Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia Martín Abdón Arriagada Urrutia.

Asimismo, durante diversos períodos del año 2014 Felipe Paredes Baeza vendió, a diversos contribuyentes, 37 Permisos de Circulación con 180 multas impagas por un monto de \$7.804.807.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes,

581 Permisos de Circulación con 11.433 multas impagas por un monto de \$531.629.789.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, don Julio Enrique Hormazábal Muñoz, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 121 Permisos de Circulación con 959 multas impagas por un monto de \$46.121.504.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 155 Permisos de Circulación con 1.623 multas impagas por un monto de \$78.471.607.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Del mismo modo, Sonia Jimena Cuevas Jara durante diversos períodos del año 2014 vendió, a diversos contribuyentes, 74 Permisos de Circulación con 1189 multas impagas por un monto de \$52.754.407.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 151 Permisos de Circulación con 605 multas impagas por un monto de \$29.322.023.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Fabián Elías Riquelme Solís, durante diversos períodos del año 2014 vendió 39 Permisos de Circulación con 198 multas impagas por un monto de \$8.797.538.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió 19 Permisos de Circulación con 134 multas impagas por un monto de \$6.132.514.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Asimismo, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez, durante diversos períodos del año 2014 vendió 35 Permisos de Circulación con 496 multas impagas por un monto de \$25.225.755.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionaria municipal, desarrollando labores específicamente en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 35 Permisos de Circulación con 71 multas impagas por un monto de \$3.077.350.- y, en el año 2015, vendió 1 Permiso de Circulación con 1 multas impaga por un monto de \$43.068.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas; asimismo, instruyó a funcionarios a su cargo a realizar dicha acción ilícita.

El monto total defraudado al fisco, por concepto de multas de tránsito no cobradas, por los imputados de esta causa, asciende a la suma de \$805.382.136.-

Los imputados, ya sea en su calidad de funcionarios municipales como Felipe Andrés Paredes Baeza, Martín Abdón Arriagada Urrutia, Julio Enrique Hormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez e Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, tenían pleno conocimiento de la existencia de dichas multas pendientes de pago, debido a que dicha información había sido remitida a todos los Municipios de Chile por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación Nacional en forma previa al inicio del proceso de venta de Permisos de Circulación del año 2014 y 2015, tal como lo hace todos los años y además está disponible para cualquier persona que lo requiera.

Todos los delitos son en grado de Consumado y la responsabilidad de ambos acusados es en calidad de autor.

Se hace presente que, con fecha 30 de agosto de 2022, se arribó a una Suspensión Condicional del Procedimiento con los imputados Felipe Andrés Paredes Baeza, Julio Enrique Hormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís y Leticia Gabriela Saavedra Ramírez.

Los hechos descritos tipifican el delito de **Fraude al Fisco**, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en calidad de autores y en grado de desarrollo de consumado, atribuyendo a los acusados, responsabilidad a título de autores en el delito señalado, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

A juicio del acusador particular concurre respecto de los acusados, la circunstancia atenuante de responsabilidad penal señalada en el artículo 11 N°6 del Código Penal y solicitó se condene al acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a la pena de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y al pago de las costas, como autor del delito de fraude al Fisco, en grado de desarrollo consumado. Por su parte, a la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinosa, se le condene a sufrir, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a la pena de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u

oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y al pago de las costas, como autora del delito de fraude al Fisco, en grado de desarrollo consumado. En el alegato de apertura, expuso que el juicio trata sobre corrupción municipal, los hechos de la acusación no son cosas que ocurren en un día determinado, son pensados, no se cobraron las multas, estando obligados por ley. Los permisos de circulación de Sagrada Familia, que es una comuna de bajos ingresos, trataron de llevar ingresos se vendieron pero no en la forma que la ley determina. Se juzga a quienes tuvieron la idea e hicieron posible la defraudación en el municipio, son más de ochocientos cinco millones de pesos, que el fisco dejó de percibir en su oportunidad, también otras municipalidades representada por el Consejo de Defensa del Estado. Los testigos de contraloría indicaran que ocurrió, vendrán los funcionarios de la PDI encargados de la investigación, los funcionarios municipales que dirán quién los instruyó y de qué forma lo hicieron. El cómo, cuándo y dónde, se determinara en el proceso, indicarán quienes lo ordenaron y cómo los instruyeron a participar, se ha visto en otras municipalidades. El caso más emblemático fue la causa conocida por el Tribunal Oral en lo Penal de Talca, Ruc N°1301241867-6, en que se dictó una sentencia condenatoria. El artículo 239 es importante, igualmente el artículo 24 de la Ley 18267, para los efectos de llegar a esta conclusión. Los antecedentes de prueba implican una gran cantidad de dinero y esperan que se termine condenando a los acusados Martín Arriagada Urrutia e Isabel Vásquez Espinoza, a las penas solicitadas en la acusación particular.

En la clausura aseveró que la corrupción municipal, quedó más que demostrada la figura de defraudación fiscal, del artículo 239 del Código Penal, es el tipo aplicable, ya que este delito capta el engaño e incumplimiento de deberes, el clientilismo político, el enriquecimiento particular o de terceros. Luis Bates en el año 2008, señaló que la corrupción es un hongo que crece en la oscuridad e ilustra de la deficiencia para perseguir la responsabilidad en esta clase de delitos. El concepto de corrupción se vincula a una administración torcida de los funcionarios públicos, así la justicia penal que es la última barrera de protección. En el juicio se conoció como funcionaba la maquinaria de venta de permiso de circulación, sin cumplir con la ley, no fue controvertida la calidad de funcionarios públicos de los acusados, de acuerdo al 260 del Código Penal. Sabemos que es difícil descubrir las irregularidades, pero cuando los concejales alzaron la voz, se pudo

comenzar con la investigación, así lo hicieron Floriano Cruz y Anselma Hernández, se puso iniciar la investigación por funcionarios municipales. Por su parte, Carmen Velasco, incluso mandó un mail a los funcionarios de la municipalidad, el 02 de abril 2015, era tesorera y se percató que en los 2014 y 2015, había gran cantidad de permisos de circulación sin pago de multas. El alcalde e Isabel Vásquez instruían verbalmente el cobro de permisos sin pago de las multas, a los funcionarios encargados de la venta, era lógico, así defraudaron a cada una de las municipalidades donde se causaron las multas y al Fondo Nacional de Municipalidades, que se vieron privados de un lucro legítimo. Los artículos 24 y 24 bis, dicen que no se puede proceder a la venta de permisos de circulación mientras las multas estén vigentes, en registro de multas del Registro Civil, en base a la información de los Juzgados de Policía Local, deben pagarse para ello debe pagarse las multas debidamente reajustadas, más el arancel. La municipalidad que recibe el pago multa de un Juzgado de Policía Local de otra comuna percibe el 20% del monto, el 80% restante va al registro, junto al arancel que corresponda para que proceda eliminar la anotación, a su vez en los 90 días siguientes el registro remite a la municipalidad respectiva el porcentaje de la multa enviado, tratándose del arancel a que se refiere el inciso 6 del artículo 14 de la Ley N°18.287, lo entregará directamente al Fondo Comunal Municipal, a no ser que sea una infracción de las que señala el inciso 1 del artículo 14 citado, que solo entrega el 50% al fondo señalado y el resto va a la municipalidad de asiento del Juzgado de Policía Local que impuso la multa. Martín Arriagada Urrutia conocía y autorizaba estos eventos, en concierto con Raúl Betancourt, quien no declaró en el juicio, porque falleció, pero sí lo hizo en el procedimiento, dijo que compró permisos con multas impagas, que no se exigió el monto de las multas, con el objeto de recibir los ingresos. Se valió de ese mecanismo para su provecho personal, debido a que entre los permisos de circulación esta la PPU FGYL 85, comprado por este a nombre de su madre. Declaró Giuliano Espinoza, el tercero que compró el auto y dio cuenta de los múltiples problemas que tuvo para obtener los posteriores permisos de circulación. El informático, dijo que cargaba los computadores de los funcionarios, que el equipo no giraba si no estaba cargada la información, además del resto de giradores encargados de vender los permisos, quienes señalaron que estando en conocimiento de las multas impagas, no exigieron el pago y giraron los permisos, instruidos por los acusados. Los informes contables de la perito del Lacrim, detectaron que en el 2014,



397 permisos de circulación asociados 3248 multas no cobradas ascendentes a \$150.707.784 y en el 2015, 939 permisos de circulación asociados 627 ascendentes a \$675.585.982, superan con creces las 400 UTM, a la fecha de los hechos. Los reintegros no influyen en la calificación jurídica, solo podrían constituir una atenuante, como indica la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 223 -2006 y el TOP de Puerto Montt Rit N°646-2018. Se probó el perjuicio más allá de toda duda razonable, además, de los fundamentos de la demanda civil interpuesta. En la réplica, manifestó coincidir con el Ministerio Público, solo hizo presente la causa Rit 9022 del TOP de Puerto Montt, que, en contrario de lo señalado por la Defensa de Arriagada Urrutia, señala que el delito es una estafa especial, un delito de administración desleal, en coincidencia con la postura de la Corte Suprema, expresada en la sentencia Rol N°646-2018. El reintegro, no influye en la calificación jurídica, solo se configura la atenuante del artículo 11 N°7 del Código Penal. El Consejo de Defensa del Estado, representa a la municipalidad de Sagrada Familia que se vio privada de un lucro legítimo y de todas las municipalidades del Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

En la audiencia prevista por el artículo 343 del Código Procesal Penal, solicitó para los acusados, de acuerdo a la norma vigente a la época de los hechos, la pena de de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en virtud del inciso 2 del artículo 239 del Código Penal, las accesorias legales y costas. Hace suyas las alegaciones del Ministerio Público.

**TERCERO:** Que, la Defensa del acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, señaló en el alegato de apertura que para entender y comprender los hechos y con ello otorgar al tribunal las herramientas para resolver en derecho y justicia el conflicto jurídico, necesariamente se debe embarcar en una cápsula del tiempo en el tiempo hasta los años 2014 y 2015, porque los hechos ocurrieron en esa época, situación puntual radicalmente distinta a lo que ocurre hoy día, que es diametralmente opuesto a lo que existe hoy día en cuanto a lo que ocurre en el pago de permisos de circulación. Analógicamente, respecto al desarrollo de internet, cuando salió al mercado en el año 2014, el celular iPhone 6 era el más moderno, al poco tiempo se descubrió que tenía falencias, por ejemplo, el GPS, no era eficiente o certero. En octubre de este año, salió el iPhone 15, que no tiene el problema, hoy el tribunal no puede analizar los efectos al día de hoy, debe ir al 2014. Se acreditará

que la situación era diferente, el sistema era arcaico, el Registro Civil en el mes de diciembre o enero, remetía la nómina de patentes con multa, el corte era el día 30 de noviembre, cuando se vendieron los permisos en el año 2014, contaban con un disco compacto otorgado por el Registro Civil con información al 30 de noviembre de 2013, por tanto, si se pagaba la multa en diciembre de 2013, enero o febrero de 2014, ese girados no tenía la información. Se acreditará por oficios remitidos por el mismo Registro Civil que esa situación causaba molestia en los usuarios. El Registro Civil instaba a las municipalidades incorporar la información, para eliminarla. Se acreditara en el juicio que el día de hoy siguen apareciendo placas patentes con multas que fueron pagadas el 2010, acompañaran documentos para probar que se pagaron el 2010. Muchas veces los dineros que se recibían por multas no se remitían y el Registro Civil no las eliminaban, las multas por TAG el año 2013, no aparecían y lo hacían el año 2015. Esa es la realidad, situación que hoy no existe, todas las municipalidades estaban en línea, existe la nube. Necesariamente se debe retrotraer a la realidad a la época de los hechos. En el fondo, se imputo a su representado, autorizar y dar instrucciones, para que supuestamente, porque la relación debe ser circunstanciada, lo que se imputó fue dar a Felipe Paredes Baeza la orden de vender permisos de circulación sin cobrar previamente las multas impagas. Se logrará acreditar que jamás su defendido lo hizo, que no dio la orden a Felipe Paredes Baeza o algún otro, para que realizaran las conductas, por el contrario, hay informes de la Contraloría y Municipalidad, que indican que cuando el Alcalde tomó conocimiento por terceros que se vendían patentes con multas impagas, dio la orden de hacer auditorias e instruir sumarios, los que también ordenó la contraloría, que determinaron que no había responsabilidad administrativa, que se debía a defectos tecnológicos. El alcalde habla, a través, de actos administrativos, mediante ordenanzas, decretos exentos o instrucciones, que debe constar por escrito, dentro del procedimiento administrativo rige la escrituración y no hay documentos en que se indiquen las instrucciones. Se habló por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, perjuicio del Fisco, el que ascendería a una suma de ochocientos cinco millones de pesos, pero no se debe olvidar que el fraude al fisco es un delito de estafa, en que el sujeto activo debe ser funcionario público, pero es un delito de resultado, para consumarlo debe existir el perjuicio, sin embargo, con la prueba se probará que el ochenta por ciento de las patentes del 2014 y 2015, hoy las multas no existen, fueron

pagadas y los montos ingresaron al fisco, con reajustes y recargos, si bien pudo haber pago diferido, ese pago ingresó con reajuste y recargos, por tanto, no se puede acreditar el perjuicio y se deberá una sentencia absolutoria.

En la clausura sostuvo que, como lo indicó en la apertura para tener conocimiento de la forma en que ocurrieron los hechos y contar con las herramientas necesarias para entender el conflicto, era necesario retroceder en el tiempo y después de seis días de juicio, lo señalado está corroborado. Se acreditó que la falencia del sistema era mayor que las consideradas en el principio y la defensa sostiene que procede dictar una sentencia absolutoria, pues los acusadores no lograron acreditar que se configuró el fraude al Fisco. Se debe tener presente que el artículo 239 del Código Penal, establece la figura especial de estafa, que requiere un sujeto activo especial, un funcionario público, como dice la jurisprudencia y doctrina, defraudar al estado o las municipalidades, impidiendo obtener una ganancia o perdiéndola, el elemento de perjuicio es fundamental. Se debe tener presente que el legislador requiere que exista, también, que debe estar plenamente determinado, de forma real y efectiva, no una mera expectativa. El mismo artículo 239 establece que al imponer la pena principal y la accesoria se debe tener en consideración el monto de lo defraudado, vigente al año 2014, porque la norma fue modificada al año 2018. Entonces, ¿a cuánto asciende el monto?, es relevante para la pena accesoria, considerando que el Ministerio Público no lo probó, tampoco el acusador particular, no establecieron el monto del perjuicio. Acá el Ministerio Público acompañó como único elemento de prueba el informe de Pamela Salinas, exhaustivo y completo, admirable, pero en definitiva no puede tener valor probatorio en el juicio, pues señaló expresamente que la información que tuvo a la vista fueron los CD que puso a disposición la Fiscalía y que incautó desde la Municipalidad de Sagrada Familia. Ricardo Hormazábal señaló que todos los años en diciembre el Registro Civil, remitía los CD a las municipalidades, pero reconoció que la información solo era cargada en la oficina del administrador y que la municipalidad contrataba a la empresa Cas Chile, que según dijo no tenía buena fama. Quedó acreditado que la información de los giradores era de Cas Chile, luego ¿cómo se puede establecer, que la información que cargaba Cas Chile era la misma que tenía el CD del Registro Civil?, no se puede, lo único que se tiene, es que se usó los CD, que no eran usados por los giradores. Se requiere el original. También la perito, sindicó que se percató que algunas multas no

pagadas el 2014, se repetían en el 2015 e igualmente se giraron los permisos, habló de 149 PPU, de esas multas veinte fueron sumadas al total y le dio \$150.000.000, debió reconocer que fueron consideradas en el 2015 y formaron parte de la sumatoria. Esas multas no fueron descontadas en el 2015. ¿Cuánto es el monto de lo efectivamente defraudado? Hablamos de 805 millones o de otras cifras. Además, la perito dijo que pueden haber existido otros documentos que no se obtuvo, que se limitó hacer el informe con lo que contaba. En cuanto a la famosa patente de la madre de su representado, no pagadas las multas, del informe de la perito, aparecen en el 2015, ocho multas, con la prueba presentada por la defensa N°23, de las ocho, seis fueron pagadas en enero de 2015, no fueron descontadas por la perito, el sistema no lo hacía presente, cuantas de las multas no estaban pagadas y no aparecían en el sistema, el Registro Civil instaba a remitir a la brevedad las multas pagadas para evitar problemas de los usuarios, porque las municipalidades no mandaban el pago o había problema en los formularios, como lo dijo una testigo de la defensa Ana Lillo. Tampoco se determinó si todas las multas no pagadas realmente los estaban. Con los documentos acompañados N°18, 19 y 20 se pudo acreditar que, de las 397 Permisos con multas vigentes del 2014, al 30 de noviembre de 2021, actualizadas aparecían 218 pagadas. ¿Cuándo se pagaron? Tal vez muchas fueron pagadas en el año 2014 y por problemas del sistema no aparecían registradas, Velasco dijo que un usuario tenía plastificado el comprobante de pago de una multa, porque continuaba apareciendo cada año en el sistema. En el año 2015, 939 permisos de circulación girados con multas vigentes, de acuerdo con la prueba N°19, hay 407 PPU del año 2014, que no registran multas al año 2021 y la prueba N°20, demuestra que existen 79 PPU del año 2015, hoy no registran multa. Sostiene que el Ministerio Público no logró acreditar de manera fehaciente cuanto es el monto que efectiva y definitivamente se defraudó al estado, al no estar determinada la cuantía, impide dictar cualquier sentencia condenatoria. Es importante porque determina la pena principal y las accesorias. Las declaraciones de los giradores en el juicio, todos recordaron ir a Santiago, para vender permisos a personas, la mayoría con multas impagas y aceptando que los giraban. Entonces, que credibilidad se les puede dar, si ellos en sus primeras declaraciones todos negaron vender permisos de circulación con multas impagas y negaron ir a otras comunas a vender permisos. Casi todos fueron formalizados el 2019 y 2021 y todos cambiaron sus declaraciones, dijeron que vendieron en Santiago, que fueron instruidos por

el Alcalde y la señora Alejandra. Todos fueron sujetos de suspensión condicional del procedimiento. Felipe Paredes mencionó que se contactaron, dijo que se llamaron, pero es claro para hacer una declaración común, son prácticamente idénticas. ¿Felipe Paredes es creíble?, cuando reconoció que mintió al Ministerio Público, reconoció que mintió, tuvo que admitir que entregó la clave a Ignacio Arancibia. Fernando Oyarzun, Director de Tránsito, sin conocimiento en computación, tenía su edad, acá en el tribunal, dijo que Oyarzun nunca le dio instrucciones a Felipe Paredes. Cabe preguntarse ¿cuándo dijo la verdad Paredes? en la primera, segunda o tercera declaración, o cuando declaró en el tribunal. Por último, se dijo que su representado no tomó ninguna conducta al conocer de los hechos, sin embargo, él ordenó el 2015 hacer una auditoria, lo hizo Control Interno en el mes de julio de 2015, evacuó un informe, había errores, después la Contraloría hizo el informe y seguimiento, ordenó hacer un sumario, que resultó con sanción alguna. Luego la municipalidad suscribió un convenio con la Contraloría, cumplieron el 100% de las observaciones y hoy tienen huella digital que impide la falsificación de documentos. para concluir, solicitó la absolución de su representado. En la réplica, aclaró que el requisito del perjuicio es que sea real y efectivo. El informe no tiene fuerza probatoria pues parte de una premisa equivocada, la información no sabemos si es idéntica a los de los giradores. Giuliano Espinoza en el 2016, fue a la Municipalidad de Teno, le dijeron que la PPU tenía multas por \$4.000.000, después fueron a la Municipalidad de Sagrada Familia y tenía 2 multas que sumaban \$82.000. Lo mismo dijo la señora Vásquez, que un contribuyente en Molina reclamó por una multa que aparecía en Molina con multas y consultada en sagrada Familia no tenía y que las verificó en el sistema central y tenía multa. Supuestamente todas las municipalidades tienen diferente información y todas supuestamente emanan del Registro Civil. Los perjuicios debieron acreditarse en el juicio, están fuera de tiempo.

En la audiencia prevista por el artículo 343 del Código Procesal Penal, afirmó que de acuerdo al tenor del artículo 239 del Código Penal, a la época de los hechos, solicitó se imponga a su representado la pena de 21 días de prisión en su grado medio, por concurrir la atenuante del artículo 11 N°6, acreditada con el extracto de filiación y antecedentes, la atenuante del artículo 11 N°7 del mismo código, por procurar con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. En el 2015, las 8 multas del auto de la madre de su defendido fueron pagados en enero 2015 antes del 31 marzo 2015 y en el

2016 se pagó las dos multas restantes por su representado. El informe de la perito, las multas pagan recargos legales y reajustes, por tanto, lo pagado o lo recibido por el Fisco fue lo mismo que si fueran pagadas oportunamente. Se le imputa más, pero el artículo señala impedir ulteriores y perniciosas consecuencias, cabe recordar que los funcionarios declararon en el juicio, formularon cargos en contra de su defendido, algunos al percatarse la emisión de permiso sin pagar, llamaron y algunos habrían pagado, la Contraloría se constituyó, hizo una fiscalización, hizo el informe 1121, su representado estableció un plan de seguimiento para subsanar las observaciones del informe, en el informe de seguimiento de 10 de octubre de 2017, la Contraloría dio por subsanadas las observaciones. Especialmente en relación a los permisos, los testigos dijeron que se crearon manuales para emitir permisos, se confeccionaron otros mecanismos y se capacitó a giradores. El alcalde suscribió voluntariamente un convenio con la Contraloría, todos sabemos que el 2018, la Contraloría dio por cumplido lo programada en el convenio. También se probó, de acuerdo al informe de la perito, que 397 permisos emitidos con multas, 218 estaban sin deuda al 2021, que debieron ser pagadas, el 2015, se estableció que 939 permisos con multas, 400 no tenían multa alguna, se acompañó certificados de 79 permisos con multas, posteriores al 2015, cuyas multas están pagadas. El menoscabo sufrido por el fisco en cierta medida, fue reparado o impidió sus ulteriores perniciosas consecuencia. Como corolario, La Casa de Moneda otorgó el sello de huella digital. Considera que se configura lo dispuesto por el artículo 103 del Código Penal, la media prescripción, está claro los hechos ocurrieron en el 2014 y 2015, concluyeron el 1 de abril de 2015, se hizo denunció en 2015, la investigación no fue contra persona determinada, requisito para decir que el procedimiento se dirigió contra persona determinada. El único hecho para establecer que el procedimiento se dirigió a su representado fue con la querella del Consejo de Defensa del Estado, el 12 de noviembre de 2020, la formalización el 25 de agosto de 2021, entremedio, desde el 01 de abril de 2015, transcurrieron más de cinco años. Se debe atender a la pena en concreto o en abstracto. Si es pena de crimen, prescribe en 10 años, de acuerdo 94, entonces lleva más de la mitad del tiempo necesario, de acuerdo con el artículo 103 se entiende de dos o más atenuantes calificadas. Si el tribunal impone una infracción inferior de cinco años y un día, estamos frente a un simple delito, incluso alegarían la prescripción de la acción. Media prescripción, nos remite a las reglas de los artículos 67 y 68 del Código Penal, con dos

atenuantes muy calificadas, sin agravantes, la rebaja es desde el grado medio, es decir, 41 días de prisión en grado máximo, además, hay dos atenuantes comunes, de acuerdo al artículo 67, procede rebajar al menos un grado, a la pena ya rebajada, quedamos en 21 días de prisión en su grado medio, sin perjuicio, si es simple delito estar prescrita. En cuanto a la multa, que va de 10% al 50 % del perjuicio causado, conforme al artículo 70, faculta al tribunal para rebajar la multa al mínimo, atendiendo a las circunstancias concurrentes, los caudales del acusado que está suspendido y sin remuneración, tiene tres hijos escolares, pide el tribunal hacer uso de la facultad y rebajar la multa al 2% de lo defraudado. Además, pide que cumpliendo con todos los requisitos del artículo de la Ley 18.216, solicitó se sustituya la pena por la sanción de remisión condicional. Sobre las costas, pidió se exima por no haber sido totalmente vencidos, fue condenado por menos de lo solicitado en la acusación. En cuanto a la demanda civil, solicita sea rebajada, al 2% atendido a que el Consejo no acompañó prueba alguna, no acreditó el daño real sufrido, muchas de las multas se encuentran canceladas y pagados y no rindió prueba para comprobar daño emergente ni el lucro cesante. La venta del auto de la madre del alcalde fue en marzo 2015, la multa fue pagada en enero 2015. La prescripción requiere que se dirija la investigación en contra de persona determinada. Cuando se dirige derechamente es por una querella, que se presentó en noviembre de 2020.

A su vez, la Defensa de la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinosa, en el alegato de apertura expresó que los acusadores trajeron los hechos bajo los supuestos del artículo 239 del Código Penal. Esa norma razona en torno a dos hipótesis, el funcionario público que en razón de las operaciones en que interviene defrauda al fisco y lo priva de un lucro legítimo. Cabe preguntarse al inicio de la audiencia, como se sostiene que Isabel Vásquez Espinoza, en el rol, posición y la función que cumplía en la Municipalidad de Sagrada Familia, pudo causar un perjuicio en la cuantía señalada o privó al Fisco de un lucro legítimo. Además, en la audiencia se dotará de contenido evidenciario a todos y cada uno de los supuestos del tipo penal. Cabe recordar que conforme los autores Millas y Fuelleo, fundamentar una sentencia es sumergirse en el abismo que significa cada palabra. Se dio lectura de la acusación, dice que el monto total defraudado por multas no cobrados, asciende a ochocientos cinco millones de pesos, la acusación no dice un total de multas condonadas, no pagadas, simplemente multas no cobrada, y como dijo el Defensor Rivera

Baeza, no cobradas en principio, con la estructura y organización de una municipalidad, en relación con el Registro Civil, Registro nacional de multas y la Contraloría General de la República, apreciada esa organización y estructura al año 2013. Conforme la cronología de los hechos es relevante, para apreciar que hizo o no hizo Isabel Vásquez Espinoza, para imputar a una como contribuyó de forma eficiente al supuesto perjuicio o por el contrario que no ocurrió una cosa u otra, por la intervención, rol, posición y función de su representada en el desarrollo en la organización compleja, donde no todo es control de todo, que terminó siendo felicitada por la Contraloría, la municipalidad y levantaron con ella un plan piloto, sobre cómo se debe hacer bien las cosas a nivel nacional, lejos del supuesto ejemplo de corrupción, entendida como entrega leal y eficiente al cargo. El alcalde y su representada jamás se llevaron un peso, esto sería eventualmente un fraude por mera contravención normativa del artículo 24 de la Ley 18.287, algo como una célula sin núcleo, o sea una infracción de una regla administrativa de tiempo y oportunidad, pero no un delito. Adelantó que se va a controvertir los elementos que tipifican el fraude al fisco, que pedirá la absolución de su representada y particularmente, al final solicitará el rechazo de la demanda civil. Pidió poner atención en la cronología, del quién y cómo se hizo, así con la evidencia y declaración de su representada, llegarán a la conclusión que su defendida no intervino en la elaboración de un engaño, contribución a un perjuicio o privó al fisco de contribución alguna y terminaran reconociendo que la Municipalidad de Sagrada Familia fue ejemplo de eficiencia y no de corrupción. Las razones de por qué una funcionaria de ese carácter se vio envuelta, las dirán otros, las que no son materia del juicio.

En el discurso de clausura adelantó que la principal premisa es una sola, la señora Vásquez debiera ser absuelta por las consideraciones que pasa a señalar y que serán justificadas una a una. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y las Defensas se plantearon un reto jurídico, sobre los elementos del tipo, que trajo al estrado a su representada como imputada en calidad de autora directa en un delito de fraude al fisco que habría causado cuantiosos perjuicios al Fisco. Sostiene que la construcción de los acusadores, no puede sino ser la siguiente, infracción al artículo 239, que tiene dos hipótesis, defraudar o provocar al Fisco una pérdida, privando de un lucro legítimo, la primera es un fraude hacia dentro, la segunda la segunda un incumplimiento de deberes intrapenales, porque no hay delito ni pena sin ley, es la garantía uno de todo



justiciable, de acuerdo con el artículo 19 N°3 y el 5 inciso 2 de la Constitución Política y los artículos 14, 15 y 18 del Código Penal. La tesis de los acusadores no cubrió todos los extremos típicos, dijeron que su defendida en su intervención fue coautora de un fraude mayor a partir de cierto emprendimiento, con la voluntad de defraudar al Fisco, delito de emprendimiento de voluntad interna intensificada. La infracción del deber, como dijo el Consejo de Defensa del Estado, sería de los artículo 24 de la Ley N°18.287, que no es sustantiva, es de procedimiento ante los Tribunales de Policía Local, entonces toda remisión es posible para configurar un tipo penal, la verdad es que no, se interpreta restrictivamente, no se puede aplicar de forma analógica, en este caso, se planteó la posibilidad de sancionar a su clienta, por una intervención pública que no ha tenido, en un tipo penal que no la contempla. Por si fuera poco, Roxin, en su libro “Cuestiones Actuales de Dogmática Penal”, a propósito de infracciones de deberes intrapenales, establece que no cualquiera desobediencia nos convierte en delincuente, solo aquellos de deberes especiales intrapenales y directos, que lesionan un bien jurídico puesto sobre las espaldas del funcionario público, en la medida que en las operaciones en que interviene fuere competente. Se debe analizar si actuó con competencia en la función pública, privándola de un lucro. No era la encargada de tránsito, quienes estaban a cargo, por ejemplo, eran Carmen Velasco, quien en el minuto 31y 32 segundos de su declaración así lo dice, María Elizabeth Tapia, en el memorándum 61- 2015, en la evidencia 44 de la defensa, se dice quién es responsable de la campaña, que eso nunca fue puesto en discusión, Marisol Silva en relación con Francisco Barrios, en la pista 94-3 minuto 18:50, dice que cuando “se está a cargo del departamento de tránsito, es estar a cargo de otras personas”, el director a la época era Fernando Oyarzún, minuto 14:16 así lo reconoce, Carmen Velasco, en el minuto 31:56, lo dicen las pruebas documentales 43, 44 y 45, que dejan establecidos los ámbitos de competencia en razón del cargo, de quienes debieran tenerla por definición y función, pues no existe posesión funcional de hecho y contributiva a un delito por parte de su defendida, que pueda configurarse de facto en una posición jurídica para integrar un tipo penal, no es posible sostener que fuera autora o coautora de fraude, ya por engaño o coparticipación, menos por sumarse a un curso delictivo ajeno, porque no estaba en las actuaciones propias del cargo. la Corte Suprema, conociendo de un recurso de nulidad en una causa sobre fraude al fisco, que dejó sin efecto una condena de la Ministra Rutherford, dejó establecido

que no se configura malversación por una posición de facto, por estar de facto a cargo de los caudales, debe ser de iure. Establece la correcta doctrina, es una malversación o forma degradada de fraude. Otros ejemplos que la directora subrogante de control, como era la señora Vásquez, ejecutaba labores temporales, quedó establecido en el decreto 697, las pruebas 8, 9 y 7, los decretos 22 y 25 y otras evidencias. En cuanto a una participación como coautora, es decir, contribuir con su participación a un hecho común, objetivamente común, hay varios testigos, que dijeron que nunca presenciaron una situación en tal sentido. Haberse sumado para defraudar al Fisco, tampoco es sostenible, varios giradores Juan duque, Jacqueline Urrea, dijeron no haber presenciado una orden de parte de su defendida, no les dio una orden en tal sentido, también lo dijeron los denunciantes. Fabián Riquelme, señaló que si había multas impagas no se podían girar los permisos, así lo ordenó Vásquez. Quienes son los únicos testigos que dijeron que recibieron órdenes de la señora Vásquez y la involucran. Primero hay que decir que su representada intervino en la renovación de 36 permisos, la perito del Lacrim, quedó en evidencia, que lo que podía haber percibido el Fisco era la posibilidad de usar el dinero, entre el mes de marzo y la época del pago, eso es frustración de finalidad, no es perjuicio, si lo fuera sería el interés promedio bancario por la eventual incapacidad de uso del Fisco, no más de \$77.850 y habría sido competencia del Juzgado de Policía Local, sería fraude de bagatela. Trataron de obtener una suspensión condicional del procedimiento, no entienden por qué se negó el Ministerio Público. El tribunal puede preferir a quien creerle, pero como bien dice Osorio y Gallardo, dice “En el alma de la toga”, “la verdad tiene el vuelo de la golondrina, es recto, la mentira, vuela como el murciélago, en zig zag y muerde los talones como las serpientes traicioneras”. El señor Paredes en su pista, reconoce en cuatro ocasiones haber mentido, Julio Hormazábal, en el minuto 15:50 y 19:45, Saavedra en el minuto 3:25, el principal denunciante reconoce en el minuto 03:00 que llamó a su representada, para que cambiara su declaración, imputara al otro acusado, para salvarse ella. La declaraciones son incongruentes, inconsistentes, absurdas, poco confiable y manipuladora de la justicia, no cuesta sostener algo así, la verdad es bochornoso. Problemas del sistema de multas, el perjuicio incluso en un fraude como administración desleal, que no cabe, quien tienen recursos fiscales competencialmente, como ocurrió solo en Antofagasta con la señora Rojo, no son aplicable, no es sostenible en la estructura del tipo, decir que es coautora de fraude,

de haber infracción al artículo 24 de la Ley N°18,287, se incurre en responsabilidad administrativa, que prescribe en 6 meses y se extingue en 4, si ha sido ejercida y declarada en sumario, a saber, en el sumario fueron sobreseídos y nadie reclamo, la Contraloría tampoco lo objetó, el hecho ya fue juzgado, no podría ser doblemente juzgado y de forma más intensa en el sistema penal. Debe ser absuelta como coautora en la cuantía señalada, además, absuelta de la demanda civil, porque si alguna intervención tuvo por omisión, de un deber no penal, debió ejercerse la acción en un juicio de cuenta, pero todas y cada una de las multas están pagadas, no hay perjuicio fiscal, han de ser distinguidas las que son de pódicos de las de tránsito, 80 - 20 y 50-50, quien es destinatario del 80% el Fondo Nacional Municipal y en las otras las municipalidades más carentes del país , ninguna se ha querellado, tampoco hay víctimas, por tanto, su representada debe ser absuelta. En la réplica, aclaró que el tipo penal de administración desleal comenzó a regir en enero de 2019, los hechos son del 2014 y 2015, vulnerar la irretroactividad de la ley penal, no se puede pedir a un tribunal penal especialista en la materia. Considerar que el fraude fuera un delito de mera actividad o peligro, que por el solo hecho de renovar el permiso y no cobrar la multa, se produce perjuicio, es contradictorio, es errado. El capítulo primero del libro citado sobre las estafas de Hernán Silva Silva, habla concepto de perjuicio y cita a Antón Oneca, que señala perjuicio es un detrimento económico irremontable e irrecuperable, por tanto, durante este tiempo las acciones del fisco estuvieron a salvo, además, si el fisco no pudo hacer nada hasta el reintegro, no es perjuicio. Sobre el momento de consumación del delito, en relación con la intervención de su representada, no puede sostenerse que era encargada de venta, si nunca tuvo esa designación, eso no fue probado y no discutido, tal como sería que el perjuicio es distinto al señalado en la acusación, porque de lo contrario sería vulnerar el principio de congruencia.

En la audiencia prevista por el artículo 343 del Código Procesal Penal, la petición principal, dice relación con que se declare la completa prescripción, se estableció un delito, con reglamentación al 2015, hace aplicable el artículo 239 del Código Penal en el inciso primero, segundo es facultad del tribunal, de acuerdo con la reiteración y características del hecho. Respecto de un hecho, como señala el veredicto, el hecho se integró en marzo de 2015, la querella es de 13 de agosto de 2021, entremedio, no hubo formalización, ocurrió el 21 de agosto de 2021, que produce el efecto de la interrupción de la prescripción. Más aun

la primera vez que declaró como imputada fue el 21 de noviembre de 2021, después de la querrella y formalización. Antes no hay diligencias determinadas en contra de ella como imputada de un delito. La primera vez que se menciona en la investigación fue en febrero de 2021. La denuncia es genérica, de fecha 09 de abril de 2015, se exige un indicio que conecte a una persona con el hecho que se pide investigar, ello no ocurre. La primera querrella fue del 17 de enero de 2017, en contra otros imputados, la formalización fue en noviembre del año 2020. En consideración de lo dispuesto por los artículos 103, 67 y 68 del Código Penal, la responsabilidad está extinta de acuerdo al artículo 93 del Código Penal. Sin perjuicios que el tribunal considere, teóricamente que los hechos tuvieran pena de crimen, lo que no será posible, pues un delito con una cuantía de tres millones y fracción, es decir, de más de 40 y menos 400 UTM, la pena es de presidio menor en su grado medio, debido a que la regla del artículo 68, establece que si está revestido de dos o más atenuante, sin agravantes, el tribunal puede rebajar dos grados y hasta tres, como cuando existe media prescripción. La consecuencia es esta, el marco penal es de presidio menor en su grado medio, rebajado dos grados, por concurrir las atenuantes del artículo 11 N°6, 7 y 9, porque su defendida prestó declaración, aportó antecedentes, inicio las primeras investigaciones en un sumario, hizo una reparación de mal causado, además, reconoció su responsabilidad, sin escamotear nada, dijo que los giros fueron 35, lo que liberó al Ministerio Público de la carga investigativa, tampoco en la Fiscalía lo negó. Tiene tres atenuantes, de no acoger la prescripción integra, queda relegado a prisión en su grado medio en su grado medio, de 21 a 40, pide el mínimo. Sin embargo, como segunda petición, si entiende el tribunal que al final de las reglas de determinación de pena, se establece una regla de tope, como el marco penal asigna al delito una pena de multa, no se puede aplicar dos multas, no se puede seguir bajando. La norma dice que siempre se impondrá la pena de multa y señala que puede ir del 10 % hacia arriba, en consecuencia, de acuerdo a esa regla y el artículo 70 del Código Penal, esa multa del 10% solicita se rebaje a la mitad, al 5%, de \$3.125.000 a \$175.000, que equivale al 5%, como el reajuste e interés del dinero que ingresó más tarde a las arcas fiscales. Además, sostiene que concurren tres atenuantes y que se ingresó un informe social, que da cuenta de los ingresos y medios honestos de vida de la señora Vásquez, de su situación laboral en la municipalidad, con treinta años en la administración pública, que vive de esa remuneración, parece razonable

aplicar la multa en el mínimo, ya sea para determinar el monto de multa o la pena de prisión en su grado medio. Solicitó la sanción sustitutiva de remisión condicional de la pena de 21 días de prisión en su grado medio, dejando claro que no es inhabilitante y no la priva de ejercer el cargo, no la suspende de su capacidad ganancia en la administración pública, además, es la primera condena, de acuerdo a la ley N°18.216 y demás normas adjetivas, se ordene la omisión de la condena para su plena reinserción laboral y social. En cuanto a las costas, coincide con la defensa del señor Arriagada, no fue totalmente vencido, se estableció un solo hecho de menor entidad, no hay reiteración, ni la totalidad de la pena solicitada, por tanto, pidió fuera liberada del pago de costas. Respecto a la acción civil, está establecido el hecho y hay condena, pero lo que no se puede discutir es la fuente, no así el quantum y la demandante no rindió prueba. Solo pide que se acoja, solo por el 5% del valor establecido, entre marzo a septiembre de 2015, por la indisposición del Fisco de los dineros, por una suma no superior a \$175.000. Citó a Enrique Paillás, que analiza ocho teorías para dirimir cuando se dirige la acción penal contra un imputado, ninguna diligencia efectuada contra un tercero sirve para interrumpir la prescripción. Una referencia en documentos aportados por la municipalidad, una clave de usuario no es una diligencia incriminante, no puede ser considerada una diligencia contra determinada persona, estaban recolectando antecedentes. La Contraloría ha dicho que si se impone una pena hasta tres años, para salvaguardar la administración, que no se puede dar el lujo de perder funcionarios capacitados, carabineros, marinos por ejemplo condenados por conducción en estado de ebriedad, los mantiene en funciones, sin aplicar la suspensión temporal, en su defecto, solo puede aplicarse por el tiempo de la pena corporal.

**CUARTO:** Que, los acusados, conforme autoriza el artículo 326 del Código Procesal Penal, prestaron declaración en el juicio y cada uno en su caso, expuso lo siguiente:

Martín Abdón Arriagada Urrutia: Llegó a la comuna el año 2000, se fue a trabajar con su padre desde que pidió la baja de la aviación y se hizo cargo del negocio, trabajó por seis años en la ferretería de su familia, donde conoció la comunidad. En el año 2008 tomó la decisión de ir de candidato a concejal, salió electo. En el intertanto fue el terremoto, donde realizó ayuda a la comunidad para levantar la comuna, aquello le permitió ganarse el aprecio de la gente y postuló a la alcaldía el año 2012. Empezó como alcalde el día 6 de

diciembre de 2012, no era algo completamente nuevo, porque fue concejal. Comenzó a trabajar en diciembre 2012, después le comentaron de las campañas de permisos de circulación, el Administrador Municipal, Eugenio Rojas con el jefe del Departamento de tránsito comenzaron con la campaña, recién se trabajaba con sacar licencia, por lo mismo se pidió colaboración a diferentes departamentos. El Jefe de Tránsito y el Administrador Municipal, presentaron el grupo de personas, se hizo un trabajo de aprendizaje, a la vez, se entregó todo el material, computadores, bien reglamentados, con la responsabilidad de hacerse cargo como lo indica el reglamento. En el año 2013, le llamó la atención que la gente llegaba molesta, tenían permiso anterior, pagaban el parte y les volvía a salir el mismo parte, preguntó al director del tránsito, le indicaron que llegaba un disco compacto del Registro Civil, se entregaba a informática y tránsito y que la fecha de corte de la información era el 30 de noviembre del año anterior, trató de dar explicaciones como pudo. En el año 2014, siguieron trabajando, fue aprendiendo sobre las fechas que pagaban buses y vehículos de alto tonelaje, nuevamente comenzó la venta de permisos, se formó equipos de campaña, por el Director de Tránsito y Administrador Municipal, uno firma, pero son esas las personas encargadas. En el año 2014, tuvieron problemas con personas, decían que pagaron las multas y le salieron nuevamente, trató de ver la solución, le explican que lamentablemente aparecían las multas en el registro, le manifestaron que pagaron el año pasado y lo demostraban. En el año 2015, el mismo problema, incluso una persona llegó con la multa plastificada, porque le seguía apareciendo la placa patente con multa. Después se preocupó un poco, pero sus preocupaciones eran muchas. En el año 2015, un concejal. Floriano Cruz, no recuerda si en un concejo o fuera, le dijo que había problemas con los permisos de circulación, que se estaban dando permisos sin pagar multa, se fue donde el director, dijo que no sabía, pero iba averiguar. Siempre ha dicho a los funcionarios, que cualquier cosa que pide, lo hace por escrito, pero que nada sale de aquí si no es por escrito. La Jefa de Control Interno, le mandó un correo, donde le dio a conocer que con los permisos de circulación le habían llegado rumores, que se estaban vendiendo sin pagar la multa, no lo vio, pero le dijo que instruyeran una auditoría. Se siente dolido por lo ocurrido, en esa situación su madre el año 2012, compró un auto en la Automotora Alameda, en la forma llamada compra inteligente, durante esos años, su hermano que vive en el extranjero, ocupó el auto de su madre, fue en el 2014, luego su madre cambió el auto, revisó si había

multas, llegaron seis multas y el día 26 de enero de 2015, fue a una reunión en la SUBDERE y pasó al 1° y 2° Juzgado de San Bernardo y canceló las seis multas. Posteriormente, el señor que compró el auto, le apareció la multa, llegó a Sagrada Familia y le fueron entregados los comprobantes de las seis multas pagadas. Le dijo a Isabel Vásquez que hiciera una auditoria con lo que estaba pasando con los permisos de circulación. En hora buena la concejala Hernández hizo la presentación en Contraloría, siempre sirve porque es necesario mejorar la Municipalidad, les indicaron lo que había que mejorar, todo lo que el convenio señaló sobre la venta de permisos de circulación, las multas y hacer un reglamento. Después, no salió gente perjudicada. Solicitó que se practicaran los sumarios y después de trabajar un año, los felicitaron y postularon a la casa moneda para trabajar con código QR, son solo cinco municipios en todo Chile y es importante, porque es imposible adulterar patentes de permisos obtenidos en Sagrada Familia. Se siente orgulloso de haber hecho ese trabajo. Nunca instruyó a ningún funcionario o haberlo inducido a vender permisos con multas impagas. La comuna ha crecido a través del desarrollo de proyectos. Son la comuna en el Maule que más proyectos ha tenido. Puede ser un trago amargo, pero se ha mejorado el servicio de permisos de circulación. En su tercer período, se implementó anuncios radiales, puntos de ventas, palomas y la delegación de Villa Prat. Es importante la venta de permisos de circulación, porque se obtienen recursos frescos para el día a día, especialmente para la parte social. Hay muchas personas con cáncer. Aproximadamente, llegaron ingresos en el 2014, que deben haber quedado en el municipio unos \$350.000.000 o \$400.000.000. Actualmente que están en línea llegan a \$1.000.000.000. No se vende fuera de la comuna, durante el 2014 no autorizó a nadie salir fuera de la comuna, lo que se hace es con contribuyente que tienen propiedades agrícolas en la comuna, como por ejemplo Los Quillayes, que pertenece a la familia Tagle, que tienen su casa matriz en Santiago, siempre compran los permisos de circulación, mandan la información y todos los vehículos sacan su patente en Sagrada Familia. Los funcionarios tienen estrictamente prohibido salir de la comuna, solo con un cometido. Isabel Vásquez Espinoza lo hizo con cometido, pero sin viático. Conoció al señor Isuani Larruy, llegó para hablar con él, molesto, porque en la administración anterior iban personas de Sagrada Familia a vender permisos en Santiago, le respondió soy nuevo, estoy temeroso, no puede hacer algo que me puedan acusarme por abandono de deberes, no puedo, pero si quiere a la comuna, traiga

todos sus antecedentes para que compre en la comuna, así vino y algunos funcionarios le vendieron permisos en la sala consejo. En cuanto a las multas, los funcionarios tenían que cobrar las multas, no está directamente involucrado en la venta propiamente tal. No sabe por cuánto tiempo el señor Isuani Larruy obtuvo los permisos en Sagrada Familia, tal vez, había una amistad. En el 2015, no recuerda que fuera ese contribuyente, tampoco debieron ir a Santiago, su instrucción fue que no se podía vender permisos fuera de la comuna. Solo sabe que arranca de un lugar a otro por compraventa de vehículos. El auto de su madre PPU FGYL 85, Kia año 2013, a nombre de Lucila Urrutia Campos, lo uso su hermano de Canadá y no pagó peajes, se debe haber olvidado, cuando en enero o febrero se entregó el auto para cambiarlo, no tuvo noticias del nuevo comprador, el 2015, quiso comprar el nuevo dueño la patente en Curicó y aparecieron las multas, fue el vendedor hablar con él, no recuerda el nombre, pero era alto, creo que lo vio en Jesús Pons, le preguntó, le dijo que no tenía partes y le pasó los comprobantes que estaban pagados en Santiago y el señor se los llevó, se trataba de seis multas en Santiago. Según sabe al año siguiente no hubo problemas, pero preguntó y fueron al otro año a comprar a Teno y aparecieron dos multas más, eran de TAG, demoraron al parecer en subirlas. Se enteró después de la investigación, en el 2016, se pagaron las multas en Sagrada Familia y sacaron el permiso en Sagrada Familia, no sabe por quién. Las multas nuevas no sabe quién las pagó, tal vez, el mismo usuario. En el año 2013, no hubo investigación de Contraloría. En los años 2014 tampoco, la contraloría fue en el 2015, por denuncia de la concejala. La contraloría ordenó un sumario, era un problema administrativo, con la parte informática, se hizo un sumario que no arrojó responsabilidades. Después indicó la Contraloría como mejorar el trabajo. No hubo sanción, solo indicaron defectos que subsanar, suscribieron un convenio, con buen resultados al día de hoy, se trabaja en la concesión de permisos de circulación más respaldado, concurrieron para hacer reuniones, por ejemplo, con los giradores. Solo se trabajó en el Departamento de Tránsito, durante un año tuvieron la supervisión de la Contraloría, que indicó las falencias, las resultaron subsanadas, así tenemos el nuevo permiso de circulación inviolable. La contraloría mandó un certificado de mejora de la gestión. Floriano Cruz, le contó, no recuerda si fue en un concejo, le dijo que estaban dando permisos de circulación sin pagar la multa. Se hizo la auditoría, a los días la Control Interno le dio cuenta del problema de permisos con multas impagas y llegó la Contraloría. No



vendió permisos de circulación, no tiene clave, tampoco timbre, no puede girar cheques, no tiene esas funciones, todo debe estar autorizado. El jefe del Departamento de Tránsito y Administración Municipal pidió colaboración a los jefes de departamento para hacer la campaña de permisos de circulación, como cada año, ellos deben hacerse responsables, existe un reglamento, incluso se les indica algunas instrucciones, como que debe dar a conocer que no está de acuerdo por escrito a las órdenes que se les impartan. Cualquier instrucción, debe ser, a través, de un acto administrativo. Solamente llegó del Registro Civil, que había que devolver dineros de multas pagadas dos o tres veces, así también se dio cuenta el Departamento de Finanzas, las personas entendían que debían andar con los comprobantes de pago y pedir devolución del dinero. Hay personas que para evitar el problema, pagaba nuevamente. Las municipalidades no mandaban la información completa y en la información del Registro Civil seguían apareciendo multas que ya estaban pagadas. Los TAG esperaban mucho tiempo y no mandaban la información. Piensa que en las 365 comunas de Chile, existían estos problemas y estaban en conocimiento del Registro Civil. Respecto a Felipe Paredes Baeza, no instruyó a ese funcionario ni a otro, orden alguna para vender permisos con multas impagas.

Isabel Alejandra Vásquez Espinoza: Trabaja para la Municipalidad de Sagrada Familia desde el mes de marzo de 1990, oportunidad en que se hizo cargo de único equipo de computación en la comuna, en el consultorio de Sagrada Familia, muy antiguo, en que se procesaban solo fichas médicas, al mismo tiempo trabajaba con permisos de circulación que se emitían en el sistema. El departamento de tránsito emitía todo el archivo comunal, se debía sacar formularios alfabéticos de las patentes vendidas el año anterior. Cuando llegaba el contribuyente debía entregar el permiso circulación anterior, la revisión técnico y seguro obligatorio, se debía buscar la patente anterior, si no aparecía se debía hacer a máquina, identificada la patente, se preguntaba la forma de pago, pagaba, volvía y se entregaba la copia. En el año 1995 o 1996, llegó Ricardo Hormazábal, encargado de informática, se perdía material, formularios que eran valores y la Contraloría impedía eliminar, tenían que quedar como evidencia que el documento existía, porque hay un correlativo, no podían faltar formularios, conversaron, era programador, crearon un buen sistema, con una falencia por seguridad de ella, debía tasar los vehículos año a año, porque el 30 de enero de cada año salían en El Mercurio, debía tasar cada vehículo por el valor real, lo hizo por muchos

años. Después en el año 2012, compraron software de Cas Chile, era más sofisticado, no tenía que tasar los autos, Cas Chile ingresaba la tasación de los autos, llegaba un CD del Registro Civil a la Municipalidad, pero los cargaba la empresa Cas Chile, entonces, no podía acreditar si Cas Chile cargaba el CD del año, no se verificaba si era correcto o no, se cargaba a la persona de contabilidad a cargo de las multas, ese era el CD de SII, se cargaba en contabilidad y no al computador de nosotros, ese lo cargaba Cas Chile. En el año 2014 en adelante, participó en las campañas de permisos circulatorios, fue funcionaria en tránsito y el 2014, trabajó en la campaña de permiso circulación como giradora por un decreto exento, dice que estaba a cargo de un timbre y una Transbank para cobro, le entregaron de la contraloría como deben ser los cobros, de un equipo de computación e impresora, se entregaba todo el equipo cargado para salir a terreno, más las hojas en blanco para imprimir multas y cobrarlas. En el 2014 salió a terreno, tenía una cartera de contribuyentes, cartera de colegios y empresas de la comuna, incluso familiares que atendía en su casa. Cuando apareció el problema de multas 2015, de multas no pagadas, fue la tesorera la que les informó por correo, dijo que no se estaban cobrando las multas, le dio cuenta al alcalde, pero pidió primero un informe al jefe de tránsito, en esa época estaba en control como suplente, designada por el administrador municipal, le pidió al jefe de tránsito que necesitaba un informe de lo que decía la tesorero, éste no respondió, reiteró la solicitud, no informó inmediatamente, se demoró un tiempo, le dio una respuesta vaga, dijo que la patente tanto había prescrito, otra que no existía y la otra se había pagado, como lo encontró básico, le dio cuenta al alcalde del informe y le señaló que se debía hacer algo, el alcalde instruyó por memorándum, que instruyera una revisión y auditoria, efectuó la revisión, auditoría e hizo consultas a los colegas, todos dijeron que se cobraron multas del sistema, en esa época era cobradora de la caja N°2, le sorprendió que después aparecieron multas no cobradas. Cuando llegó la PDI, no revisó su computador, para saber si lo que cobró estaba o no en su sistema, el trabajo lo hacía doble, insiste esas multas no aparecían en su sistema. Cobro todas las multas que aparecieron en su caja, por eso le sorprendió que aparecieron multas no cobradas. Cuando giraba en terreno no estaba en línea, con su computador e impresora, al sacar el formulario, giraba, todo lo debía entregar la caja el mismo día, pero como llegaba tarde, al día siguiente lo hacía y al llegar a la oficina todo lo debía ingresar al sistema central, para que la contadora que revisaba su caja verificara los datos que

estuvieran correctos y en el sistema central tampoco aparecía la multa, lo que había en el sistema central era la mismo que aparecía en su computador, pero no se puede acreditar que era lo mismo que venía en CD que entregaba el SII, porque las multas no se cargaron en el municipio, se hizo por Cas Chile, en el sistema central. El examen que hizo la PDI fue una conjetura, no fue real, solo revisaron los CD que llevaron del SII, no revisaron si estaban en su computador, por tanto, no pueden acreditar que estaban en su computador y estuvo siempre a disposición. Después de la denuncia de una concejal llegó la Contraloría, ya había hecho el informe y entregado al alcalde, revisado la cantidad de multas cobradas. El sistema estuvo siempre desfasado, las personas pagaban las multas y seguían apareciendo en el sistema, por eso cada vez que la gente pagaba una multa, le decía guarde el comprobante, porque seguían saliendo, podía repetir hasta tres años, no sabe la explicación, no se actualizaba, no lo informaban a la municipalidad, pero seguían saliendo. La contraloría hizo una revisión y auditoría de macroprocesos, de lo todos ingresos propios de la Municipalidad, se centró en los permisos de circulación por la denuncia hecha, En la denuncia decía que nadie cobraba multas, esas multas era porque no aparecían en su sistema, habla de su casa particular, se imprimían cinco copias, una para al contribuyente, tres para tesorería, otra para finanza y archivo. Cuando la persona tenía la multa pagada se señalaba en observaciones, multa pagada, cuando no tenía copia el contribuyente los obligaba a pagar, hubo muchas peticiones de devolución de dineros. En el tema de la Contraloría, el informe observó cosas de proceso manual y los invitó a participar en un convenio de colaboración de capacitación, por un año, donde debían resolver las observaciones, que se trataba de las claves, las que se entregaban y como los perfiles no se eliminaban y estaban todo el año, después en marzo se eliminaban, capacitación del personal, no había personal estable y no había manuales de procedimiento. Cumplieron el 100% y fueron felicitados. Hoy es una de las cinco municipalidades del país que tienen código QR., no se necesita ir a ninguna parte. Hay puntos de venta de permiso de circulación en la Shell, Carozzi y en la oficina central más Villa Prat y con pago en línea que funciona de forma perfecta, cualquier persona en todo Chile puede sacar el permiso en Sagrada Familia. Del convenio hubo auditorias que se hacen todos los años, para ver si se siguen cumpliendo con el control de folio, para que no falten formularios. capacitaciones, no existen equipos de terreno, solo puntos de venta, se ha mejorado mucho. Cuando

ocurrieron los problemas había inconvenientes de informática, conexión y capacitación, aparecieron tantas multas, fue un sistema mal cargado por la empresa Cas Chile, independiente que giradores sacaran permisos con multas sin pagar, no lo instruyó, cada uno tenía su caja y cartera de contribuyentes, no era la jefa, nunca fue jefe de tránsito, no tuvo gente a su cargo, no hay documentos que lo indique, sí ellos le consultaban procesos, porque no sabían sacar patentes con factura o para vehículos nuevos sin multa, les ayudaba, pero instruir a un girador vender permisos con multas, jamás lo hizo, siempre les dice que si alguien les pide algo que no corresponde, que sea por escrito, cualquiera sea la calidad que tenga el funcionario a contrata o de planta. Trabajó en el departamento de tránsito hasta agosto de 2016, después ganó el concurso de control interno. En tránsito ingresó en 1990, hacía lo básico, permisos de circulación, vender permisos, girar los permisos, traslados a otras comunas, empadronamientos, archivos, pagos, revisar los pagos, sacar listados, dejar listo para los segundos pagos en agosto y trabajos de documentos internos. Siempre trabajó en permisos de circulación, dominaba el tema, en 2014 o 2015, trabajaba en control interno, primero como funcionaria asignada, técnico grado doce, en la misma oficina de tránsito. En las campañas de 2014 y 2015, trabajó, tenía muchas personas en empresas y colegios, tenía una cartera de contribuyentes, las tenía en una agenda, incluía personas de fuera de la comuna, de Molina, Curicó y Santiago. En Santiago, estaba don Juan José Isuanui Larruy, lo conoció físicamente, cuando sacó en persona permisos de circulación, ese señor tenía una automotora, era contribuyente de años, lo conoció en 2014, cuando llegó a Sagrada Familia, lo atendió un equipo en fin de semana, en la sala de consejo, solo participó un día domingo que llegó tarde y el jefe de servicio le pidió ayudar. Los vio a todos trabajando, otros giradores, estaba Leticia, Felipe, Julio y Jimena. Ayudó con cinco patentes con facturas, que eran de trámite rápido, hizo las tasaciones, formularios y las entregó, eran autos nuevos, por tanto, más fácil, no sabe si las otras personas cobraron multas. Leticia hoy trabaja como empleada de planta, pero en esa época eran todos a contratas, siempre se renovaban las contratas, dependiendo del comportamiento o calificación. Hoy Leticia solo trabaja en la Municipalidad, los demás trabajaron hasta el año 2016. No puede calcular cuántos permisos fueron otorgados, había muchos papeles en la mesa, cree que fue alrededor de las 20:00 horas, se retiró faltando para las 21:00 horas, los demás quedaron en el lugar. Al año siguiente no vio a ese contribuyente, tampoco sabe si lo atendieron en

terreno. En Santiago visitó en terreno a don Alejandro Yáñez, tenía campos en Sagrada Familia, las personas que tenía eran dueños de campos, viñas generalmente. La Contraloría sí les dijo que no se podía atender clientes en otras ciudades, pero se trataban de personas con terrenos en Sagrada Familia. En el año 2012, se cargaba por Cas Chile la información, no tenían como acreditar si estaban bien cargados los CD. Se suponía que era un servicio de Software que lo tienen la mayoría de las municipalidades de Chile, se suponía que era una empresa confiable. Cuando giró patentes en Carozzi, un señor le pidió revisar el sistema, porque en Molina le apareció una multa, le dijo que fuera a la oficina central de tránsito y ahí le giraron el permiso de circulación, porque no tenía multas. De haber sabido del error, quizás lo hubiera revisado por el Registro Civil Online, porque existe esa posibilidad, pero en ventas de terreno no tenía banda ancha, solo revisó su sistema. Hoy no tienen ninguna multa, no hizo presentación. La contraloría hizo una investigación y emitió un informe, faltaban documentos de respaldo, unas series de formularios, unas multas sin cobrar, no recuerda cuanta fue la muestra de casos. No recuerda si fueron 125 casos los revisados y que 20 tenían multas sin cobrar. Conocía materias y procesos, por eso le preguntaban otros funcionarios. Nunca instruyó a nadie, tampoco facultó a nadie. Es madrina del hijo menor del alcalde, no recuerda la edad del niño. Es ingeniero en administración de empresa. Cas Chile se incorporó en el año 2012, antes con el disco compacto que llegaba cada año, un funcionario bajaba las tasaciones, las incorporaban en el sistema, que venía del SII. Desde el año 2012, en el sistema no hacían nada, todo lo actualizaba Cas Chile, las tasaciones y las multas, se suponía que era la información correcta, el informático, rescataba la información del sistema central y la bajaba a los equipos de terreno, el Registro Civil mandaba las multas y las tasaciones el SII, Cas Chile se encargaba de todo. Ignora si se podía revisar en el Registro Civil, no sabe si viene con alguna clave. Hay una nube donde está toda la información de la Municipalidad. Todos los sistemas computacionales están ahí. Las personas que atendían la ciudad de Santiago les mandaban la información por correo o teléfono, les indicaban a los contribuyentes cuanto debían pagar, también si tenían multas y podían pagar por internet, con tarjeta Transbank. Viajó a Santiago para entregar los documentos, estaba trabajando como funcionario público, eran cometidos sin pagos. Pasó de tránsito a control interno, fue un concurso público, participaron dos personas, hubo una comisión, compuesta por el Administrador Municipal, como Ministro de Fe, la

secretaría de la Municipalidad y el Director de Obras Municipales. En el año 2014, no existía la nube, sí existía el sistema de Cas Chile, los giradores de terreno no tenían acceso a la nube, debían hacer dos veces el trabajo. El Registro Civil mandaba un disco compacto, con las multas, lo remitía en diciembre 2013 o enero 2014, porque el corte era noviembre, llegaba a la oficina de partes, se remitía a la Dirección de Tránsito o al informático. Cas Chile lo hacía a principio del año, tenía lista la información para la campaña que comenzaba en febrero. Cas Chile lo tenía por su cuenta, no sabe quién se los remitía a ellos, no podía ver si era similar a la información que mandaba el Registro Civil. No había como verificar si la persona había pagado la multa, la persona debía acreditar con copias el pago, si no las tenía debía volver a pagar. Si las llevaba dejaba la copia de los folios y se emitía el permiso de circulación. Muchas veces la municipalidad debió devolver dineros, hay casos en que se pagó tres veces. Actualmente hay devoluciones por pagos duplicados de multas. El Registro Civil se demoraba hasta dos años en eliminar las multas, porque no se hacían los procesos, las municipalidades no informaban, el registro civil no informaba. El año 2015 fue el último año en que ayudó en la venta de permisos, ese año asumió como control interno, como suplente. Una concejal mandó un correo que no se estaban cobrando las multas, lo remitió también a Contraloría, le pidió informe al Director de Tránsito, no le respondió nada, lo reitero, se demoró y entregó un informe básico, dijo que una patente no estaba registrada, otra prescrita, otra fuera de plazo y que una tenía otra multa, informó al alcalde y este resolvió que se efectuara una investigación, de todo quedó constancia por escrito. Los encargados dijeron que tenían problemas con sus sistemas, que habían cobrado las multas que aparecían en sus sistemas. En el año 2016 apareció la Contraloría, ordenó un sumario administrativo e hizo sugerencias. El resultado del sumario lo hizo la secretaria del tribunal, dijo que no había responsabilidad de los funcionarios, que el problema estaba en el sistema. Las observaciones de contraloría fueron subsanadas. En la investigación del Ministerio Público, se atribuyeron patentes con multas impagas, pero no las recuerda. Incorporada la prueba documental N°18, 19 y 20, de la Defensa. Señaló respecto a la documental N°18, que corresponde al registro de multas de tránsito no pagados, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sobre la PPU KI 6741, la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DPST 38, la revisó y estaba pagada, indica el

documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; BTPJ 21, la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; BRPH23 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CJYL 25 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DBKW 10 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CCFV 60 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; XP 7025 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CTCS 81 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; RL 3352 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DBHD 31 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CBCJ 24 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DTBY 10 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; ZK4900 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CWFJ 21 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; BFFW72 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; TT4176 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; CKBL 34 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DFVS 21 la revisó y estaba

pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DDYB87 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; PG 5428 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; KW 3632 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DLRG 77 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DGLP 28 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”, “no registra multas en la base del SRCeI”; DTSV 24 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; KF 3099 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; CWLD 74 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; BZYC 27 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; BRFC 30 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; FP4792 30 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; YW 9526 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; RT 6284 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; PW 5073 la revisó y estaba pagada, indica el documento “para el permiso de circulación 2023, no se registran multas”; DLKP 34 registra 6 multas, del Juzgado de Policía Local P. Aguirre Cerda y de Santiago, todas del año 2021, no registra multas de los años 2014, tampoco 2015; y DRXD 32, registra tres multas Policía Local Providencia, actualizadas al año 2022, todas años 2021, y conforme a la “información al día de hoy”, la patente posee 7 multas”, correspondientes al Juzgado de Policía Local de Providencia , Recoleta, Santiago y Santiago Centro, años 2022 y 2023, no fueron ingresadas al sistema el año 2021. Prueba documental N°19, CTKJ 81, de acuerdo a la información al 30 de noviembre de 2022, no registra multas. Reconoce las patentes, porque las volvió a revisar todas, corresponden a su caja giradora auxiliar. No recibió una orden o



instrucción para dar permiso de circulación sin el pago previo de las multas impagas, tampoco escuchó que ese tipo de orden fuera dada a otro funcionario. Cuando revisó el mail que decía que vendían permisos en la sala de reunión sin cobrar multas, pidió información al director de tránsito, no le respondió, reiteró el memorándum, al final respondió que una no estaba en el registro comunal, otra se hallaba prescrita, la otra que tenía una multa o se había pagado una multa, informó al alcalde y éste dijo que iniciaran una auditoría. La contraloría revisó el informe, dijo que le servía, dentro decía que los giradores o funcionarios cobraron las multas que aparecían en el computador, que, si había problema, era de clave. Era un sistema obsoleto, además, se pagaron una cantidad enorme de multas, que había que hacer una auditoría profunda, por otro lado, era parte, porque fue giradora, tampoco podía hacer mucho más. La investigación fue el 2014 o 2015. La información por oficio la hizo llegar al alcalde. Exhibida la prueba documental N°28 de la Defensa de la acusada Vásquez Espinoza, señaló que corresponde al oficio de 16 de junio 2015, que da cuenta de materia, “informe de auditoría permisos de circulación”, dirigido al alcalde, de la directora de control interno suplente, que indica “junto con saludar, envío a usted informe sobre auditoría realizada en materia de permisos de circulación campaña 2015”. Recibido el día 17 de junio de 2015, hay timbre de la alcaldía de Sagrada Familia, recepción y firma, también un timbre de control interno, su nombre y firma. Se distribuyó solo al Alcalde. La contraloría observó medidas respecto a varios casos, que ningún equipo de trabajo salía fuera de la comuna, hacer un sumario y capacitación. El informe contaba con elementos de apoyo, un informe del informático, cómo se habían cargado los sistemas de multas y le pidió a contabilidad las multas pagadas, sobre las reiteraciones de información, también la denuncia de los correos que la concejala mandó a varias unidades, reiteraciones a otros departamentos sobre dineros de cobros de permisos, no consultó a otros departamentos, solo a contabilidad, recibió informes de contabilidad y finanzas. Exhibida la prueba documental N°29, expuso que corresponde al informe de auditoría permisos de circulación vehicular, de fecha 04 de junio de 2015, que comprende el informe del personal que participó en la campaña, también los memorándum al director de tránsito, las cajas auxiliares, dentro de ellas la suya, se menciona a la jefa de contabilidad, Rosa Espinoza, que estaba a cargo de revisar las cajas y cuadrar los dineros, otros funcionarios que son tesoreros y encargados de informáticas, a la forma como trabajaban ellos. Revisó archivos,

tomó muestras, que demostraba hallazgos en cada archivador, dentro de los más importantes, que a los documentos les faltaban respaldos, por ejemplo, no tenían copia del seguro obligatorio o del permiso de circulación anterior. Los permisos decían que tenían multas, pero no adjuntaban los comprobantes, están individualizados los giradores Ximena Cuevas, Leticia Saavedra y Felipe Hormazábal, giraron permisos con multas impagas, en un principio estuvieron acusados, pero no están en el juicio. Las multas prescritas, tampoco tenían los comprobantes. La respuesta fue errores administrativos, por presión de la campaña. El informe tiene su firma, como control interno suplente, con el timbre de control interno, con distribución solo al alcalde, como respaldo. Contiene el informe los documentos memorándum N°17 y 33, que son reiteraciones al Director del Tránsito. El Memorándum N°78, del Director del Tránsito a Control Interno, habla de las multas no cobradas, del correo de la tesorera que informa de la denuncia a la Contraloría por parte de la concejala. Cada persona que cobra los permisos de circulación debe tener una póliza de fianza, pidió la nómina y se adjuntó. No encontró desvío de dinero fiscal, las multas que se pagaron en el período, la entrega de los formularios que se entregaba a cada caja auxiliar y decreto de designación de giradores, ninguno podía vender permisos sin estar designados, todos estaban bajo la misma responsabilidad del Director de Tránsito Fernando Oyarzún. Están todos los documentos, entregados al Alcalde y Contraloría. El primer documento, memorándum N°17, es de fecha 7 de abril de 2015, lo reitero dos meses después, Memo 78 de fecha 2 de junio de 2015, fue recepcionado por la oficina de control interno el 2 de junio de 2015 y la alcaldía el día 3 de junio de 2015, está distribuido a su persona, tiene las iniciales "AVE". Se incorporó un registro de multas pagadas por fechas al informe N°18, son las multas que se encontraron en la auditoria, que no fueron pagadas en el municipio al menos. Exhibido el Informe N°18, señaló que estaba dirigido por el Director de Tránsito al Director de Administración y Finanzas, pidiendo la devolución de dineros por multas duplicadas, que aún seguían apareciendo y después la gente pedía devoluciones. Transporte público, por medio del memorándum N° 79, realizó una nómina de personas que trabajaron en la campaña de permiso de circulación que la organizó el director de tránsito, como del descuento de las aseguradoras, de las personas que cobraban pólizas. Solicitó a Rosa Espinoza, la nómina de multas detalladas, el jefe de Finanzas y Contabilidad mandó un informe con detalle por meses y los montos recibidos, por TAG y otro tipo de multas. El

memorándum N°40, correspondiente a informática, dio cuenta sobre el equipo entregado a los funcionarios, si tenían banda ancha, si podían verificar el pago. Correo electrónico de respaldo de informática, sobre cuando comenzó la carga de las multas no pagadas en el sistema por Cas Chile, de fecha 22 de enero 2015, de Ricardo Hormazábal Sánchez para Fernando Oyarzún, jefe de tránsito, sobre la exitosa carga de las multas no pagadas vigentes al 30 de noviembre de 2014 y adjunta reporte emitido por el software, es decir, por CAS-CHILE. Correo electrónico de Ricardo Hormazábal, informático, para Fernando Oyarzún, informando que el día martes 27 de enero quedaron correctamente cargadas las tasaciones de vehículos livianos del 2015, extraídas del Servicio de Impuestos Internos. La fecha del mail es 27 de enero de 2015. Los comprobantes de salidas de equipos. Comprobantes de formulario de entrega de equipos. Copias de prueba del informático, para que cada persona supiera que su equipo funciona. Acta de entrega de equipo a Julio Hormazábal, Jimena Cuevas, Alejandra Vásquez. Acta de entrega de formularios de permisos de circulación. Decreto exento N°419, que designa a Felipe Paredes Baeza para emitir permisos de circulación. Decreto exento N°420, para Jimena Cuevas Jara, con la misma finalidad. Decreto Exento N°422, para Juan Duque Rojas, en el mismo sentido; y el Decreto Exento N°423, respecto de Julio Hormazábal Muñoz, para apoyar el proceso de recaudación en varios sectores de comuna. Se indican las formas de pago, entrega de fondos a la encargada de contabilidad y jefe de finanzas, que debe ver los depósitos en las cuentas corrientes del municipio. No contó con informe de finanzas o rentas que indicara perjuicio municipal. Su disconformidad con el informe del director de tránsito, se lo comunicó por escrito al alcalde, no basta decir no está en el archivo, todo debe tener respaldo, lo hizo con el objeto de iniciar una investigación. No recuerda si lo hizo con el director de contabilidad y finanzas. Después de todo, estos informes se incorporaron a un convenio con la Contraloría. Manifestó que se trata del oficio N°5-205 emitido por ella, de la división de control, dirigido al Alcalde, de 7 de abril, solicitando al Director de Tránsito por comentarios de la directora tránsito, que en campaña 2015, no se cobrarían multas impagas. Con fecha 2 de junio, por el *memorandum* 78, se entregó el informe, simple por crecer de respaldos, por lo tanto, no la dejó conforme, esta su nombre, cargo, Control Interno suplente transparencia municipal, distribuido al alcalde. Exhibida la prueba documental N°12, señaló que corresponde a un certificado N°1/2016, de haber presentado propuestas del plan de

auditoría, porque la dirección de control debe decretar propuestas de auditorías todos los años, le debe indicar alcalde que áreas o falencia se puede indagar, en el punto dos menciona haber realizado seguimientos de informes de Contraloría en forma física y visual sin informe de registro. Además, indica que no se habían hecho las revisiones de cajas, auditorías de permisos de circulación, se adjuntó copia. Todo responde a lo que la fiscalizadora de Contraloría solicitó. De fecha 26 de julio de 2016. Después la Contraloría hizo el informe de auditoría y los invitaron a participar en el plan de mejora, no se detectó perjuicio fiscal por la contraloría. Exhibida la prueba documental N°11, corresponde al memorándum 10-2016, de fecha 27 de abril de 2016, dirigido al Director de Administración y Finanzas por la Directora de Control Interno Suplente, mediante el cual se presenta una propuesta de auditoría para el año 2015, efectuada por la encargada de control interno. Se señala que para el año 2014 no hubo auditoría en permisos de circulación, para dar respuesta a lo solicitado por la Contraloría. Firmada por ella el 27 de abril de 2016. De haber tenido la información, debería haberla reprochado, tal como lo hizo en esa ocasión, lo mismo con las multas impagas. La Concejala Anselma Hernández fue quién hizo la denuncia ante la contraloría, debe haber sido en el año 2015, cuando comenzaron los correos de la tesorera Carmen Velasco, dirigidos no sabe a quién, le llegó solo una copia.

**QUINTO:** Que, ponderando en forma libre la prueba rendida en el juicio, pero de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, este Tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que, en relación con los hechos descritos en la acusación oficial del Ministerio Público y la acusación particular del Consejo de Defensa del Estado, solo se acreditaron los siguientes hechos:

**Durante los años 2014 y 2015 en la Municipalidad de Sagrada Familia se giraron múltiples Permisos de Circulación respecto de vehículos que presentaban multas de tránsito impagas cursadas por diversos Juzgados de Policía Local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.287, que precisamente prohíbe la renovación de Permisos de Circulación de vehículos que presenten multas de tránsito no pagadas, defraudando al Fisco de Chile, al privarlo de obtener el ingreso esperado por el cobro de esas multas.**

En ese contexto, entre los días 30 de marzo y 1 de abril de 2015, mientras Felipe Andrés Paredes Baeza desempeñaba funciones como cajero encargado del giro y recaudación de Permisos de Circulación de ese municipio, procedió a renovar a Raúl Alejandro Betancourt Díaz, permisos de circulación de diversos vehículos, entre ellos los que tenían las patentes BSSB83, BWFR71, CLTF43, NY6788, LW8279, UR3964 y RF4076, en circunstancias que dichas siete patentes presentaban multas de tránsito impagas, lo que implicó que el Fisco dejara de percibir un total de \$16.275.258.

Del mismo modo, dicho funcionario, con fecha 31 de marzo de 2015, vendió un permiso de circulación asociado a la patente FGYL85, cuya propietaria a esa época era Lucila Urrutia Campos, madre del alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, Martín Abdón Arriagada Urrutia, en circunstancias que el vehículo registraba al menos dos multas de tránsito impagas, ocasionando un perjuicio al erario fiscal ascendente a \$83.814.

Ese mismo vehículo había sido objeto de una operación similar el año anterior, cuando el 31 de marzo de 2014, Fabián Elías Riquelme Solís, quien se desempeñaba como girador de permisos de circulación de ese municipio, vendió el permiso de circulación respectivo, pese a que registraba dos multas de tránsito impagas, provocando un perjuicio al Fisco de \$97.196.

En todos estos casos, los funcionarios Felipe Paredes y Fabián Riquelme procedieron a renovar los Permisos de Circulación de los vehículos señalados, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedeciendo órdenes directas que les realizó previamente el Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, Martín Abdón Arriagada Urrutia.

Por otro lado, Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionaria de la Municipalidad de Sagrada Familia y en circunstancias que se desempeñó como giradora de Permisos de Circulación, en diversas fechas del año 2014, vendió un total de treinta y cinco permisos de circulación asociados a vehículos con las siguientes placas patentes únicas: KL6741; DPST38; BTPJ21; BRPH23; CJYL25; DBKW10; CCFV60; XP7025; CTCS81; RL3352; DLKP34; DBHV31; CBCJ24; DTBY10; ZK4900; CWFJ21; DRXD32; BFFW72; TT4176; CKBL34; DFVS21; DDYB87;

**PG5428; KW3632; DLRG77; DGLP28; DTSV24; KF3099; CWLD74; BZYC27; BRFC30; FP4792; YW9526; RT6284; y PW5073. Ello no obstante que dichas patentes presentaban en total setenta y una multas de tránsito impagas, cursadas por diversos Juzgados de Policía Local, privando al Fisco de Chile de recibir la suma total de \$3.077.350.**

**A su vez, al año siguiente, específicamente el 31 de marzo de 2015, Vásquez Espinoza, en la misma calidad de funcionaria giradora, vendió un permiso de circulación respecto del vehículo patente CTKJ81, pese a que registraba una multa de tránsito no pagada, privando al Fisco de recibir la suma de \$45.768.**

**De esta manera, las acciones descritas, realizadas por orden del acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, implicaron un perjuicio para el Fisco de Chile de la suma total de \$16.456.268, en tanto que las realizadas por la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza produjeron un perjuicio total de \$3.123.118.**

Para dar por establecido el enunciado fáctico consignado, en relación a los vehículos con las placas patentes BSSB83, BWFR71, CLTF43, NY6788, LW8279, UR3964 y RF4076, pudo establecerse que se giraron los permisos de circulación correspondientes, en el año 2015, entre los días 31 de marzo y 01 de abril de ese año, y que en esas fechas las siete patentes registraban multas impagas, conforme con la siguiente prueba documental, que demuestra, además del giro en la época señalada, la información actualizada al 30 de noviembre de 2014, es decir, a la fecha de cierre para los efectos de determinar el Registro Nacional de Multas Impagas, que el Registro Civil proporcionó a todos los municipios del país, para los efectos de la campaña de renovación de permisos de circulación año 2015, por tanto, disponible para el funcionario girador, al tiempo de la renovación, como a continuación se singularizarán respecto de cada una de las placas patentes enunciadas.

Para el caso del vehículo PPU BSSB 83, el Ministerio Público incorporó las pruebas documentales N°21 legajo 18 y N°11, consistentes en el comprobante original y copia del mismo documento, de pago del permiso de circulación del vehículo PPU BSSB83 N°26444, de la I. Municipalidad de Sagrada Familia, con fecha 31 de marzo de 2015 y el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha, por el monto de \$40.481, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre del propietario según (RNVM) de José Pablo Fernández Martínez. En cuanto a la

existencias de 121 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la prueba documental N°4, correspondiente a una copia del certificado de multas de tránsito no pagadas, del Registro Nacional de Multas de Tránsito No pagadas, del vehículo PPU BSSB83, que demuestra que la patente posee 121 multas al 30 de noviembre de 2014. Luego, según se colige del antecedente referido, el girador del citado permiso de circulación, al tiempo del pago del permiso, debió abstenerse de renovarlo, por contar con 121 multas impagas.

Respecto a la PPU BWFR71, se estableció con la prueba documental N°21 legajo 18, del Ministerio Público, consistente en el comprobante de pago original del permiso de circulación del vehículo placa patente ya indicada, N°026480, renovado en la Municipalidad de Sagrada Familia, el día 31 de marzo de 2015, por el monto de \$108.244, más el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha, por el mismo monto, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre de Alberto Alejandro Lastra Fuente, como propietario según RNVM. En cuanto a la existencias de 95 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la copia del Registro Nacional de Multas de Tránsito del vehículo PPU BWFR71, que certifica que conforme a la información actualizada al día 30 de noviembre de 2014, poseía 95 multas impagas, incorporada como prueba documental N°5 de la Fiscalía.

En cuanto a la PPU CLTF43, se acreditó con la prueba documental N°21 legajo 18, del Ministerio Público, consistente en el comprobante de pago original del permiso de circulación del vehículo placa patente ya indicada, N°026450, renovado en la Municipalidad de Sagrada Familia, el día 31 de marzo de 2015, por el monto de \$98.344, más el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha y el mismo monto, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre de Aislaciones y Servicios LMT., como propietario según RNVM. En cuanto a la existencias de 56 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la copia del Registro Nacional de Multas de Tránsito del vehículo PPU CLTF43, que certifica que conforme a la información actualizada al día 30 de noviembre de 2014, poseía 56 multas impagas, incorporado como prueba documental N°15 del Ministerio Público.

En cuanto a la PPU NY6768, se acreditó con la prueba documental N°12 del Ministerio Público, consistente en la copia del comprobante de pago del permiso de circulación del vehículo placa patente ya indicada, N°26493, renovado en la I. Municipalidad de Sagrada Familia, el día 31 de marzo de 2015, por el monto de \$21.599, más el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha y el mismo monto, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre de Roxana Céspedes Meza, como propietario según RNVM. En cuanto a la existencias de 35 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la copia del Registro Nacional de Multas de Tránsito del vehículo PPU NY6768, que certifica que al día 30 de noviembre de 2014, la placa patente en cuestión poseía multas impagas, incorporado como prueba documental N°22 del Consejo Defensa del Estado.

En el caso de la PPU LW8279, resultó acreditada la renovación de la patente en la Municipalidad de Sagrada Familia, con la prueba documental N°21, legajo 18, del Ministerio Público, consistente en el comprobante de pago original del permiso de circulación de la patente señalada N°025616, de fecha 01 de abril marzo de 2015, más los antecedentes exigidos por ley para su renovación, y el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha, por el monto de \$65.508, ambos documentos con el nombre de Matías Andrés Montes del Campo, como propietario según (RNVM). Para los efectos de establecer que, al momento del giro, la placa patente contaba con 28 multas impagas, fue valorada la prueba documental N°23 de la acusadora particular, consistente en la copia del certificado del Registro Nacional de Multas No Pagadas del vehículo PPU LW 8279, que acredita que registraba multas impagas al tiempo del giro del permiso.

Respecto a la PPU UR3964, se acreditó con la prueba documental N°14 del Ministerio Público, consistente en la copia del comprobante de pago del permiso de circulación del vehículo placa patente ya indicada, N°26495, renovado en la Municipalidad de Sagrada Familia, el día 31 de marzo de 2015, por el monto de \$93.695, más el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha y el mismo monto, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre de Demotrón SA., como propietario según RNVM. En cuanto a la existencias de 23 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la copia del



Registro Nacional de Multas de Tránsito del vehículo PPU UR3964, que certifica que al día 30 de noviembre de 2014, la placa patente en cuestión poseía multas impagas, incorporado como prueba documental N°22 del Consejo Defensa del Estado.

En lo referentes a la PPU RF4076, se acreditó con la prueba documental N°21 legajo 18, del Ministerio Público, consistente en la copia del comprobante de pago del permiso de circulación del vehículo placa patente ya indicada, N°025893, renovado en la I. Municipalidad de Sagrada Familia, el día 31 de marzo de 2015, por el monto de \$21.599, más el respectivo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha y el mismo monto, consignando como emisor “FPARED”, ambos documentos con el nombre de José Olate Vásquez, como propietario según RNVM. En cuanto a la existencias de 20 multas impagas a la fecha del giro del permiso de circulación, se comprobó con el mérito de la copia del Registro Nacional de Multas de Tránsito del vehículo PPU RF4076, que certifica que al día 30 de noviembre de 2014, la placa patente en cuestión poseía multas impagas, incorporado como prueba documental N°22 del Consejo Defensa del Estado.

Luego, para acreditar la forma como se gestó y se desarrolló en el tiempo la dinámica defraudatoria al interior de La Municipalidad de Sagrada Familia, así como la manera en que resultaron advertidos y denunciados los hechos, fueron considerados los testimonios de los denunciantes, los concejales del ente edilicio, a la época de los sucesos, Floriano Cruz Muñoz, Carmen Velasco Ponce y Anselma Hernández Avilés. De tal modo, **Floriano Cruz Muñoz**, recordó que, en el año 2014, escuchó por ahí un rumor de pasillo, que se estaban vendiendo permisos de circulación y no se estaban pagando las multas, después la tesorera de la Municipalidad le confirmó el rumor, le pidió antecedentes que corroboraran el rumor y le entregó documentos de vehículos con multas que no fueron pagadas. La tesorera consultó al registro Civil y le confirmaron las multas. Posteriormente, ella envió correos electrónicos a todas las jefaturas incluido el alcalde, eso fue en el año 2015, pero no hubo reacción y los repitió días después. Al poco tiempo, la tesorera municipal, de forma arbitraria, fue trasladada a Villa Prat, a 25 kilómetros de Sagrada Familia. Desde ese momento, cuando era concejal, durante el año 2015 y 2016, en ocho oportunidades en el 2015 y cinco en el 2016, hizo saber la irregularidad y el alcalde nunca mostró intención de explicar lo que ocurría en el Departamento de Tránsito. Después se enteró por el Director de Tránsito, Fernando Oyarzún, que el alcalde llegaba al

departamento y le hacía unas señas a los jóvenes que contrató para vender permisos, los sacaba a la sala del consejo y atendía a las personas con multas, el más reconocido fue un señor Betancourt que venía de Talca. También señaló el testigo, acompañó los antecedentes a la Fiscalía y Contraloría. Por su parte, hizo una denuncia en la Fiscalía de Curicó y aportó antecedentes, por ejemplo, llevó la documentación de compra de permiso de circulación de la mamá del alcalde, que fueron extendidos teniendo multas, lo que verificó con documentos del Registro Civil y otros documentos que entregó a la Fiscalía. La denuncia cree que fue en febrero de 2015. Exhibida la prueba documental N°11 del Ministerio Público, reconoció que se trata de la copia de folio girador orden de ingreso, a nombre de José Pablo Fernández Martínez, con domicilio en Talca. Rol/placa PPU BSSB 83-3. Exhibida la prueba documental N°12 del Ministerio Público, que corresponde a un documentos extendidos por la I. Municipalidad de Sagrada Familia y se trata de la compra de permiso de circulación del vehículo Placa Patente NY 6788-k de Roxana Céspedes Meza. Respecto a la prueba documental N°13, manifestó que corresponde al vehículo PPU LW 8279-K, a nombre de Matías Andrés Montes, domiciliado en Fundo Santa Leonor, PPU LW 8279-k, de la Municipalidad de Sagrada Familia; y la prueba documental N°14, consistente en la copia del recibo de compra de permisos de circulación. PPU UR 3964 -7, a nombre de Demotrón SA., con domicilio en Alameda S/N. Exhibida la prueba documental N°15, indicó que los registro de multas de tránsito no pagadas, PPU CRTF 43, corresponde una lista de Juzgados de Policía Local, de multas de tránsito no pagadas. Hizo presente, que el alcalde ofreció tratar el tema en reunión extraordinaria, lo que no hizo nunca, pues cuando se trató en reuniones, no emitió opinión, nunca lo trató. Sobre el contribuyente que renovó los permisos de circulación asociados a las placas patentes reconocidas, señaló que la señora Carmen Velasco le comentó la situación de Betancourt, la concurrencia semanal de éste a la Tesorería de la Municipalidad, tres veces a la semana como mínimo, fue lo que despertó sus sospechas, fue así que en conversaciones que mantuvo Carmen Velasco con Betancourt, éste le manifestó que no había problema, porque era amigo del Alcalde. También hizo presente la situación a la concejala Anselma Hernández, quien está enferma actualmente, quien hizo una declaración en la prensa sobre esa situación. Con el tema de permisos de circulación, después del 2016 no ha sabido de otros casos de permisos con multas impagas, lo que no significa que no ocurra. Por su

parte, **Anselma Hernández Avilés**, señaló que fue concejal desde el año 2012 al 2016. En ese contexto, se enteró por una persona que tenía un auto de alta gama, que se podía comprar permisos de circulación sin pagar las multas en la Municipalidad de Sagrada Familia, era un contribuyente de la comuna, pero prefiere omitir su identidad. Esa situación la dio conocer en el concejo, solicitó mayores antecedentes, pidió que se investigara lo ocurrido, porque al parecer las personas eran amigas del alcalde y tenían un trato distinto, está en las actas. Floriano Cruz tenía los mismos antecedentes, de otras personas, nunca tuvo una respuesta certera, la mayoría de los documentos estaban borrosos, no se podían leer, pasó en reiteradas ocasiones. Presentó un documento en la Contraloría Regional en Talca, no tuvo respuesta, tenía mucha documentación, esperaba una investigación, que de hecho la hubo. Trató de dar indicios, hizo una presentación en la prensa local, manifestó lo ocurrido, que se vendían permisos sin cobrar multas, mencionó a una persona de Maule que llevaba carpetas y tenía un trato diferente, en otra oficina y otro horario. Su rol fiscalizador le hizo interponer acciones. Tomó contacto con la tesorera, Bernardita, ella estaba preocupada por la situación, mandó la evidencia al alcalde y organismos involucrados. Todos sabían del correo, en el concejo también lo manifestaron y pidieron que las personas fueran al concejo para explicar la situación. La tesorera estaba preocupada de resultar involucrada. Bernardita fue sancionada y expresaron en el concejo que fue menoscabada, porque la trasladaron a Villa Prat. Floriano llevó los antecedentes de la madre del alcalde al concejo, se puso de pie el alcalde, dio por terminado el concejo y discutió con Floriano, éste tenía todos los antecedentes. El Alcalde explicaba que se estaba investigando que la plata no la tenía en el bolsillo, pero era la máxima autoridad y debía velar porque no ocurriera este tipo de hechos, pero ellos también tenía esa obligación, por eso denunciaron. La motivación, a su juicio fue que en su comuna hay muchas carencias, en el fondo se quería vender mucho, el ego también, pero en que se ocupaba el dinero, siempre eran cosas intangibles, dar felicidad en el minuto, celebraciones, artistas que la gente no espero conocer, fiesta de la chicha, era para tener contenta a la comuna en el momento, se esperaba otras acciones más duraderas en el tiempo. La razón era la popularidad, para que en la próxima campaña, estuviera en un nivel distinto, las personas en sectores rurales se satisfacen con poco, por ejemplo, conocer un artista, ir a un cóctel con buena comida. La apoyó Renovación Nacional, la misma lista que en conjunto iba con el alcalde. A su vez,

**Carmen Bernardita Velasco Ponce**, expuso que hasta el año 2017, trabajó en Tesorería de Municipalidad de Sagrada Familia y que actualmente lleva más de 40 años en la municipalidad. En marzo de 2015, le llamó la atención la concurrencia de una persona que iba seguido a pagar permisos de circulación, a la semana podía ir todos los días, con dos, tres o siete permisos. En su trabajo tenía contacto con contribuyentes. En una oportunidad le preguntó al señor de dónde venía, se dio cuenta que no era de la comuna, dijo que era de Talca, le preguntó ¿por qué pagaba en Sagrada Familia?, le respondió que era muy amigo del alcalde, lo conocía de años, cuando estudiaban en la aviación y que cuando se reencontró con él, le dijo que viniera a pagar permisos acá. El señor pagaba en efectivo. Le contó que trabajaba en una automotora de Talca, siempre andaba con dos personas, pagaba y las dos personas salían con él, siempre fue igual. Al cabo de una semana, pensó, esto no me calza, eran montos pequeños y otros eran más caros, entonces, cuando terminaba en su trabajo, al final de la tarde, revisaba en la página del Registro Civil las placas patentes y se encontró con la sorpresa que los permisos tenían multas, una, dos y hasta seis, incluso pasaban de diez. Al día siguiente hacía lo mismo, otra vez encontraba multas. Al terminar marzo, se fue a la oficina de Mario Santelices, le dijo que se dio cuenta que los permisos de Betancourt de Talca de una automotora tenían multas, le señaló que voy a solicitar a tránsito que aclare la situación, puede ser que ingresen las patentes y estén pagadas, el jefe manifestó “haga lo que estime pertinente”. En ese transcurso, llamó al Servicio de Registro Civil de Santiago, para preguntar si la información de la página web era la misma que hacían llegar en el CD a la municipalidad, le respondieron que sí, o sea, si se consultaba una patente en la página era la misma información de la Dirección de Tránsito. Le señaló que, si quería aclarar una duda, consultara por escrito. Al día siguiente le hizo llegar un listado de multas de patentes consultadas. Fue a la Dirección del Tránsito, envió un correo a su jefe Mario Santelices, con copia a Enzo Hormazábal, a Control Interno, Isabel Vásquez y uno de ellos con copia al alcalde, indicó en el mail que consultó patentes en la página del Servicio de Registro Civil y que arrojaron multas, quería alertarlos y preguntar a qué se debía lo observado. Pasaron los días, llegó la respuesta de Elizabeth Tapia que subrogaba a Fernando Oyarzún, le dijo “estoy de suplente cuando regrese el director le haré saber la consulta”. Pasaron semanas sin respuesta, volvió a solicitar la información, tenía la duda si las multas estaban pagadas, pero si así fuera, debían mostrar el comprobante, por ejemplo,

hay una contribuyente que anda con una carpeta con los comprobantes y le siguen apareciendo. Al mes siguiente le respondieron por correo con firma del Director de Tránsito, donde le indicaron leer un dictamen de Contraloría, respecto a multas de tránsito, cuando pasan de un dueño a otro. Como no le calzaba la situación, pero parecía que a los demás no les interesaba o era ella la única que no lo tenía claro, en adelante no preguntó nada. Se encontró con Floriano Cruz, le dijo estoy haciendo tal gestión y no me responden, hay permisos que se venden con multas impagas, don Floriano le respondió “ya, yo me voy hacer cargo”, pensó que él no dejaría pasar el tema. En los años 2014 y 2015 se dio cuenta de la presencia de Betancourt en la Municipalidad para sacar permisos. Revisó la página del Registro Civil, no podía revisar la información del CD, porque no estaba instalado en su computador. Aclaró, luego de ser exhibida en audiencia la prueba documental N°27, del Consejo de Defensa del Estado, reconoció que es uno de los correos que mandó el 2 de abril 2015, para Mario Santelices, Ricardo Hormazabal, Fernando Oyarzún y Alejandra Vásquez, el cual no estaba dirigido al alcalde, aclara que la copia estaba dirigida al Alcalde Subrogante. Mientras que el Director de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia al momento de perpetrarse los hechos, **Roberto Oyarzún Riquelme**, declaró que se enteró que había una denuncia de un concejal, Floriano Cruz, de inmediato se puso de acuerdo con la señorita Cuevas para hacer una evaluación de todos los permisos de circulación y llegaron a la conclusión, que una patente fue renovada con multas, hicieron la investigación y fueron donde un señor, Matías Montes, conversaron con la señora, pero primero consultó a Fabián, que fue quién vendió el permiso, éste le dijo que fue un error del sistema, que estaban las multas canceladas. La señora dio una información sobre las patente. Se excusó de recordar solo la patente del señor Matías Montes. Conversó con Felipe Paredes, era girador, le preguntó ¿por qué vendió las patentes con multas?, le respondió “yo recibo órdenes”, no dijo de quién y no le insistió. Exhibida su declaración ante el Ministerio Público, de fecha 19 de noviembre de 2020, reconoció su firma y recordó que se fijó que dichos permisos fueron girados por Felipe Paredes, habló con él, le pregunto ¿por qué vendió sin cobros de multa?, éste le dijo “órdenes del Alcalde”, refiriéndose a Martín Arriagada, que éste le topaba la espalda, diciendo que no iba a pasar nada. A su oficina nunca pasó el Alcalde para buscar funcionarios, tampoco sintió que tocara la bocina. Contrastado con la declaración prestada ante la Fiscalía, recordó que estaba en la oficina, escuchó un

megáfono y vio a Felipe correr hacia fuera, sin que avisara donde iba, le decía “no, pero si venía mi jefe”. Dijo que conoció a un señor que siempre estaba fuera, le dijeron que era Raúl Betancourt y que era de Talca, éste una vez se acercó a la oficina, le dijo que iba a comprar patentes, pero traía a los dos días los documentos, que estaba autorizado por Martín Arriagada, lo atendía Felipe. Nada le dijo con el cobro de multas. Le señaló que conocía a mi padre por el deporte, en esos tiempos jugaba a la pelota con su hermano. Habló de los permisos de circulación con Enzo Hormazábal, al ver que todo estaba oscuro, éste le dijo que no se preocupara, que todo se iba a solucionar. Hizo un documento, lo mandó a todos los funcionarios que trabajaban en la campaña, indicando que se prohibía la venta de permisos con multas impagas, pidió que todos firmaran el documento, no sabe qué le pareció a la jefatura, pero a los pocos días lo sacaron de tránsito. Contrastado con declaración previa ante el Ministerio Público, admitió que se enojó Martín Arriagada, lo sacó de la jefatura y lo mandó a trabajar en unos contenedores. Concuera con lo anterior el mérito de la prueba documental N°26 del Consejo de Defensa del Estado, consistente en el memorándum N°111/2015, que dice relación con el comunicado al personal de la Dirección de Tránsito, dirigido por el testigo Oyarzún Riquelme, en los términos expresados por éste.

Relevante resultó para el establecimiento de los hechos, lo declarado por el girador de los permisos de circulación renovados con multas impagas, atribuidos al contribuyente Raúl Betancourt Díaz, quien ilustró sobre las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos, como de las características del procedimiento de renovación de permisos de circulación, de las órdenes impartidas para emitir los referidos permisos vulnerando la normativa vigente y la persona de quien recibió dichas instrucciones. En efecto, **Felipe Paredes Baeza**, manifestó que trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia, desde marzo 2013 hasta diciembre de 2016, oportunidad en que dieron término a su contrato. Después comenzó a trabajar como temporero. Al principio fue inspector municipal, a los pocos días, le ordenaron apoyar en los permisos de circulación. Relató que en ese tiempo debió concurrir a Santiago, para vender permisos de circulación a un señor Rebolledo, que tenía un Rent Car en Providencia, acompañada de Alejandra Vásquez, oportunidad en que se vendieron algunos permisos que tenían multas impagas, por orden de la jefatura, rectificando que durante el viaje la señora Alejandra le señaló le dijo que no cobrara la multas, lo que no le pareció extraño si lo decía ella que era la persona a cargo. No recuerda

si fue en el año 2013 o 2014, se juntaron en tarde en la sala de concejo, en ese tiempo Ricardo Núñez estaba a cargo de la campaña, era el jefe de gabinete del alcalde, estaba presente Ximena, Leticia, Julio, la señora Isabel y él, estuvieron hasta como las 02:00 horas, con el contribuyente presente, no recuerda si estaba el alcalde. Llevaba varios permisos, cree que era una automotora, todos giraban, eran muchos, algunos de los permisos tenían multas, cree que el cuarenta por ciento del total. No recuerda si eran muchas las multas, porque uno las pasaba no más, el sistema lo permitía. Ese día, le dieron una orden, no cobrar las multas, se la dio Ricardo Núñez. No le pagaron nada, desconoce si le pagaron a los demás colegas, les regalaba estuche o llaveros de la automotora, solo ganaba tener su trabajo, horas extras y viáticos. También estuvo en el departamento de Juan José Isuani Larruy, lo llevaron para apoyar a Julio Hormazábal, estuvo atendiendo unos días allá, no recuerda la dirección. En el departamento estaba Juan José Isuani Larruy, Julio y el alcalde, desconoce porque estaba el alcalde, pero fue él quien lo fue a dejar, cree que se quedó una noche, por su parte estuvo dos o tres días, alojó en el departamento, al igual que Julio y giró permisos para Larruy y otros contribuyentes. La mayoría de los permisos tenían multas, no se cobraron por las indicaciones que les daban, que venían de Alejandra y el alcalde le dio la orden. Además, atendió un par de amigos del alcalde en Machalí y en Curicó. Así en un viaje a Machalí con el alcalde, estuvo presente cuando el administrador municipal, Enzo Hormazábal llamó al alcalde y le dijo que había una persona con muchos permisos, lo escuchó en alta voz, le señaló el alcalde que Ignacio Arancibia lo atendiera, el administrador se refirió a la persona como amigo del alcalde, no recuerda si dijo que los permisos tenían multas. Luego, Ignacio lo llamó para pedir la clave, porque iba atender un señor que dejaría cantidad de dinero. Al parecer Ignacio tenía todo claro, porque tuvo una conversación antes sobre el tema. Le dio la clave a Ignacio y después conoció al amigo, fue Raúl Betancourt, lo atendió, no se lo presentó el alcalde, pero los veía en la Municipalidad, era prepotente el caballero y aparte era amigo del alcalde. Contrastado con la declaración prestada el 25 de mayo de 2018, ante la PDI, señaló reconocer su declaración y expuso que a los días el alcalde le presentó a Raúl Betancourt, le mencionó que era amigo de años, compañero de ejército y agregó que llevaría plata a la comuna, mucha, por tanto, debía atenderlo bien y pasar por alto las multas. Un día que estaba con permiso, lo llamaron para ir atenderlo, comenzó Ignacio atendiéndolo en la sala de concejo. Cuando lo conoció, lo

siguió atendiendo, después también lo hizo en la oficina, le giró muchos permisos, siempre lo buscaba para que lo atendiera. Del total de permisos, el 50% o 60% tenían multas, al principio eran menos permisos con multas, pero fueron aumentando. Imagina que lo desvincularon por la denuncia de los permisos. Fue citado al Ministerio Público, en tres oportunidades, en una ocasión fue con un abogado que le proporcionó la Municipalidad, piensa que, para apoyarlo, donde dijo que los problemas eran por falla de sistema, cree que lo hablaron ellos para dar solución al tema, lo que declaró se lo indicaron Enzo Hormazábal y el abogado. El sistema no tenía problema. No recuerda una reunión en la oficina del alcalde, contrastado con la declaración otorgada el día 09 de marzo de 2021 ante el Ministerio Público, recordó que el tema de la campaña de permisos era para recaudar mucho dinero, porque el municipio venía en quiebra, estaban presentes, Ricardo Núñez, el alcalde y los giradores, fue en la oficina del alcalde, en el año 2013, la reunión fue liderada por Ricardo, éste tenía una libreta con contactos, se formaron grupos de terreno, no le dijeron a todos juntos que no cobraran las multas, pero cuando salían a terreno, de a uno, al llegar se lo decían, se lo señaló Ricardo Núñez, la señorita Alejandra cuando estaba con él, y en Machalí se lo dijo el alcalde, al igual que en Santiago.

Confirman la venta de permisos de circulación con multas impagas al contribuyente Raúl Betancourt Díaz, lo señalados por otros funcionarios que prestaban servicios en los años 2014 y/o 2015 en la entidad edilicia. Así **Ignacio Arancibia Castro**, manifestó que trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia, en el año 2010 ingresó y estuvo hasta el año 2017, al principio como auxiliar, después de un tiempo pasó a conductor de vehículos municipales, luego se abrió el departamento de licencias de conducir, se dio la posibilidad de ser examinador práctico y quedó. No trabajó en las campañas de permiso de circulación, pero en realidad, sí giró permiso de circulación, no recuerda la fecha, fue cerca del mediodía, iba almorzar, le habló don Martín, el alcalde, le presentó una persona que venía a girar permisos de apellido Betancourt, le dijo que lo atendiera, que traía algunos permisos con multas, le respondió “no tengo clave”, el alcalde le señaló “consigue la clave de Felipe”. Trabajaba en el mismo departamento con Felipe, lo conocía, no le pareció bien, la computación no iba con él, algo entendía, pero tenía que hacerlo. Fue almorzar, devuelta lo atendió en la sala de concejo, había un notebook y una impresora, Ricardo Hormazábal le explicó. Llegó el señor, parece que era medio peladito, no era joven, llevó dieciocho o



veinte permisos, no recuerda la cantidad exacta. Algunos tenían multas, no las cobró, porque la orden que le dieron fue no cobrarlos, se la dio el alcalde. De los dieciocho permisos, quince tenían multas. El sistema decía lo que debían hacer, pero se saltaba lo de las multas. De partida cree que no era legal, lo hizo porque lo mandan a uno, estaba a contrata, si hubiera dicho no, no sabe qué hubiera pasado, no sabe si lo hubieron cortado, puede ser, no lo sabe. Lo atendió un par de veces más, casi siempre la misma cantidad, casi la mayoría de los permisos venían con multas, después cuando llegó Felipe lo acompañó un par de veces y volvió a sus funciones. Betancourt no le explicó nada. No recuerda si el alcalde, cuando se lo presentó, le dijo que era amigo. Contrastado con la declaración en el Ministerio Público de 22 de abril de 2021, reconoció que sí le dijo que era amigo. Betancourt no le dio regalos o propinas, una vez lo invitó almorzar a “Stilos”. Felipe Paredes le dio la clave, lo llamó por teléfono, le dijo “necesito tu clave, porque el alcalde me pidió girar permisos”. Por su parte, **Julio Hormazábal Muñoz**, señaló que antes trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia, desde el año 2013 al año 2016, era inspector municipal a contrata y participó en campañas de ventas de permisos de circulación, en el año 2013 le hicieron capacitación para apoyar la venta de permisos de circulación, en el 2014 participo en ventas de permisos, fueron capacitados, dijeron que había clientes que venían de fuera para sacar permisos, fue citado a la oficina del Alcalde a una reunión, estaban presente don Martín Arriagada y doña Alejandra Vásquez, después concurrió a Santiago para vender permisos, específicamente, donde Juan José Isuani Larruy. Uno de los motivos porque sacaban permisos era por no cobrar las multas. Alejandra Vásquez y don Martín le hablaron del tema. Mencionó conocer al señor Betancourt, porque iba con frecuencia a sacar permisos de circulación, era prepotente, si no lo atendían amenazaba que iba hablar con don Martín. Piensa que por la cantidad de permisos que traía, no le cobraban la multa, le preguntó a Felipe, éste dijo que eran las indicaciones que le había dado don Martín. Una vez vio a Betancourt que salieron almorzar no sabe si les daba algo, por su parte nunca recibió nada. A su vez, **Sonia Jimena Cuevas Jara**, manifestó ser ingeniero en administración de empresa y haber trabajado en la Municipalidad de Sagrada Familia entre los años 2011 al 2016, a contrata, como funcionaria de licencias de conducir. En permisos de circulación, giraba los permisos desde el año 2012, cuando era por licencia, reemplazaba en las campañas, cuando era funcionaria

todo el año. Sobre la venta de permisos de circulación a Raúl Betancourt, dijo que lo ubicaba, que iba a la municipalidad a comprar permisos sin pagar multas, había antecedentes que se vendía a una persona de Talca, en abril se enteró quién era físicamente, tenía como una automotora y llegaba a pagar los permisos de circulación y no le cobraban las multas, lo veía Felipe, quien tenía la instrucción de no cobrarlas. Mientras que la testigo de la Defensa del acusado Arriagada Urrutia, **Yosselin Urrea Pino**, de profesión contador auditor, que trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia, desde el 2015 al 2022, como secretaria municipal, secretaria del concejo, oficina de partes, tránsito, oficina de partes y finanzas. Hizo presente que en el año 2015, no obstante, no participó en la venta de permisos y que solo conoció de la información cuando se hizo pública, durante parte de ese año hasta el 2016, tuvo una relación sentimental con Felipe Paredes. Es el caso, que afirmó que en el año 2015, Felipe vendía permisos y una vez que se hicieron las denuncias, tomó conocimientos de la irregularidad en el departamento por venta de permisos de circulación con multas impagas y Felipe se vio involucrado. Conversó con Felipe sobre el tema de la venta irregular de permisos de circulación, éste le dijo que no había problema, porque las multas caducaban a los tres años y se podían vender los permisos. No conversó con Felipe, sobre si recibió una orden de vender patentes con multas impagas. Después existió una fiscalización de la Contraloría, desconoce si existió un funcionario sancionado, sí sabe que se efectuaron capacitaciones. Recordó la testigo, que Felipe en varias ocasiones no salió a almorzar con ella, porque lo hizo con un contribuyente de Talca, pero más allá, de existir una amistad entre ellos, no lo sabe. Lo mismo ocurría con don Ignacio. Al señor de Talca, lo recuerda, porque su oficina estaba a la entrada, el nombre lo conoció después, Betancourt, porque debieron revisar los permisos, lo ubicaba por la dirección que era Arturo Prat. Recuerda que declaró en Fiscalía, en esa oportunidad reconoció la fotografía del señor Betancourt. Exhibida la declaración prestada con fecha 6 de junio de 2018, ante el Ministerio Público, reconoció el documento y su firma, también que en esa oportunidad identificó a Raúl Alejandro Betancourt Díaz, como la persona que venía de Talca y se relacionaba con Felipe. El señor, era un poco grosero con las mujeres, vulgar, las hacía sentir incómodas, era alto, crespo y prepotente. Después, en el año siguiente, apareció el señor Betancourt en un módulo, en el cual estaba trabajando, lo atendió un compañero y se

negaron a renovarle los permisos, porque traía permisos con multas y él dijo “se perdieron esta plata”.

Ratifican y complementan los testimonios que anteceden, lo declarado por los funcionarios policiales Alexis Nogues González y Carlos Castillo Manríquez, quienes fueron los encargados de diligenciar la orden de investigar sobre los hechos. Establecido lo anterior, el Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, **Alexis Nogues González**, Señaló estar al tanto de lo que se trata el caso, porque en el año 2015 se recibió en la BICRIM Talca, una orden por delito de estafa, se debía a que en la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia se emitían permisos de circulación de vehículos con multas vigentes, la denuncia fue presentada por Floriano Cruz. Se contactaron con el denunciante, dijo que iba a concurrir a declarar a la Fiscalía. Fueron a la Municipalidad de Sagrada Familia, no se contactaron con el alcalde, sí con Ignacio Arancibia, todos dieron una declaración más adelante. Luego en 2017, se solicitó la incautación de documentos en la Municipalidad de Sagrada Familia. Con la orden de investigar conocieron que había permisos de circulación que se habían renovado con multas vigentes, los revisó en el Registro Civil, tales como las PPU DSSB 83, con más de 100 multas, NY 6788, RF4076 y un par más, NH no recuerda la numeración y otra UR 3924, fueron cotejadas y aun en esa fecha, después de emitido el permiso, mantenían multas vigentes. Exhibida la Prueba documental 4 y 10 del Ministerio Público, consistente en Registro de multas de tránsito no pagadas del vehículo, adjuntado a la orden de investigar, del vehículo BSSB83, afirmó que lo revisó en el 2015, tenía multas impagas, cree que tenía sobre 100 multas; y lo mismo hizo respecto al registro de multas de tránsito no pagadas, de la patente BWFR 71, la PPU RF4076, que son de los vehículos investigados, correspondían a permisos de circulación de Sagrada Familia de marzo 2015, se revisó esas patentes en el Registro Civil y aun mantenían multas pendientes. Recibió una instrucción particular para realizar una incautación en la Municipalidad de Sagrada Familia, que materializó en compañía del funcionario policial Claudio Guevara y Carlos Castillo, retiraron los permisos de circulación, obtuvieron una copia del CD con las multas vigentes, que manda todos los años el Registro Civil, que es la información que verifican al renovar las patentes, un archivador con multas pagados y un disco de respaldo de informática, no sacaron la información de los computadores de los giradores, antecedentes que fueron derivado al Laboratorio de

Criminalística de la Policía de Investigaciones de Talca. No investigaron si una empresa externa cargaba la información. Para realizar la incautación contaban con una autorización judicial. La entrega de la documentación, la realizó Carmen Velasco, quien se desempeñaba en ese tiempo como Directora de Tránsito. Los documentos se encontraban en una bodega ubicada frente a la puerta principal de la Municipalidad, a mano izquierda, otros documentos se hallaban en la esquina, donde está el Departamento de Tránsito. Del año 2014, se retiraron 23 cajas y del año 2105 como 34 o 35 cajas, según recuerda. Tomó una declaración a Raúl Betancourt, quien se acogió al derecho a guardar silencio, pero en agosto de 2018 prestó declaración, al principio dijo que quería conocer los antecedentes. Posteriormente, fue a la BRIDEC de Talca, declaró que trabajaba en compraventa de autos desde hace diez años, que buscaba un lugar para obtener permisos de circulación y que en el año 2014 se encontró con Martín Arriagada en el Mall de Curicó, lo conocía de años, desde el regimiento. En esa oportunidad, le contó que hacía a Martín, éste le indicó que fuera a sacar permisos a la comuna, que necesitaba el dinero para las arcas municipales, le señaló que parte de los autos tenían multas vigentes, Martín le dijo que no había problema, que las puertas estaban abiertas. En marzo del mismo año, fue a la municipalidad, le presentó a Enzo Hormazábal o Felipe Paredes, le dijo que tendría trato especial. Iba todas las semanas para obtener permisos de circulación, sin problemas, lo hizo hasta el año 2015, después le dijeron que no podían dar más, que había una investigación en la Fiscalía de Curicó. Gran parte del Departamento de Tránsito de Sagrada Familia conocía a Raúl Betancourt. Después, en el mismo mes, se tomó una declaración a Felipe Paredes, que es quien más aparece como girador, éste señaló que trabajó desde marzo 2014 a diciembre de 2016 en la municipalidad de Sagrada Familia, partió como inspector municipal en marzo 2014, más adelante le solicitaron ser parte de la campaña de permisos de circulación en la comuna, le proporcionaron capacitación, indicó que fueron muchos los permisos vendidos, le entregaron un timbre y una máquina para el cobro. Aseveró que no solo los vendía, acudía a una automotora en Talca, donde la campaña era fuerte, que en dos oportunidades acompañó al alcalde, quien le indicó pasara por alto las multas y vendiera los permisos, porque eran conocidos. También dijo que en una oportunidad el alcalde recibió la llamada de Enzo Hormazábal, le dijo que estaba en la Municipalidad con Raúl Betancourt, que era un conocido, ya había hablado, iba a llevar dinero a la comuna. Después de eso, comenzó a

vender a Betancourt, pero usando su clave. Después de la temporada de ese año, a mediados o fines de 2015, le indicaron que no podía vender más permisos con multas impagas, por una investigación y trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia hasta fines de 2016. Posteriormente, recibió una instrucción particular, sobre la interceptación de los teléfonos celulares de Martín Arriagada, Felipe Paredes y Enzo Betancourt, en estas escuchas, no fue mucho lo que se obtuvo, pero hay un llamado que está en el informe, que hace Felipe Paredes al alcalde y le dice que lo dejaron de lado, que estaba solo con el juicio, Martín Arriagada le señala que no se preocupe. Felipe le responde que a Enzo le proporcionan un abogado y a él lo dejaron solo. Exhibida la prueba documental N°2 del Ministerio Público, la reconoce como la transcripción del llamado telefónico antes referido, entre Felipe Paredes y Martín Arriagada, de fecha 30 de agosto de 2019. Martín Arriagada señala que se supone que tiene que confiar en las personas que están a su lado. Estaba al tanto que a Felipe le habían facilitado un abogado y lo apoyaban en su defensa. Sobre Betancourt, Martín no desconoce que Felipe Paredes fue mandado, no desconoce que vio a Betancourt y lo saludo de mano. (Efectuó el testigo una lectura completa de la transcripción de la conversación telefónica, como consta del respectivo registro de audio). Raúl Betancourt trabajaba en el rubro de automóviles, sacó permisos en otras comunas también y falleció hace dos o tres años atrás. Betancourt señaló a Ignacio Arancibia, dijo que fue atendido por él en la municipalidad. Felipe en la conversación manifestó que Hormazábal le indicó que Betancourt llevaría muchos permisos a la comuna. Martín Arriagada no prestó declaración con él. Hay contradicciones en las escuchas telefónicas, de ellas se deduce que el alcalde estaba al tanto, en todo minuto culpó a Betancourt, dentro de la investigación se determinó que fueron muchos los permisos de circulación renovados con multas impagas, incluso uno para su madre. Martín Arriagada con Raúl Betancourt tenían nueve años de edad de diferencia, los dos hicieron el servicio en la escuela militar de Curicó, el alcalde dice que fue de la aviación, Betancourt mencionó el ejército. Felipe Paredes dijo que Enzo llamó al alcalde y se dieron instrucciones. En la declaración de Felipe Paredes refiere esa situación. Los dichos del agente policial resultaron refrendados con los expresado por el detective de la Brigada de Delitos Económicos de Talca, **Carlos Castillo Manríquez**, quien aseguró haber acompañado al comisario Nogues González, en todas las diligencias relacionadas a la investigación de renovación de permisos de conducir con multas impagas

en la Municipalidad de Sagrada Familia, participando también, en la incautación de documentos y presenciado la declaración de los imputados.

Luego, para establecer el status de funcionario público de quien interviene en razón de su cargo en la operación que provoca un detrimento patrimonial al Fisco, fue considerados la prueba testimonial producida en la audiencia por los acusadores, principalmente funcionarios de la I. Municipalidad de Sagrada Familia, quienes reconocieron al acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, como la autoridad edilicia de la comuna señalada, durante los años 2014 y 2015, en que acontecieron los hechos descritos al comienzo de esta consideración, así lo afirmaron **Carmen Velasco Ponce, Marisol Silva Bravo, Ricardo Hormazábal Sánchez, Juan Duque Rojas, Leticia Saavedra Ramírez, Marta Elizabeth Tapia y Ana Lillo Gutiérrez**. El mismo reconocimiento efectuaron, todos quienes prestaron servicios en el municipio de Sagrada Familia durante la época de los hechos, **Fernando Oyarzún Riquelme, Ignacio Arancibia Castro, Julio Hormazábal Muñoz, Fabián Riquelme Solis, Sonia Cuevas Jara y Felipe Paredes Baeza**. Igualmente, los funcionarios policiales de la Brigada de Delitos Económicos, señores **Alexis Nogues González y Carlos Castillo Manríquez**, atribuyeron al acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia el cargo de alcalde de la comuna de Sagrada Familia, investidura que le confirió la también acusada en esta causa, **Isabel Alejandra Vásquez Espinoza**, calidad que por lo demás, reconoció el mismo acusado en el juicio, por consiguiente, es un elemento del tipo penal, no discutido en el juicio.

Sin perjuicio de lo antecedentes probatorios expuestos en el párrafo anterior, la investidura del Alcalde de la comuna de Sagrada Familia, el acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, resulta de abundante prueba documental aportada por ambas defensas, tales como, de la copia de la resolución dictada por la Contraloría General de la República, con fecha 25 de octubre de 2017, que aprueba el convenio de colaboración para la evolución del programa de apoyo al cumplimiento entre la Contraloría y la Municipalidad de Sagrada Familia, suscrito por el Contralor Regional Alejandra Pavez Pérez y por Martín Arriagada Urrutia, como Alcalde del municipio, incorporado como prueba documental N°2 de la Defensa de Arriagada Urrutia; Decreto Alcaldicio N°1020/2014, de 3 de septiembre de 2014, que designa a Isabel Vásquez Espinosa en el cargo directivo de la Unidad de Control Interno, bajo la firma del Alcalde, Martín Arriagada Urrutia, incorporado como

prueba documental N°8 de la Defensa de la acusada Vásquez Espinosa; Decreto Exento N1858, de 7 de mayo de 2013, que designa a Isabel Vásquez Espinosa, en la función de control interno, incorporado como prueba documental N°7, de la Defensa de Vásquez Espinosa; Decreto Exento N°2225, de 4 de agosto de 2015, que designa a Isabel Defensa de Vásquez Espinosa, incorporado como documental N°9, de la Defensa de Vásquez Espinoza; Decreto N°451, de 25 febrero de 2014, comisión de servicio de los funcionarios Felipe paredes y Julio Hormazábal, Incorporado como documental N°16, de la Defensa de Vásquez Espinosa; todos los anteriores bajo la firma del Alcalde Martín Arriagada Urrutia; Ord. 180, de 17 de octubre 2014, dirigido por la Jefe Subdepartamento de Registro Especiales, del Registro Civil e Identificación, al Alcalde Martín Arriagada Urrutia, prueba documental N°36 y copia de cierre sumario administrativo instruido por la Secretaria del Juzgado de Policía Local, como Fiscal Instructor, al Alcalde Martín Arriagada Urrutia, de 31 de mayo de 2019; y Ord. N°505/2019, del Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, a Mario Santelices Urrea, Director de Administración y Finanzas del mismo municipio, documentales N°29, 31 y 36 de la Defensa de Vásquez Espinoza.

Sobre la pérdida o privación de ganancia del Fisco que encuentra su origen en las operaciones realizadas por el servidor público en razón de su cargo, que es otro de los elementos exigidos por la figura penal, fue apreciado el informe contable elaborado por la perito del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, **Pamela Pino Salinas**, quien declaró ser contador público y haber realizado los informes periciales, seis en total, respecto de los permisos de circulación emitidos en los años 2014 y 2015, por funcionarios de la Municipalidad de Sagrada Familia. Para tal efecto, fue citada por orden del fiscal, para acompañar a los colegas de la Brigada de Delitos Económicos, en agosto de 2017, en una incautación de permisos de circulación correspondientes a los años 2014 y 2015. Concurrieron y realizaron la incautación de diversa documentación relacionada con los permisos, treinta cajas con documentos del años 2014, más treinta y cuatro o treinta cinco cajas de documentos del año 2015. Las antecedentes no estaban físicamente en un lugar, se hallaban distribuidos en el municipio, había archivadores con documentos, un informe de la municipalidad, en que se determinó 575 permisos de circulación del 2014, con multas vigentes o sin pagar. Ese informe registraba las PPU, N° ID, fecha de ingreso, Rol causa, nombre del tribunal de Policía Local, fecha sentencia, multa y monto de la

multa. Se le pidió revisar los 575 permisos para determinar el monto de las multas al momento de emitir permiso. Ahí nació el informe N°21, para realizarlo la fiscalía puso a su disposición tres CD, confeccionados por el Registro Civil, de acuerdo a la normativa vigente. Todos los años se envía a las municipalidades un CD con la base datos que consolida las multas impagas vigentes al 30 de noviembre del año anterior, para el 2014, manda base al 30 de noviembre de 2013. Lo manda en diciembre de 2013 a las municipalidades. Pidió autorización a la PDI para cargar el sistema en sus computadores, lo hicieron por vía remota y se cargó el CD de 2014, se determinó 575 placas patentes, revisaron y había 550 que presentaban 8.080 multas que equivalía a un monto de \$325.000.000. El informe N°21, detalla por cada placa patente la cantidad de multa encontradas. Ese informe fue solo para contabilizar la cantidad de multas. El registro es una base de datos en que se ingresa la PPU, el valor UTM, el permiso de circulación, se abre la pantalla, se oprime la tecla consultar, salen todas las multas asociadas a la PPU, al momento de la renovación del permiso, así se determinó en el informe N°30. El Informe N°6 de 2018, son las placas patentes de 2014, en este informe lo que se hizo fue que se consultó la base de datos de patentes al 30 noviembre 2013, que determino que había alrededor de 7482 permisos de circulación en la Municipalidad de Sagrada Familia, 575 presentaban multas vigentes no dijo monto, era un trabajo sistemático, aun no estaba cuantificada la multa. Informe N°12 de 2018, cuantifica la cantidad de multas del año 2014, en 575 permisos. Se dio cuenta en la revisión que había multas que en el mismo año se duplicaba, porque se sacaba el permiso en dos cuotas, si las consideraba, las duplicadas, esos permisos de segunda cuota, no los consideró. Determinó que 397 permisos vendido en 2014 presentaba 3248 multas que no se pagaron y que el monto total de las multas no cobradas ascendía a \$150.707.784. El informe tiene cuatro segmentos, permisos, multas, cantidad de multa y observaciones. Permiso de circulación son 575 PPU, las multas asociadas a las placas patentes, no al Run o rol de causas. Exhibido el Informe N°12 de 29 de mayo de 2018, reconoce su firma que está en cada página del citada informe. En la página 6, está el detalle de multas de tránsito no pagadas asociadas a los 397 permisos de circulación. Las multas las trajo del programa del Registro Civil. En la parte de las placas patentes, se indica la PPU, lo primero es el ID que identifica a la multa, rol de causa asociado a la multa, año del rol causa, cuando fue cursada la multa, juzgado de la multa,



comuna de la multa, fecha de la sentencia, propietario, monto, arancel y la última dice TAG( si o no). Contabilizó, para ello fue a la columna monto multa, son en total \$150.707.784. Cuando el contribuyente paga la multa, la municipalidad saca el comprobante y gira un arancel, es decir, cargos por el pago de multa. Otra planilla resumen, estipula comprobante de pago y multas no pagadas, en caja 1, PPU, número comprobante 9239 folio interno de la municipalidad, asociada a la PPU TH 5923-1, se emitió el comprobante el 14 de febrero de 2014, al consultar en el Registro Civil de multas de tránsito, tenía 17 multas impagas que totalizaban \$815.352. Otro ejemplo del mismo cuadro, línea 5, de la caja 12, folio 16210 de permiso circulación asociado a la PPU VD 6424 -0, fecha de emisión 29 de marzo 2014, al renovar el permiso el girador lo emitió el permiso teniendo 163 multas impagas, que totalizaron el monto \$8.436.175. Otro caso, línea 12, asociada a la PPU YL6787-5, tenía 276 multas cuyo monto totalizaba monto de \$13.980.640 en multas, 29 de marzo de 2014. También en la misma planilla pagina 7, había patentes correlativas, por ejemplo, caja 14, encontró folios 16859, 16860 y 16862, se supone que es la misma persona que renovó tres permisos, estaba la PPU DCVK 93-9, DCVK 94-7 y DCVK 96-3, todos giradas el 30 de marzo de 2014, la primera tenía 16 multas \$969.681, la segunda 17 multas, por un monto de 1.058.944 y la tercera con 16 multas por un monto de \$828.250. Así sucesivamente fue determinando, otro caso línea 38, caja 16, folio 16687, 654 multas, asociadas a la PPU TP 4369, monto \$28.3336.567. Los giradores de la Municipalidad de Sagrada Familia vendían permisos teniendo multas impagas, cuyos montos no ingresaron a las arcas municipales de esa fecha. Informe 30 de 2018, tiene 5 anexos, relacionado con placas patentes de 2015, antes dijo que el primer informe lo hizo en base a un informe de la municipalidad, que determinó 575 placas patentes, abarcaba desde el 1 de enero al 10 o 20 de octubre, el informe que hizo totaliza todo el año 2015, reviso todo el 2015, todas las cajas que eran alrededor de 34 cajas de los permisos asociados al 2015. En este informe, en el anexo 1, multas no pagados en el proceso de renovación de permiso de circulación año 2015. Anexo 1, contabilizó por caja, cada placa patente, desde la caja 1 a la 34, registró el folio girador, folio comprobante del permiso, PPU, tipo de pago, total o cuotas 1 y 2, registro de multa tránsito, por ejemplo, PPU FDRD 46, girado 13 de enero 2015, registro se pagó el total del permiso, a esa fecha, tenía 1 multa de \$43.198, total multa más arancel \$2.700 y total a pagar \$45.898. En la

línea 14, comenta la PPU SU9301, que se vendió el 06 de marzo de 2015, con 61 multas, por un monto de \$3.346.109. En la línea 49, caja 9, PPU TV4733, tenía una multa, por \$43.068, estaba pagada en el municipio de Sagrada Familia el 24 de marzo, el comprobante de pago dice rol multa y se pagó \$45.000, pero la multa queda pendiente de pago, porque tenía 2 multas y solo pago una, se adjuntó el comprobante de la única pagada. Había permisos que adosaban un solo un comprobante de pago, si correspondía lo rebajaba. También hubo permisos que tenían 10 multas y adosaban 7 comprobantes que no correspondían. El trabajo se demoró, porque había que identificar el permiso, luego extraer desde el registro de multas la imagen donde venía la multa, cuantificarla, después revisarla con la documentación a la vista para ver si había comprobante de pago, para ver si estaba pendiente al momento de emitir el permiso de circulación. En el 2015 los funcionarios de la Municipalidad de Sagrada Familia vendieron 11.500 permisos, de los cuales 991 permisos de circulación estaban asociados a placas patentes que presentaban multas impagas, que quedaron vigentes, vendieron el permiso, pero el contribuyente no pagó las multas en esa fecha y dejó de percibir el municipio \$675.585.982. En la página 9, se indica 14.493 multas impagas asociadas a 939 permisos de circulación, aclara, que son 991, pero en la página 4, se menciona que en 36 permisos la multa se pagó al renovar el permiso y 16 permisos que el contribuyente al pagar llevaba un comprobante de pago girado en otra municipalidad o comprobante que estaba en un Juzgado de Policía Local, esas placas patentes únicas, 52, las rebajó de las 991 PPU asociados a permisos de circulación, quedando los 939 permisos de circulación o PPU que estaban sin comprobantes de pagos. En este mismo informe hay otro anexo, le llamó la atención que, en el 2015, hizo uno con detalle de multas sobre \$500.000, eran 257 permisos de circulación, es extraño que un funcionario emita permisos con multas sobre esa suma de dinero. Le llamó la atención lo que dice el anexo N°5, pues en el 2014, determinó las 397 patentes o permisos girados con multas vigentes, en el 2015 determinó un mayor número de permisos de circulación renovados con multas impagas, fueron 939 PPU, el estudio le permitió percatarse que había PPU que se repetían, que se renovaron en los dos años con multas vigentes, fueron 149 permisos de circulación o PPU, por ejemplo la ZB 2700-6, girada el 24 de octubre de 2014, que en ese fecha tenía dos multas impagas, por \$27.200 cada una, la misma PPU en 2015, tenía las mismas multa con reajustes, pero era la misma cantidad de multas. Exhibido el anexo 5, explicó que en color blanco está el año

2014 y en color amarillo el año 2015, por ejemplo la N°1, correspondiente a la caja 1, año 2014 y después, caja 2, año 2015, registros asociados a la PPU TH5923-1, el año 2014 giró el permiso de circulación el 16 de marzo de 2015, el año 2014 tenía 17 multas del año 2013 y en el año 2015 tenía 17 multa que son al 30 de noviembre de 2014. La diferencia de monto total es por la actualización del valor UTM. Lo anterior deja en claro que era habitual que se giraban los permisos de circulación con multas vigentes de otros años. Desconoce si había una lista o nómina, o se corría la voz, en la Municipalidad de Sagrada Familia no cobran las multas, o había algún acuerdo para girar los permisos sin pagar los contribuyentes sus multas. Informe 11- 2019, lo único que se hizo fue separar los permisos de circulación que tenían multas, se pidió, porque la Municipalidad necesitaba los permisos de circulación. Asociaron en una NUE los permisos 2014 y otra NUE los del 2015. Informe N°5 - 2020, se solicitó que detallara el trabajo conforme a la que se exhibe en audiencia, que se hizo conforme a la base datos del Registro Civil, anexo Word de informe 12-2018. El Informe 5-2020 solicitó la Fiscalía se complementaran los informes anteriores, singularizando, a parte identificar multas, a quienes fueron los giradores, el funcionario que emitió el permiso de circulación. Este informe trata de los permisos de circulación con multas impagas identificados que presentaban multas en los años 2014 y 2015. Determinó en el año 2014, que eran 397 permisos y alrededor de 10 giradores con sigla, en el 2015 que fueron 939 permisos de circulación, conforme al anexo donde están individualizados los giradores, se indica cuantos permisos giraron y las multas asociadas con el monto. El anexo tiene dos tablas una 2014 y otra del 2015, donde se señala los giradores. Detalle de multas de tránsito no pagadas año 2014, anexo 4, informe 12-2018. Tiene 104 páginas, individualizados por cajas, en el año 2014 fueron 33 o 32 cajas, por ejemplo caja 1, folio N°9135 al folio 9174, por ejemplo, la PPU TW 8786, al ingresar al registro de multas sale una pantalla con todas las multas, esta tiene 2 multas, están los ID 7378677, asociadas al rol causa 238485 año 2012, del 1° JPL de San Bernardo, de fecha 16 de abril de 2013, motivo TAG, esa placa estaba asociada a un RUT determinado que correspondía a Fernando Miranda Moreno domiciliado en la comuna de Sagrada Familia, por un monto de multa de \$40.935 más el arancel \$2.700. Así sacó imágenes de cada placa patente asociada a un permiso de circulación, después verificó si las dos multas con la prueba incautada en la Municipalidad de Sagrada Familia estaban los respaldos de pago, por un total de \$81.870,

no tenía respaldos de pago. Hay otra PPU con 17 multas no pagadas, la TH5923, esta información la extrajo de la base de datos del registro de multas impagas del Registro Civil. Otra PPU con 9 multas no pagadas es la LW8283, que tenía documentos, pero no correspondían con el ID, de 6 comprobantes de pagos, solo 1 correspondía a la multa. Puede haber documentos que no se obtuvieron, pero fue lo facilitado por la Municipalidad de Sagrada Familia. Volviendo al Informe 5-2020, consistió en informar que identificara quienes eran los giradores, en un extremo superior aparece una sigla asociado al girador funcionario. En la página 2 del informe, lo que solicitó la Fiscalía por oficio fue un detalle del girador de permisos de circulación año 2014, que se determinaron 397 permisos de circulación que registraron 3.248 multas impagas al momento de su venta o renovación, por un total de \$150.707.784, en la primera columna está el número de permiso, girador, cantidad multas y montos. Por ejemplo, AVASQU, JHORMA, JIMENA, por ejemplo, JIMENA giró 74 permisos de circulación, esos registraron 1.189 multas impagas, por un total de \$52.754.407. Es un desglose total monto para identificar a cada funcionario. Otro MSILVA, 31 multas, giró 11 permisos de circulación, por un monto de \$1.300.963. Otro ADMIN, no sabe si es administrador o administrativo, 10 permisos, con 33 multas, por un monto de \$ 1.627.863. En el 2015, hay 10 personas, que giraron 939 permisos de circulación con multas impagas a la fecha de la renovación de la PPU, dentro de ese número consideró 12 permisos girados por NN, correspondientes a 627 multas. En el año 2015 se repitieron los funcionarios, MSILVA, 4 permisos, con 5 multas, por un monto de \$220.722. JHORMA giró 155 permisos, 1623 multas, correspondientes a \$78.471.607. XIMENA, 151 permisos, 605 multas, por \$29.322.023. FPARED, fue el que más emitió, 581 permisos, 11.433 multas, por un monto de \$531.000.000. En el año 2014 se emitieron 397 permisos de circulación con 3,348 multas vigentes a la época del giro, de acuerdo con las bases del Registro Civil, por un total de \$150.707.784. En el año 2015 se renovaron 939 permisos de circulación con 14.493 multas vigentes a la época del pago, que significa un aumento sobre el 300%, al año anterior, por un total de \$675.585.982. Trabaja en el LACRIM Talca, desde hace 22 años en la Policía de Investigaciones, realizando peritajes contables. Así, realizó en el año 2016, un peritaje contable en la Municipalidad de Pelarco, por el delito de Fraude al Fisco, también por un problema de permisos de circulación, pero diferente a este caso. En este peritaje, partió en el año 2017, el último informe lo hizo el

año 2020, sola, revisó uno por uno los permisos. Revisó en el 2014 como 7.000 permisos y determinó 397 permisos de circulación girados con multas impagas, que representa un 7,8% del total de multas impagas y en el 2015 revisó 11.000 permisos de circulación y determinó 939 renovados con multas sin pagar, cerca del 6% de las multas impagas. Señaló que los permisos 2014 corresponden a la NUE 1337204 y 2015 NUE 1337205. Reconoce las cajas con legajos y los folios relacionados con las imágenes mostradas.

En consecuencia, analizados los seis informes elaborados por la perito contable del LACRIM, especialmente para los efectos de determinar la pérdida causada al erario fiscal, se tuvo en vista, el informe N°30 en su anexo N°1, Folio 4812 PC Folio 26444, cuantificó el monto de la pérdida en \$5.211.228, a consecuencia de la renovación del permiso de circulación asociado a la PPU BSSB con 121 multas no pagadas al momento del giro del citado permiso. En el caso de la PPU BWFR71, el Informe N°5 anexo 2, establece que monto del perjuicio ascendió a la cantidad de \$4.091.460, considerando que fueron 95 las multas no pagadas existente al momento de la renovación del permiso de circulación. Respecto de la PPU CLTF43, el Informe N°30 anexo 1 Folio 4845, PC Folio 26450, cuantifica en la suma de \$2.411.808, el monto de la pérdida provocada al Fisco por la venta del permiso de circulación asociada a la patente señalada, sin el previo pago de las 56 multas impagas que registraba al momento del giro. De acuerdo con lo establecido en los informes N°30 y 5, se determinó que el perjuicio ocasionado al Fisco con la venta del permiso de circulación asociado a la PPU NY6788, sin el cobro de 35 multas impagas, ascendió a la suma de \$1.507.380. A su vez, el informe N°30 en su anexo N°1, FG 5534 PC Folio 25616, cuantificó el monto de la pérdida en \$1.201.458, a consecuencia de la renovación del permiso de circulación asociado a la PPU LW8279 con 28 multas no pagadas al momento del giro del citado permiso. Mientras que de acuerdo al Informe N°30 y 5, determinó en la suma de \$990.564, la pérdida causada al Fisco, por la venta del permiso de circulación asociado a la PPU UR3964, no obstante, que tenía 23 multas impagas. Por último, el Informe N°30, anexo 1, FG 4791, PC Folio 25893, cuantificó la pérdida al fisco en la cantidad de \$861.360, por la venta del permiso de circulación, no obstante, de existir 20 multas impagas.

Para los efectos de cuantificar los montos consignados, la perito contable los actualizó al valor de la Unidad Tributaria mensual al mes de marzo del año 2015, que hace época ascendía a la suma de \$43.068.

En coincidencia, con las conclusiones obtenidas por la perito contable Pino Salinas, se encuentra la observación N°17, del Informe N°1.121 de la Contraloría Regional del Maule, conforme con lo declarado en el juicio por los funcionarios de la referida institución, los auditores, Ángela Domínguez Albornoz, Sandra Santander Moreno y Claudio Gálvez Rosas, quienes debieron abordar la auditoría en ingresos propios realizada a la Municipalidad de Sagrada Familia, específicamente en los permisos de circulación en el período auditado que correspondió a los años 2014 y 2015, dentro del marco de una revisión anual que abarcaba también otros ámbitos. Al respecto de los permisos de circulación, la Contraloría consideró dentro de los antecedentes analizados, presentaciones efectuadas, sobre permisos vendidos con multas impagas y esencialmente la base de datos usados por la municipalidad para el giro de los permisos, emanada del registro Nacional de Multas de Tránsitos no Pagadas del Registro Civil y otras páginas web de libres acceso. Así, efectuada, la investigación, se observó en el N°17 de las conclusiones del informe la renovación de permisos de circulación sin requerir el pago de las multas impagas. Ratifica las declaraciones de los funcionarios del Organismo de control, el informe N°1.121 de la Contraloría Regional del Maule, de fecha 23 de diciembre de 2016, incorporado como prueba documental N°19 del Ministerio Público, observación N°17 que indica, “en la renovación de permisos de circulación a contribuyentes sin requerir permiso de pago previo de multas impagas, letra a) y b), la máxima autoridad comunal deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios responsables de la ocurrencia de los hechos descritos en las letras precedentes, proporcionando el acto administrativo a este organismo de control , en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final”; y el anexo N°10 del mismo informe que detalla veinte permisos de circulación asociados a determinadas placas patentes, que fueron renovados sin requerir el pago previo de las multas impagas, dentro de un universo de muestra integrado por 115 patentes, comprendidas entre ellas las PPU referidas en las presentaciones, entre las cuales figuran las PPU BSSB83 con 122 multas impagas, BWFR71 con 110 multas impagas y CLTF43 con 56 multas impagas, todas

emitidas o giradas por el usuario “FPARED”. Lo anterior es relevante, pues la presentación fue realizada en contraloría por Floriano Cruz Muñoz, fundado en los antecedentes proporcionados por la tesorera a la época de los hechos, Carmen Velasco, que como afirmó en la audiencia de juicio oral, su sospecha surgió a raíz de la constante presencia de Raúl Betancourt Díaz en la municipalidad con el objeto de renovar permisos de circulación, lo que determinó investigar las PPU asociadas a los permisos que le fueron vendidos al citado contribuyente, percatándose que tenían multas impagas que no fueron cobradas al tiempo del giro.

En lo que respecta a los hechos acontecidos el 31 marzo de 2015, relacionados con vehículo placa patente FGYL85, se pudo establecer que se renovó el permiso de circulación el año 2015, en la I. Municipalidad de Sagrada Familia, no obstante poseer multas impagas, conforme se colige de la prueba documental N°21 del Ministerio Público, esto es, la copia original de comprobante de pago del referido permiso número 026241, correspondiente a la primera cuota por el monto de \$57.572, de fecha 31 de marzo de 2015, más el documentos anexo “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de la misma fecha y valor, consignando ambos documentos como emisor la clave usuario “FPARED”, además, con el nombre de la propietaria Lucila Urrutia Campos, según el RNVM a esa época. En cuanto, a la existencia de multas impagas al tiempo en que se giró el permiso de circulación referido, resultó acreditado con la prueba documental N°23 de la Defensa del acusado Arriagada Urrutia, correspondiente a un pantallazo de la página web del Registro Nacional de Multas de Tránsito no Pagadas, que consigna entre otras multas impagas, las correspondientes al rol 273669 del Juzgado de Policía Local de Maipú, ingresada al Registro de Tránsito de Multas Impagas del Registro Civil con fecha 7 de abril de 2014; y rol 2258042 del Juzgado de Policía Local de La Cisterna, ingresada a ese registro el 20 de noviembre de 2014.

Luego para acreditar la forma como se gestó y se desarrolló en el tiempo la dinámica defraudatoria al interior al de La Municipalidad de Sagrada Familia, y la manera en que resultaron advertidos y denunciados los hechos, fueron considerados los testimonios de los denunciantes, los concejales del ente edilicio, a la época de los sucesos, Floriano Cruz Muñoz, Carmen Velasco Ponce y Anselma Hernández Avilés, ya consignados en otro párrafo de esta motivación, los que se tienen por reproducidos. Con todo, se consideró en particular lo expresado por el testigo Floriano Cruz Muñoz sobre los hechos relacionados a

la mencionada placa patente, señalando al efecto, que en cuanto al auto de la mamá del alcalde, según el documento del Registro Civil, cuando se sacó la patente estaba con multas impagas. No sabe cuándo el Registro Civil manda la información, pero el que vendió, debió haber tenido el recibo de pago, cuando dio el permiso. Exhibida la prueba documental N°23, señaló que se trata del registro de multas de tránsito pagadas, del Registro Civil, respecto de la PPU FGYL 85, que indica “para obtener permiso año 2022, al 30 de noviembre de 2021 multas registradas y según consta del documento “no se registran multas actualizado al día de hoy”, base de datos del registro Civil. Exhibido un correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2023, de Liceth Parra Garrido, asunto pantallazo de multas de placa patente FGYL 85, que indica “estimada envío pantallazo de multa de PPU FGL 85, las 6 multas, eliminada por la Municipalidad de San Bernardo, todas fueron rebajadas de nuestro sistema el día 06-05-2015”. Aparece el rol de cada causa, son 8 roles, dice “estado: eliminadas por pago”, todas eliminadas por pago. Rol 1976/2023, San Bernardo, del 1° Juzgado de Policía Local; Rol N°1976, PPU FGYL 85, concuerda con el primer rol, según el documento, la multa se pagó, la suma ascendente de la multa fue \$48.598, el día 26 de enero de 2015. Timbre de la I. Municipalidad de San Bernardo, Tesorería, multa por TAG; Causa Rol 203697-2013, concuerda el rol. Multa por TAG, del 1° Juzgado de Policía Local de San Bernardo. Rol N°203697. Pago \$48.598. Timbre de la Municipalidad de San Bernardo. Pagado; Causa Rol N°102771-2013, del 1° Juzgado de Policía Local de San Bernardo, concuerda el rol con orden de ingreso, por multa PPU FGYL 85, rol causa N°102771, pago \$35.798. Timbre de Tesorería Municipalidad de San Bernardo; Causa Rol N°169666 2014, vehículo PPU FGYL 85, el mismo, pago \$48.598, 26 de enero de 2015. Timbre de Tesorería, San Bernardo, multa por TAG; Causa Rol N°162342, del 1° Juzgado de Letras de San Bernardo. Pago \$48.598. 26 de enero de 2015; Causa Rol N°197396. Pago \$48.598, Juzgado de Policía Local San Bernardo. 26 de enero de 2015; Causa Rol N°75435, Juzgado de Policía Local San Bernardo, pago \$35.798, realizado el 26 de enero de 2015. Documentos de Sagrada Familia, causa Rol N°273669, PPU FGYL 85, I. Municipalidad de Sagrada Familia. Pago \$ 48.016, el día 11 de abril de 2016. No sabe cuándo sacó el permiso circulación la mamá del alcalde. Las multas según los documentos exhibidos fueron pagados en enero de 2015 y abril de 2016, la patente del



año 2016 la sacó el 11 de abril de 2016, en esta última renovación no habría cometido delito, porque así lo estipula la ley.

Seguidamente, fueron trascendentales las declaraciones de los testigos Felipe Paredes Cáceres y Giuliano Espinoza Reyes, para comprender como se gestó la operación de renovación del permiso de circulación con multas impagas. Así el testigo **Giuliano Espinoza Reyes** relató que compró un auto usado en el año 2015, en la Automotora Alameda, ubicada en Yungay con Vidal en Curicó. La persona que se lo vendió, un hombre, le mostró varios autos, había un Kia Cerato, 2013 y lo cambió por ese, bajo el modo compra inteligente. La patente del auto era PPU FGYL 85, aun lo tiene. Le dijo el vendedor que los papeles estaban al día, no le mencionó de quien era el auto. Pagó un tanto y después en cuotas. No le hicieron la transferencia, la compra fue en febrero y en marzo quiso sacar el Permiso en Curicó, pero le dijeron que no podía, no estaba habilitado, no le explicaron el problema, fue a la automotora y ellos le hicieron los papeles, estaba otro vendedor, le dijeron que pasara la plata del permiso y los documentos, que ellos hacían el trámite. Tres días después le dijeron que estaban listos los papeles y sacaron el permiso de circulación. Estaba al día, pero no estaba aún a su nombre, le señalaron que en el transcurso de los días le daban los documentos, que llegarían a su casa, pero nunca llegaron. En Marzo de 2016, fue a Teno a sacar la patente, le dijeron que había una deuda impaga, le sacaron un certificado que era por bastante plata, fue enojado a la automotora, le dijeron que dejara todo y le solucionaba el problema, pasó una semana, lo llamaron otra vez, le pasaron un certificado del pago de las deudas y venía el auto a su nombre. Después no tuvo más problemas. La segunda cuota del 2015 la pagó por internet, pero de la automotora le dijeron que llamara a la municipalidad, a los 10 minutos le dijeron que ya podía pagarla, y pasó el pago por internet, eso fue la segunda cuota del 2015. No supo a quién pertenecía el auto. En el 2016 tuvo problema y fue a Teno, ahí le dijeron que había multas impagas. Contrastado con la declaración prestada ante la PDI por delegación del Fiscal, de fecha 05 de julio de 2017, reconoció su declaración y explicó que dijo que todo el 2016 no tuvo problema alguno, porque se equivocó, hay un año de desfase en lo que declaró con ellos, cuando prestó declaración el 2015 era 2016. Era bastante plata de multa la que dijeron en Teno. Contrastado nuevamente con la misma declaración anterior, expuso que le indicaron que el auto tenía multa por cuatro millones de pesos. No conoce al alcalde de Sagrada Familia y

tampoco a la dueña del auto. No sabe qué pasó con la multa de 4 millones de pesos. Luego el funcionario municipal girador del permiso de conducir asociado a la PPU FGYL85, **Felipe Paredes Baeza**, recordó una situación con el auto de la mamá del Alcalde, se giraba el permiso sin pagar las multa, cree que lo giró un año, pero tendría que verlo. Exhibida la prueba documental N°3 del Ministerio Público, reconoció que se trata del permiso circulación 2015 de la PPU FGYL85, que tiene su clave “FPARED”, giró la primera cuota del 2015, el día 31 de marzo de 2015 y ese permiso tenía tres cuotas. Más adelante de su declaración, reconoció la prueba documental N°23, del Ministerio Público, consistente en un legajo de documento del permiso circulación asociado a la placa patente HGYL 85, reconoció que corresponde al auto de la mamá de don Martín, primera cuota 2015, la cual giró, está el seguro y revisión técnica. En el comprobante de pago está su clave y no hay anexo de comprobante de pago de multas. Además, refirió que Jimena en marzo de 2016, estando en el trabajo, le comentó que había pagado la multa del auto de la mamá del alcalde, para pagar la segunda cuota, porque no podía pagar el dueño, éste se tuvo que poner en contacto y ahí Jimena pagó la multa. A continuación, Sonia Jimena Cuevas Jara, sobre el permiso de circulación de la mamá del Alcalde, dijo que lo giró el 2016, que en esa oportunidad se acercó un señor Ahumada, que era chofer del Alcalde, le señaló que necesitaba saber el valor del permiso y de las multas, le dio los valores, el Alcalde estaba en la sala de concejo, al rato volvió, le dijo que lo girara, que lo iban a pagar completo, fue con los documentos a la tesorería, le entregó la documentación, venía todo pagado, también las multas. Estaba atendiendo público normal, no debe haber sido para la campaña. Exhibidas las pruebas documentales N° 6 y 8, del Ministerio Público, las reconoció y comentó que giró el permiso de 2015 y también giró el permiso de 2016, el día 11 de abril de 2016, cuando pagó las multas. De acuerdo con lo expresada por la última testigo, ilustraron al tribunal, los documentos recién referidos, consistentes en la copia del permiso de circulación asociada a la placa patente FGYL85, de fecha 31 de marzo de 2016, incorporado como prueba documental 7.

Avanzando en la comprobación de los presupuestos fácticos, para establecer el status de funcionario público de quien intervino en razón de su cargo en la operación que provocó un detrimento patrimonial al Fisco, se valoraron los elementos de convicción singularizados precedentemente en este mismo razonamiento, los que se tienen por

reproducidos, que permiten concluir que el acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, a la época de los hechos era la máxima autoridad de la Municipalidad de Sagrada Familia.

En último término, respecto a los hechos asociados a la PPU FGYL85, corresponde referirse a la concurrencia de perjuicio para las arcas fiscales producto de la renovación del permiso de circulación asociados a la patente enunciada con multas impagas, fue considerada la prueba documental N°13 de la defensa del acusado Arriagada Urrutia, que proporciona el monto total de las dos multas existentes al momento de la emisión del permiso, ascendentes a la suma de \$83.814, según la base de datos del Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas.

A continuación corresponde tratar la operación acontecida el día 31 de marzo de 2014, que dice relación con la misma placa patente FGYL85, oportunidad en que fue renovado el permiso de circulación, no obstante, poseer dos multas no pagadas, lo que se pudo acreditar, con las copias de los comprobantes de pago del referido permiso, números N°17268 y 17269, el primero correspondiente a una cuota del año anterior y el segundo al permiso de circulación año 2014, de la I. Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, por montos de \$86.368 y \$154.617, y con los documentos anexos “folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, ambos de la misma fecha y valores. Así, los referidos documentos consignaban a Lucila Urrutia Campos como propietaria y mencionaban como emisor de los antecedentes la clave de usuario “FRIQUE”. En cuanto, a la existencia de multas impagas al tiempo en que se giró el permiso de circulación referido, resultó acreditado con la prueba documental N°23 de la Defensa del acusado Arriagada Urrutia, correspondiente a un pantallazo de la página web del Registro Nacional de Multas de Tránsito no Pagadas, que consigna entre otras multas impagas, las correspondientes al rol 197.396-2013 del Juzgado de Policía Local de San Bernardo, ingresada al Registro de Tránsito de Multas Impagas del Registro Civil con fecha 6 de marzo de ese año; y rol 203.697-2013 del mismo Juzgado, ingresada a ese registro el 14 de marzo de 2014.

En segundo término, para entender la forma y circunstancias en que se verificó la renovación del permiso de circulación sin previo pago de las multas vigentes, se tuvieron en cuenta los testimonios de quienes denunciaron los hechos, Floriano Cruz Muñoz, Carmen Velasco Ponce y Anselma Hernández Avilés, ya consignados en los párrafos anteriores y que se tienen por reproducidos, más los dichos del funcionario girador del

documento, Fabián Elías Riquelme Solís, quien declaró que trabajó en la Municipalidad de Sagrada Familia, en el 2014 cuando realizó una práctica profesional de administración de empresa, comenzó en enero, terminó en abril, en septiembre u octubre entró formalmente a trabajar en la Municipalidad, estuvo hasta octubre, en labores administrativas y apoyo en permisos de circulación y secretariado. Realizaba el trabajo de girador de permisos de circulación, durante todo el período de apoyo, en el año 2014. Le dieron una capacitación simple por Alejandra Vásquez, ella estaba a cargo de su práctica. La instrucción fue cómo se giraba, cómo se realizaba cobros, las ventanas que se desplegaban en el sistema. Le dijo Alejandra Vásquez que no se podía girar permisos con multa, era lo principal, si había multas la persona debía demostrar el pago o cancelar la multa. Durante el tiempo que trabajó, el Alcalde ingresó a la oficina de tránsito, dónde realizaban el proceso de giro, el día 31 de marzo de 2014, se acercó, miró para todos lados, era el único que estaba, parecía que buscaba a una persona, lo llamó con un gesto silencioso, en el pasillo le pidió girar un permiso a nombre de la mamá, le dijo que había multas, que se las dejara pasar, como él lo pidió, lo giró igual, entró a la oficina y giró el permiso. El alcalde era coloquial para referirse, le dijo “viejo si querís trabajar acá, una ayuda”, como quería quedarse, lo hizo con la inocencia de asegurar su pega. Su clave de usuario era FRIQUE. No recuerda la patente, exhibida la prueba documental N°3, reconoció el permiso de circulación del año 2013, primera cuota, vencía en agosto de 2013, ese no lo giró, lo hizo con el permiso de la segunda cuota del año 2014, están sus claves, reconoce las hojas 2 y 3. Los permisos están girados el 31 de marzo 2014. Corresponde el permiso a la PPU FGYL 85, cuya propietaria era Lucila Urrutia. Recordó haber visto las multas impagas. Exhibida la prueba documental N°23, señaló que corresponden a la información del Registro Nacional de Multas, búsqueda de multa de la PPU FGYL 85, donde aparecen ocho multas, cuyas fechas de ingreso son todas del 2014, salvo alguna posterior al 31 de marzo de 2014. En el registro de multas aparecían, porque se actualiza el sistema, las vio y él también dijo que había multas. Indicó como fechas de la sentencia de 17 octubre, 23 de octubre, 06 de septiembre, 23 de octubre, todas de 2013 y de 30 de julio, 06 de agosto, 05 de junio, y 25 de julio, todas del 2014. Todas fueron ingresadas al sistema el 2014. No recuerda cuantas multas impagas fue las que vio en la página del Registro Nacional de Multas y ahí aparecían, no recuerda si aparecían en el sistema, al parecer sí, trabajaban con el otro sistema a la par y como fue una

situación en que no se sintió cómodo, lo revisó, porque a veces, estaba más actualizado. Respecto al vehículo PPU FGYL 85, la fecha de ingreso al registro es 6 de marzo de 2014, rol 197396-13 de la Municipalidad de San Bernardo; y la otra multa ingresó el 14 de marzo de 2014 y el giro fue el 31 de marzo de 2014. Exhibida la prueba documental N°23, correspondiente a un duplicado de comprobante de pago de multa 197396, \$45.898, indicó que el pago se hizo el día 26 de enero de 2015. También, fue valorado el testimonio de Giuliano Alejandro Espinoza Reyes, antes reproducido, en cuanto señaló que en febrero de 2015 compró en la Automotora Alameda, en Curicó, un Kia Cerato, 2013, PPU FGYL 85, que aún lo tiene. Le dijo el vendedor que los papeles estaban al día, sin mencionar de quien era el auto y no le hicieron la transferencia. En marzo quiso sacar el Permiso en Curicó, pero le dijeron que no podía, y no le explicaron el problema. Fue a la automotora, ellos le hicieron los papeles, estaba otro vendedor, le dijeron que pasara la plata del permiso, los documentos y que ellos hacían el trámite. Tres días después le dijeron que estaban listos los papeles y sacaron el permiso de circulación. Estaba al día, pero no estaba aún a su nombre, le señalaron que en el transcurso de los días le daban los documentos, que llegarían a su casa, pero nunca llegaron. En concordancia con las declaraciones que anteceden, el Comisario de la Policía de Investigaciones **Alexis Nogues González**, expuso que, dentro del marco de una instrucción particular, apareció un auto a nombre de la mamá del alcalde, marca Kia, que obtuvo un permiso de circulación en Sagrada Familia y tenía multas vigentes, buscó quien era la persona que compró el auto, se trató de Giuliano Espinoza Reyes. Se comunicó con él, en septiembre de 2018, le manifestó que trabajaba en Empedrado, fueron al lugar y prestó declaración. Giuliano Espinoza les mencionó que en 2015 compró el Kia Cerato, en la Automotora Alameda, en Curicó, cuando quiso obtener el permiso de circulación, tenía multas por \$4.000.000, fue a la Municipalidad de Sagrada Familia, le dijeron que iban a solucionar el problema y así fue. Al año siguiente fue a Teno, quiso obtener el permiso de circulación, le dijeron que no podía porque había multas vigentes por \$4.000.000, se comunicaron con el alcalde y las multas fueron pagadas.

En cuanto al tema de la calidad de funcionario público de quien ordenó la operación de renovación del permiso circulatorio asociado al vehículo placa patente BGYL85, se encuentra acreditada con la prueba testimonial y documental, apreciada en otro párrafo de este razonamiento, antecedentes de los cuales se desprende categóricamente que Martín

Abdón Arriagada Urrutia desempeñaba a la época de los hechos el cargo de Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia.

Sobre la pérdida para el patrimonio fiscal a consecuencia de la emisión del permisos de circulación con multas impagas, asociadas al automóvil PPU BGYL85, ello quedó demostrado con la prueba documental N°13 de la defensa del acusado Arriagada Urrutia, que proporciona el monto total de las dos multas existentes al momento de la emisión del permiso, ascendentes a la suma de \$97.196, según la base de datos del Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas.

Ahora, es el turno de las operaciones de giro de permisos de circulación con multas impagas realizadas durante el año 2014 y 2015, por la funcionaria municipal Isabel Alejandra Vásquez Espinoza. Para tener por comprobados esos presupuestos fácticos, como primera cuestión, es preciso establecer la emisión de los citados documentos existiendo multas no pagadas, para tal efecto fue valorada la prueba documental N°20 que dice relación con 35 comprobantes originales de pago de permiso circulación y sus anexos, año 2014 y documental N°21 que contiene un comprobante de pago original de permiso circulación y sus anexos, año 2015, los que a continuación se singularizarán: 1) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU KL8741, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 03 de febrero de 2014, N°009203, a nombre de Manuel Herrera Calderón, monto \$43.911; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 2) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DPST38, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 17 de marzo de 2014, N°009830, a nombre de Camila cabezas Naves, monto \$138.717; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 3) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU BTPJ21, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 17 de marzo de 2014, N°009831, a nombre de Orlando Naves Morales, monto \$99.417; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como

emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 4) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU BRPH23, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 19 de marzo de 2014, N°009882, a nombre de Daniel Guell Galofré, monto \$95.517; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 5) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU CJYL25, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 20 de marzo de 2014, N°009899, a nombre de Sociedad Comercial Henríquez, monto \$64.109; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 6) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DBKW10, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014, N°013440, a nombre de Juan Valderrama Acevedo, monto \$105.659; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 7) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU CCFV60, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014, N°0013444, a nombre de Banco de Crédito e Inversiones, monto \$18.920; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 8) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU XP7025, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 20 de marzo de 2014, N°013465, a nombre de Graciela Letelier, monto \$28.239; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 9) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU CTCS81, de

la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 19 de marzo de 2014, N°014211, a nombre de Mario Flores Lillo, monto \$144.590; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 10) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU RL3352, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 25 de marzo de 2014, N°014554, a nombre de Claudio Bustamante Peña, monto \$20.458; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 11) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DLKP34, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 25 de marzo de 2014, N°014559, a nombre de Corpbanca, monto \$168.417; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 12) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DBHV31, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 26 de marzo de 2014, N°014572, a nombre de Pavimentos Quilín Ltda., monto \$178.317; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 13) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU CBCJ24, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 27 de marzo de 2014, N°014578, a nombre de Fundo Trapiche, monto \$21.270; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 14) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DTBY10, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 28 de marzo de 2014, N°014595, a nombre de Agrícola Profruta, monto \$90.809; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario



“AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 15) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU ZK4900, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 28 de marzo de 2014, N°015117, a nombre de Agroindustria La Paz, monto \$43.439; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 16) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU CWFJ21, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 28 de marzo de 2014, N°015121, a nombre de Agroindustrial la Paz, monto \$163.917; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 17) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU DRXD32, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 28 de marzo de 2014, N°015134, a nombre de María Soler Mouliat, monto \$265.180; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 18) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU BFFW72, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 28 de marzo de 2014, N°015145, a nombre de Marcos Bobadilla Zamorano, monto \$30.520; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 19) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU TT4176, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 29 de marzo de 2014, N°015598, a nombre de María Rivera Daza, monto \$13.320; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 20) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU CKBL34, de la Municipalidad de

**Poder Judicial**  
**Tribunal de Juicio Oral en lo Penal**  
**Curicó**

---

Sagrada Familia, de fecha 29 de marzo de 2014, N°015992, a nombre de Luis Pino Castro, monto \$51.039; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 21) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU DFVS21, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014, N°016124, a nombre de Carmen González Celis, monto \$99.809; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 22) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DDBY87, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016146, a nombre de Comercial y Industrial San Marcelino, monto \$87.959; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 23) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU PG5428, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016149, a nombre de Fátima Contreras, monto \$20.468; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 24) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU KW3632, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016150, a nombre de Alba Santelices Ardiles, monto \$27.120; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 25) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU DLRG77, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016160, a nombre de Paulo Magalhaes, monto \$551.455; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de

revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 26) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DGLP28, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016164, a nombre de Juan García Díaz, monto \$54.359; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 27) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU DTSV24, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016181, a nombre de Diego Philippi Prado, monto \$44.759; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 28) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU KF3099, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016182, a nombre de Amador Dabed Sumar, monto \$10.234; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 29) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU CWLD74, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016185, a nombre de Cristian Reyes Fuenzalida, monto \$89.159; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 30) comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU BZYC27, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016191, a nombre de María Peña Valenzuela, monto \$142.617; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 31) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU BRFC30, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014,

N°016401, a nombre de Luis Molina Gamberini, monto \$43.439, consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”; y sus anexos certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 32) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU FP4792, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014, N°016405, a nombre de Lilian Videla Valdés, monto \$10.234, consigna clave usuario “AVASQU”; y sus anexos, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 33) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU YW9526, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 30 de marzo de 2014, N°016426, a nombre de Alberto Tapia González, monto \$224.590, nombre clave usuario “AVASQU”; y sus anexos, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 34) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU RT6284, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 31 de marzo de 2014, N°016461, a nombre de Joaquín Maluenda G., monto \$10.234, consigna clave usuario “AVASQU”; y sus anexos, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas; 35) Comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo asociado a la PPU PW5073, de la Municipalidad de Sagrada Familia, de fecha 29 de marzo de 2014, N°016469, a nombre de Gladys salas Morales, monto \$138.590, consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”; y sus anexos, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas.

En último término, el único permiso de circulación con multas impagas emitido por la acusada Vásquez Espinoza, con fecha 31 de marzo de 2015, asociado a la PPU CTKJ81, N°026560, a nombre de Municipalidad de Sagrada Familia, monto \$208.444; y sus anexos “Folio tesorería, folio girador, orden de ingreso”, de igual fecha y monto, ambos consignan como emisor la clave usuario “AVASQU”, certificado de revisión técnica, seguro obligatorio y certificado de emisión de gases, sin comprobante de pago de multas.

Ahora bien, para comprobar que los permisos de circulación antes individualizados fueron girados con multas impagas, fue considerado el informe N°5 -2020, elaborado por la perito contable, del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, Pamela

Pino Salinas, que indica en la página 2, que examinado el año 2014 de los permisos de circulación que presentaban multas vigentes al momento de ser vendidos, en número de 397, se identificó, entre 10 funcionarios de la entidad edilicia que oficiaron de emisores de los referidos permisos, la calve usuario “AVASQU”, registrando a su haber 35 permisos girados, con un total de 71 multas impagas, cuyos montos ascienden a la suma total de \$3.077.350, cantidad que responde al siguiente detalle: PPU KL6741, 1 multa, valor \$41.181; PPU DPST, cantidad 1 multa, monto \$41.263; PPU BTPJ21, 1 multa, monto \$41.263; PPU BRPH 23, 1, monto \$20.263; PPU CJYL25, 2 multas, monto \$103.158; DBKW10, 3, 123.789; PPU CCFV602 multas, monto\$ 82.526; PPU XP7025, 1 multa, monto. \$41.263; PPU CTCS81, 4 multa, valor \$165.052; PPU RL3352, 1 multa, \$41.263; PPU DLKP34, 2 multas, \$82.526; DBHV31, 1 multa , monto \$39.000; PPU CBCJ24, 1 multa \$60.429; PPU DTBY10, 1 multa, \$41.263; PPU ZK4900, 1 multa, \$41.263; PPU CWFJ21, 1 multa \$41.263; PPU DRXD32, 1 multa, \$41.801; PPU BFFW72, 1 multa, \$41.801; PPU BFFW72, 1 multa, \$41.801; PPU TT4176, 7 multas, \$288.841; PPU CKBL 34, 3 multas, \$185.684; PPU DFVS21, 1 multa, monto \$61.895; PPU DDYB87, 2 multas, \$82.526; PPU PG5428, 1 multa, monto \$41.263; PPU KW3632, 2 multas, Monto \$82.526; PPU DLRG77, 1 multa, \$61.895; PPU DGLP28, 11 multas, \$490.672; PPU DTSV24, 1 multa, \$61.895; PPUKF3099, 1 multa, \$41.261; PPU CWLD74, 1 multa, \$40.000; PPU BZYC27, 1 multa, \$41.263; PPU BRFC30, 4 multas, valor \$158.789; PPU FP4792, 1 multa, \$18.000; PPU YW9526, 3 multas, monto 123.789; PPU RT6284, 4 multas, \$165.042; PPU PW5073, 1 multa, \$41.263. Monto total: 3.077.350.

Respecto al permiso de circulación asociado a la PPU CTKJ8, emitido el día 31 de marzo de 2015, contaba con 1 multa vigente al momento de ser vendido por un monto de \$45.768, conforme consigna el informe 5-2020, antes referido.

En relación con la forma y circunstancias en que se desarrollaron las operaciones de renovación de permisos de circulación con multas no pagadas, en las que intervino como girador Isabel Vásquez Espinosa, resultaron relevantes los testimonios de funcionarios de la Municipalidad de Sagrada Familia, que dieron fe de su participación activa en las campañas de venta de permisos de circulación en los años 2014 y 2015. Así los señaló la tesorera municipal a la época de los hechos, **Carmen Velasco Ponce**, al afirmar que Alejandra Vásquez en la campañas años 2014 y 2015, era la coordinadora, llevaba muchos años

trabajando en tránsito, tenía una cartera de clientes, los más potentes y que entregaban recursos a la Municipalidad, se les daba atención especial y se programaban para atenderlos, siendo ella quien coordinaba las visitas de giradores con contribuyentes. En el mismo sentido y dando cuenta que Isabel Vásquez Espinoza se desempeñaba como giradora de permisos de circulación, señaló el testigo **Julio Hormazábal Muñoz**, refiriéndose a la oportunidad en que varios de los funcionario que participaban en las campañas de venta de permisos, entre ellos la acusada, fueron citados a un salón municipal, para una venta fuera de horario para un contribuyente de Santiago, dueño de una automotora que trajo alrededor de doscientos permisos, por lo que debieron permanecer desde las 21:00 horas hasta la madrugada emitiendo permisos de circulación. Algo similar acontece con la testigo **Leticia Saavedra Ramírez**, quien relató haber concurrido a la ciudad de Santiago con la acusada Vásquez Espinoza para vender permisos de circulación fuera de la comuna, siendo ésta la encargada y quien le señaló que dejara pasar las multas, apretando “enter” y seguir con el proceso de venta, además, coincidiendo con Julio Ormazábal, refirió la ocasión en que junto a la acusada y Jimena debieron atender al dueño de una compraventa de nombre Juan Isuani Larruy, a quien debieron atenderlo por la tarde y hasta la madrugada. Por su parte, **Fabián Riquelme Solís**, dijo que durante la campaña de venta de permisos de circulación del año 2014 y como alumno en práctica apoyó como girador, siendo Alejandra Vásquez quien estaba a cargo de su práctica y le dio una capacitación simple para girar los permisos, como se giraba, como realzar los cobros, las ventanas que se desplegaban en el sistema, que no podía girar permisos con multas, que sí había, la persona debía demostrar el pago o cancelar la multa.

A los antecedentes expuestos se deben sumar los dichos de la acusada, por haber reconocido las 36 placas patentes asociadas a los permisos de circulación, los que señaló que correspondían a su caja giradora auxiliar.

Para establecer la calidad de funcionaria pública de la emisora de los 36 permisos de circulación renovados, no obstante que poseían multas impagas, fueron considerados, además, de los testimonios antes referidos que dieron cuenta de las funciones de servicio que desempeñaba Isabel Vásquez Espinoza en la Municipalidad de Sagrada Familia, la prueba documental aportada por la Defensa de la acusada, que deja en evidencia una trayectoria de servidora pública, que se remonta a lo años previo a la ocurrencia de los

hechos y que ha perdurado hasta la actualidad, tal como se colige de los siguientes antecedentes: decreto exento N°1858, de fecha 07 de mayo de 2013, que designa en funciones de control interno a la funcionaria municipal técnico de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, Isabel Alejandra Vásquez Espinoza; Decreto Alcaldicio N°1020/2014, de 03 de septiembre de 2014, por medio del cual se designa a Isabel Vásquez Espinoza, en el cargo directivo de la unidad de control interno, en calidad de suplente; Decreto exento N°2225, de 04 de agosto de 2015, que designa a Isabel Vásquez Espinoza, en el cargo directivo de la Unidad de Control Interno, en calidad de suplente; Memorándum N°10/2016, de 27 de abril de 2016, dirigido por la Directora de Control Interno Suplente al Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Sagrada Familia, con el pie de firma de Alejandra Vásquez Espinoza, Control Interno Suplente; Informe interno N°2/2014, de 03 de febrero de 2014, de Funcionaria de Permisos de Circulación al Director de Tránsito y Transporte Público, con el pie de firma “Alejandra Vásquez Espinoza, Permisos de Circulación”; Of Ord N°12/2018, de 29 de mayo de 2018, de la Directora de Control Interno a Martín Arriagada Urrutia, Alcalde, con el pie de firma “Alejandra Vásquez Espinoza, Directora de Control Interno”; Memorándum N°79/2015, de Director de Tránsito y Transporte Público a Control Interno Sra. Alejandra Vásquez Espinoza, con timbre de recepción 05 de junio de 2015, que da cuenta de la nómina de funcionarios que participaron de la campaña de permisos de circulación 2015, figurando entre ellos Alejandra Vásquez Espinoza,. Documento adjunto al informe de auditoría de permisos de circulación, Control Interno; y Ord 05/2015, de fecha 02 de junio de 2015, de la Directora de Control Interno al Alcalde, Don Martín Arriagada Urrutia, con el pie de firma” Alejandra Vásquez Espinoza, Control Interno Suplente”; Ord. N°7/2105, de 16 de junio de 2015, dirigido por la acusada en calidad de Control Interno Suplente, al Alcalde Martín Arriagada Urrutia; incorporados como prueba documental N°7, 8, 9, 11,14, 29, 28, 30 y 45, además, de la documental N°3 de la Defensa del acusado Arriagada Urrutia, consistente al informe de seguimiento, Municipalidad Sagrada Familia, que indica respecto de la observación 1-3- a-b). Deficiencias relacionadas con sistemas, que indica que se constató que existen cinco funcionarios con perfiles de usuarios vigentes, respecto al programa de permisos de circulación, que no forman parte de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, entre ellos Alejandra Vásquez. De tal modo, los antecedentes

reseñados, se condice plenamente, con lo aseverado por la acusada Vásquez Espinoza, al prestar declaración en la audiencia de juicio oral, oportunidad en dijo trabajar para la Municipalidad de Sagrada Familia desde el mes de marzo de 1990, en el departamento de tránsito hasta agosto de 2016, después ganó el concurso de control interno. En tránsito a su ingresó hacía lo básico, permisos de circulación, vender permisos, girar los permisos, traslados a otras comunas, empadronamientos, archivos, pagos, revisar los pagos, sacar listados, dejar listo para los segundos pagos en agosto y trabajos de documentos internos. Siempre trabajó en permisos de circulación, dominaba el tema.

Finalmente, con el mérito de la información suministrada por el informes N°5-2020 de la perito contable del laboratorio de Criminalística de la Policía de investigaciones de Chile, Pamela Pino Salinas, expuesto en extenso en otros párrafos de este razonamiento, los que se tienen por reproducidos, se cuantificó el monto del perjuicio patrimonial causado al Fisco, a consecuencia de la renovación de 36 permisos de circulación con multas no pagadas emitidos por la acusada Vásquez Espinoza, a razón de un total de 71 multas impagas en el año 2014 que ascendieron a la suma de \$3.077.350 y de una en el año 2015 por el monto de 45.768. Es preciso señalar, que las cantidades expresadas corresponden al monto equivalente en pesos al valor de la Unidad Tributaria Mensual al mes de marzo del año respectivo, a saber, la suma de \$41.263 en el año 2014 y \$43.068 en el año 2015.

De esta manera, las acciones descritas, realizadas por orden del acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, implicaron un perjuicio para el Fisco de Chile de la suma total de \$16.456.268, en tanto que las realizadas por la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza produjeron un perjuicio total de \$3.123.118.

Respecto de todas las operaciones de renovación de permisos de circulación con multas impagas establecidas en los párrafos que anteceden, se tuvo presente que la fecha que determina la base de registro de multas de tránsito impagas es el 30 de noviembre de cada año, para los efectos de ser utilizadas por los municipios en la campaña de renovación de permisos de circulación del mes de marzo del año siguiente, para lo cual, el Servicio de Registro Civil distribuye a todas las municipalidades del país, en el mes de diciembre, un disco compacto que contiene la mencionada información. Lo anterior, resultó demostrado con del memorándum N°186, del SRCeI., incorporado por la defensa del acusado Arriagada Urrutia como documental N°14; con la evidencia N°1, consistente en cinco CD



incorporados por el Ministerio Público que contienen el Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas años 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 y 2019; y de los testimonios que así lo explicaron en la audiencia de juicio oral, a saber, los funcionarios municipales, Carmen Velasco Ponce, Ricardo Hormazábal Sánchez, como los funcionarios de la Contraloría Regional del Maule, que efectuaron la auditoría al municipio de Sagrada Familia, Ángela Domínguez Albornos y Sandra Santander Moreno y la perito auditora del LACRIM, Pamela Pino Salinas.

En consecuencia, con los testimonios, informe pericial, prueba documental y material, los que resultaron ser complementarios y concordantes entre sí, se logró acreditar la existencia de los hechos consignados al comienzo de éste razonamiento.

**SEXTO:** Que, los hechos descritos en la motivación que antecede configuran, respecto de cada acusado, un delito de Fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, conforme al texto vigente a la época de los hechos, con relación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.287, en carácter de consumados, perpetrados en la comuna de Sagrada Familia y en las fechas correspondientes al giro de cada uno de los permisos de circulación señalados. En efecto, Martín Abdón Arriagada Urrutia, en virtud del cargo de Alcalde de la comuna de Sagrada Familia, intervino en la operación de renovación de permisos de circulación, ordenando a funcionarios encargados del giro de los citados documentos, emitirlos, no obstante, contar con multas impagas; en tanto, la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionaria municipal expresamente comisionada al efecto, giró permisos de circulación con multas impagas; ambos, con conocimiento de dicha irregularidad y en contravención de norma expresa, que obligaba el previo pago de estas multas o la comprobación documentada de que habían sido satisfechas, faltando a la probidad exigida a todo servidor público y ocasionando un perjuicio al Fisco, ascendente en el caso de Arriagada Urrutia a un total de \$16.456.268, y en el caso de Vásquez Espinoza a un total de \$3.123.118, cantidades que en ambos casos son superiores a cuarenta e inferiores a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Cabe precisar, en primer lugar, que al tener por establecido un delito del tipo penal indicado por cada acusado, se atendió a la petición expresa en ese sentido de los dos acusadores y se tuvo presente, además, que el tribunal debe respetar el principio de congruencia contemplado en el artículo 341 del Código Procesal Penal.

En segundo término, que se compartió la calificación jurídica propuesta por los acusadores, especialmente en cuanto a tener por configurados los delitos al momento en que se realizó el respectivo giro del permiso de circulación existiendo multas de tránsito impagas, estimando que el perjuicio para el erario fiscal se produjo en ese momento, con independencia que después se hayan pagado los valores correspondientes al todo o parte de esas multas, como se estableció parcialmente con la documentación aportada por las defensas.

Como se ha dicho en el párrafo que antecede, no fueron consideradas aquellas probanzas incorporadas por las Defensas de los acusados, que dicen relación con multas impagas asociadas a placas patentes en que fueron renovados los permisos de circulación en los años 2014 y 2015 en la Municipalidad de Sagrada Familia, a saber, 397 permisos de circulación con multas no pagadas en el año 2014 y 939 en la misma situación durante el año 2015, según lo concluido por la pericia contable del laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Entre las razones para desestimar las probanzas, están en primer término que las fotocopias de certificados de multas de tránsito no pagados, obtenidos de la página del Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas, no señalan la fecha en que se verificó el pago, solo indican “no registra multa en la base del SRCeI”, o bien evidencian que fueron pagadas con posterioridad al giro del permiso de circulación, como fue el caso de la renovación asociada a la PPU FGYL85, correspondiente al vehículo de la madre del acusado, que demostró que las multas resultaron saldadas el 26 de enero de 2015, en circunstancias que el permiso se giró el 31 de marzo de 2014. Lo mismo acontece con la prueba documental N° 6, 18, 19, 20 y 23, de la Defensa de Arriagada Urrutia, así como con las pruebas documentales N°36, 34, 41, 42,43 y 44, de la Defensa de Vásquez Espinoza, que plantean situaciones en que el pago de determinada multa permanece vigente en el Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas, por diversos motivos, que obedecen a situaciones excepcionales, que si bien pueden dar origen a distorsiones de gestión del sistema, como duplicidad de pago, que deben posteriormente revertirse, constituyen casos aislados, uno en mil, como dijo el funcionario girador de permisos de circulación, Felipe Paredes Baeza, y el encargado de informática del municipio, Ricardo Hormazábal Sánchez, más que fallas en el sistema propiamente tal, atribuyó la deficiencias o errores cometidos por los usuarios del sistema, debido a falta de capacitación. A las mismas situaciones se

refieren las pruebas documentales N°8, 9 y 16 de la defensa del acusado Arriagada Urrutia, teniendo presente que las PPU CVLC y VT4277, no dicen relación con los permisos de circulación cuya renovación con multas impagas tuvo por establecido el tribunal, los que se consignan al comienzo de esta motivación. Por lo demás, se debe tener presente que el artículo 24 bis de la Ley N°18287, plantea la posibilidad de verificarse anotaciones erróneas, equívocas o incompletas y señala la forma de revertirlas.

Luego, en relación a los demás hechos que les atribuyeron a los encartados el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no se comprobaron todos sus extremos, es decir, o bien no se constató qué patentes registraban qué multas y por qué valor a la época de los hechos de la acusación, o no se estableció fehacientemente que los respectivos giradores hayan tenido a la vista esas multas o, especialmente, no se vinculó el giro de los permisos con multas impagas realizado por aquellos, con instrucciones u órdenes específicas o generales del acusado Arriagada Urrutia o de la acusada Vásquez Espinoza; por lo que, en suma, no fue posible configurar los referidos delitos también por esos supuestos fácticos y por el monto más elevado de perjuicio que motivó ambas acusaciones.

La defensa de la acusada Vásquez Espinoza discutió que los hechos fueran conceptualizados como delito de fraude al fisco, por estimar que la infracción del deber sería del artículo 24 de la Ley N°18.287, que no es sustantiva, es de procedimiento ante los Tribunales de Policía Local, entonces toda remisión es posible para configurar un tipo penal. Estos magistrados, discrepando del parecer de la defensa, razonan en el sentido que el artículo 239 del Código Penal lo que busca es sancionar aquellas acciones malintencionadas de quienes detentan funciones públicas, con facultades de administración y disposición del patrimonio fiscal, que en el caso que nos ocupa, se concretó en la emisión intencionada de permisos de circulación con multas impagas, que el artículo 24 de la ley N°18.287 prohíbe.

Sobre las alegaciones realizadas por las defensas que dicen relación con los elementos del delito de fraude al fisco. En primer término, en lo referente al argumento que la acusada Vásquez Espinoza no reviste la calidad de funcionaria de la Dirección de Tránsito, sino que se desempeñaba como giradora de facto, siendo efectivamente su desempeño en la Unidad de Control Interno del municipio. Al respecto corresponde señalar

que la defensa hace una interpretación en extremo restrictiva de la calidad de empleado público, teniendo en cuenta que para el derecho penal debe entenderse en un sentido más amplio que el que se otorga en sede administrativa, porque el interés de la norma penal está en la función pública del agente, independiente de la naturaleza jurídica del vínculo o forma de contratación con el ente estatal, como lo ha resuelto la Corte Suprema, por ejemplo, en la causa Rol N°25.378/2014.

Fue objetada la existencia de perjuicio al patrimonio fiscal, exigido por el tipo penal, por la Defensa del acusado Arriagada Urrutia, recurriendo a dos argumentos, el primero la falta de realidad y determinación de la pérdida provocada al Estado, instaurando una duda sobre el origen de la base de datos cargados por la empresa Cas-Chile informática en el servidor central de la Municipalidad de Sagrada Familia, respecto a la información del Registro Nacional de Multas de Tránsito no Pagadas, al 30 de noviembre de cada año, proporcionados por el SRCeI, en el mes de diciembre o principios de enero de cada año a las municipalidades del país, sin contar, a juicio del tribunal, con fundamentos graves y objetivos. Lo cierto es que, según explicó Ricardo Henríquez Hormazábal Sánchez, soporte computacional del municipio, las empresa Cas Chile a la época de los hechos cargaba por un programa de administración remota el servidor central del municipio, así quedaba accesible a los equipos de la unidad de permisos de circulación. En cuanto a la fuente de la información, estimó que la empresa informática recibe la información del Registro Civil, no lo afirmó, pero no cuestionó el origen de la fuente, que coincide con la impresión de la funcionaría de la Contraloría Regional del Maule, Sandra Santander Moreno, que, a su entender, era el registro Civil es el que informa las multas. Respecto al CD que manda el SRCeI, explicó que cada año llega a la oficina de partes del municipio y se lo entregaban para cargar la información en la oficina de contabilidad del Departamento de Administración y Finanzas, asimismo, dijo que la información cargada por Cas Chile la copiaba e instalaba en los notebook de terreno. Establecido lo anterior, parece razonable y de toda lógica estimar, que la información cargada por la empresa externa, es la base de datos del Registro Nacional de Multas No Pagadas, teniendo en cuenta, que es una empresa que presta el mismo servicio en casi la mayoría de los municipios del país, como lo aseveró el testigo Hormazábal Sánchez y lo confirmó la funcionaría de la Contraloría, **Ángela Domínguez Albornoz** y la funcionaria municipal que se despeñaba en la Dirección del

Tránsito a la época de los hechos, **María Elizabeth Tapia**, por ende, necesariamente debe tratarse de una base de datos oficial y confiable, como la proporcionada por el Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas, que el Registro Civil hace llegar cada año en fecha oportuna para enfrentar las campañas de venta de permisos de circulación en el mes de marzo de cada año. Lo anterior guarda coherencia con las copias de comunicaciones vía mail, mantenidas por el encargado de informática, **Ricardo Hormazábal Sánchez**, con el Director de Tránsito de la mismo municipio, **Fernando Oyarzún Riquelme**, de 22 de enero de 2015, mediante el cual le informa la carga exitosa de la multas no pagadas vigentes al 30 de noviembre de 2014 y adjunta el reporte emitido por el software usado para tal efecto, que dice referencia a la notificación vía mail de la empresa Cas Chile, sobre encontrarse liberada una nueva aplicación que permite cargar archivo de registro de multas, correspondientes al período 2015. Llamó la atención del tribunal, que las fechas de la comunicación, son compatibles con la época de disponibilidad de la información del Registro Civil. Del mismo modo, de acuerdo al testimonio del encargado informático Hormazábal Sánchez, el CD del Registro Civil se cargaba en contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, por consiguiente, de haber existido información incompatible con la base de datos cargada por Cas Chile, hubiera quedado prontamente en evidencia, lo que nadie afirmó en el juicio. Respecto al otro aspecto objetado sobre la información proporcionada por la perito del Lacrim, esto es, que existían multas duplicadas, relacionadas a 149 permisos asociadas a igual números de PPU, que se tradujo en 20 multas que debieron ser descontadas del monto total de pérdida cuantificado, fue abordado en otro párrafo de esta consideración, teniendo en cuenta, que no corresponden a las PPU asociadas a permisos de circulación renovados con multas impagas establecidos por el tribunal.

Cabe agregar, sobre el monto de la pérdida al Estado causado por la emisión de permisos de circulación con multas no pagadas, girados por la acusada Vásquez Espinoza, dichas multas fueron canceladas con posterioridad a la perpetración del delito, según lo demuestran los certificados incorporados al juicio, los que serán valorados y reflejados al pronunciarse el tribunal sobre la demanda civil deducida por el acusador particular.

En último término, ambas defensas invitaron al tribunal a restar valor probatorio a los testimonios de los funcionarios municipales, esencialmente, de aquellos que ejercieron

como giradores de permisos de circulación, acusando que sus dichos fueron inconsistentes, absurdos, poco confiables y manipulables, levantando sospechas sobre el cambio del tenor de sus respectivas declaraciones, luego de las formalizaciones de que fueron objeto. Por el contrario y tal como se razonó en el considerando quinto de esta sentencia, los testimonios de Felipe Paredes Baeza, Ignacio Arancibia Castro, Julio Hormazábal Muñoz, Leticia Saavedra Ramírez, Fabián Riquelme Solís, Fernando Oyarzún Riquelme, Sandra Santander Moreno, Juan Duque Rojas y Carmen Velasco Ponce, siendo la mayoría de ellos giradores al momento de perpetrarse los hechos, impresionaron al tribunal como veraces, serios e informados, otorgando una versión verosímil de los hechos, que por los demás se ratifican y complementan con la abundante prueba documental, material y pericial apreciada por estos magistrados. Luego, en la audiencia, también, se evidenció que al inicio de la investigación, los testigos que oficiaron como giradores de permiso de circulación con multas impagas, cuestionados por las defensas, probablemente motivados por la ascendencia que aun representaba el cargo público del acusado Arriagada Urrutia, se resistieron a colaborar inicialmente con la investigación, existiendo una suerte de defensa corporativa y posteriormente al percatarse del estado y avance del procedimiento, unido al sentimiento de abandono por parte de sus antiguos jefes y a la legítima oportunidad procesal que el Ministerio Público les ofreció por la vía de salidas alternativas, optaron por sincerar lo ocurrido, asumiendo sus respectivas responsabilidades, lo que no solo apareció como un reconocimiento individual y colectivo después, sino creíble dado que muchos de sus dichos resultaron refrendados por los documentos aportados.

**SÉPTIMO:** Que la participación de Martín Abdón Arriagada Urrutia en calidad de autor en los hechos, resultó acreditada con la prueba aportada por los acusadores, en los términos previstos en el artículo 15 N°2 del Código Penal, por haberse establecido que él, en razón de la jerarquía del cargo que ostentaba, ordenó a funcionarios contratados por el municipio, pero que no tenían la calidad de titulares, girar dichos permisos, respecto de los vehículos indicados, a sabiendas que se encontraba prohibido, porque presentaban multas impagas, lo que realizaron, presionados ante su inestable situación laboral y con la finalidad de conservar su trabajo remunerado en esa entidad edilicia.

La responsabilidad del acusado Arriagada Urrutia, en las operaciones en que intervino en razón de su cargo defraudando al Estado, resultó comprobada con las

declaraciones directas sobre los hechos de los funcionarios municipales al momento de la ocurrencia de los mismos, Fabián Riquelme Solís y Felipe Paredes Baeza. Así, **Fabián Riquelme Solís**, admitió que obró como girador del permiso de circulación asociado a la PPU GHYL85, que fue renovado el 31 de marzo de 2014, no obstante, que existían dos multas impagas y señaló que el Alcalde ingresó a la oficina de tránsito, dónde realizaban el proceso de giro, el día 31 de marzo de 2014, se acercó, miró para todos lados, era el único que estaba presente, le dio la impresión que buscaba a una persona, lo llamó con un gesto silencioso y en el pasillo le pidió girar un permiso a nombre de la mamá, le dijo que había multas, que se las dejara pasar, como él lo pidió, lo giró igual, entró a la oficina y giró el permiso. El Alcalde era coloquial para referirse, le dijo “viejo si querés trabajar acá, una ayuda”, como quería quedarse, lo hizo con la inocencia de asegurar su pega. De igual importancia fue lo señalado por otro funcionario girador, **Felipe Paredes Baeza**, que intervino en la renovación de gran porcentaje de los permisos de circulación con multas impagas, considerados por el peritaje del LACRIM, y por cierto, en las ocho operaciones del año 2015, establecidas por el tribunal, en las que se le atribuyó autoría al acusado Arriagada Urrutia. Fue el caso, que el testigo Paredes Muñoz relató varias ocasiones en que por orden del Alcalde Martín Arriagada Urrutia, debió girar permisos de circulación con multas impagas, así destacó una ocasión en que viajó con Arriagada Urrutia a Santiago para apoyar en el giro de permisos al funcionario Julio Hormazábal que se encontraba instalado desde hace días, en el departamento de un cliente habitual de la municipalidad, José Isuani Larruy, donde permaneció y alojó tres días en el lugar, incluso una noche pernoctó el Alcalde, con el objeto de girar permisos de circulación para ese contribuyente y otros, hallándose la mayoría de los permisos con multas, las que no fueron cobradas, por las indicaciones que les fueron dirigidas por Alejandra Vásquez, por orden del Alcalde. También giró permisos a otros amigos del Alcalde en Machalí y Curicó. De la misma forma, dijo haber estado presente y escuchado por alta voz, cuando el Administrador Municipal, Enzo Hormazábal, llamó al alcalde por teléfono, mientras él viajaba junto al acusado en dirección a Machalí, para avisar que había una persona con muchos permisos, ante lo cual, el Alcalde ordenó que Ignacio Arancibia lo atendiera, a juicio del testigo, el administrador se refirió a la persona como amigo del alcalde. Luego, Ignacio lo llamó para pedir la clave, porque iba atender un señor que dejaría mucha cantidad de dinero. Después

conoció al amigo, se trataba de Raúl Betancourt, a quien posteriormente atendió. Contrastado el testigo con una declaración prestada el 25 de mayo de 2018, ante la Policía de Investigaciones, reconoció que a los días el Alcalde le presentó a Raúl Betancourt, le mencionó que era amigo de años, compañero de ejército y agregó que llevaría plata a la comuna, mucha, por tanto, debía atenderlo bien y pasar por alto las multas. Posteriormente, siguió atendiendo al señor Betancourt, le giró muchos permisos, siempre lo buscaba a él, aseverando que del total de permisos, el 50% o 60% tenían multas. Igualmente, rememoró una situación con el auto de la mamá del Alcalde, cuyo permiso de circulación se giraba sin pagar las multas, en una oportunidad lo emitió él y tenía multas impagas, con fecha 31 de marzo de 2015, según recordó ante la exhibición del comprobante de pago de permiso de circulación del vehículo PPU FGYL85. Sobre el particular, afirmó que ese permiso lo fue a sacar un tipo de la Automotora Alameda, el cual llegó con el Alcalde, éste se acercó, le dijo que girara el permiso y que tenía multas, cree que dos, por tal razón, dio por pasadas las multas, debido a la orden que le dio el Alcalde, aseverando que el acusado le dijo que las pasara por alto. En ese momento no reclamó, porque temió perder el trabajo, estaba a contrata, venía recién llegando. Además, agregó que posteriormente, se enteró por comentarios, que otra giradora, Jimena Cuevas, pagó las multas y después el alcalde reembolsó el dinero.

Cabe destacar, que la instrucción de renovar permisos de circulación con multas impagas, era una orden impartida por la más alta autoridad comunal, fue la opinión compartida por el director de Tránsito y otros giradores o emisores de permisos de circulación de la municipalidad a la época de los hechos, que prestaron declaración en el juicio, quienes al igual que los dos testigos anteriores, no eran funcionarios de planta o titulares en sus funciones, por el contrario, eran empleados de carácter transitorio, bajo la modalidad a contrata o alumno en práctica, como fue el caso de Fabián Riquelme Solís. De tal modo, **Roberto Oyarzún Riquelme**, Director de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia a la época de los hechos manifestó que con posterioridad de tomar conocimiento de las operaciones de venta de permisos de circulación con multas impagas, conversó con uno de los giradores, Felipe Paredes Baeza, le preguntó sobre la razón que lo llevó a vender patentes con multas, éste le respondió “yo recibo órdenes”, no le dijo de quien, tampoco insistió, sin embargo, después de ser contrastado con la declaración



prestada el 19 de noviembre de 2020 ante el Ministerio Público, admitió que Paredes Baeza le respondió “órdenes del Alcalde”, refiriéndose a Martín Arriagada, agregando, que éste le topaba la espalda, en señal de que no pasaría nada. Algo semejante expuso el funcionario girador a la época de los hechos, **Ignacio Arancibia Castro**, quien señaló no haber trabajado en las campañas de permiso de circulación, pero sí debió girar permiso, la primera oportunidad, se produjo cerca del mediodía, lo habló don Martín, el Alcalde, para presentarle una persona que venía a girar permisos, de apellido Betancourt, le dijo que lo atendiera, que traía algunos permisos con multas, le respondió “no tengo clave”, el alcalde le señaló “consigue la clave de Felipe”. Trabajaba en el mismo departamento con Felipe, lo conocía, no le pareció bien, la computación no iba con él, algo entendía, pero tenía que hacerlo. Fue almorzar, devuelta atendió al señor en la sala de concejo, fueron alrededor de dieciocho o veinte permisos, algunos tenían multas, no las cobró, porque la orden que le dio el Alcalde fue no cobrarlos. Manifestó el testigo conocer, que no era legal, sin embargo, lo hizo porque lo mandaron, estaba a contrata, si hubiera dicho no, no sabe qué hubiera pasado, tal vez, lo hubieron “cortado”. De la misma forma, **Julio Hormazábal Muñoz**, también girador de permisos de circulación, dijo haber participado en las campañas de venta de los años 2013 y 2014 y haber asistido a una reunión, con la presencia de Martín Arriagada Urrutia y Alejandra Vásquez Espinoza, donde le explicaron que debían ir a Santiago a sacar permisos de circulación, específicamente donde el señor Isuani Larruy y que se trataba de muchos permisos. Al efecto el testigo explicó que uno de los motivos, porque sacaban patentes, era debido a que no cobraban las multas, aseverando que el Alcalde y Vásquez Espinoza le hablaron de ese tema. El mismo testigo, en otro momento de su declaración, aclaró que en el 2014 el Alcalde y Alejandra Vásquez, le dijeron que no tenía que cobrar las multas impagas. Finalmente, la giradora de permisos de circulación **Sonia Jimena Cuevas Jara**, manifestó que en el 2014 se giraron permisos con multas impagas, que, en su caso particular, se debió a que fue inducida hacerlo, se lo pidió Alejandra Vásquez, el contribuyente era desconocido, le preguntó a Vásquez ¿por qué, yo?, le respondió “por orden del Alcalde”, le pasaron los documentos, tenía multas, dejó pasar el mensaje, porque se lo pidió Alejandra, le dijo que no cobrara las multas, le señaló “sin multa”. Reconoció la testigo que, en el momento, sabía que era ilegal, pero se lo pidió la señora Alejandra, quien tiene confianza con el Alcalde y de no hacerlo, pasaría al Alcalde.

También, fue apreciado el testimonio del comisario **Alexis Nogues González**, quien expuso que dentro de la instrucción de investigación recibida, tomó declaración a Raúl Betancourt Díaz, quien en primera instancia se acogió al derecho a guardar silencio, pero en el mes de agosto de 2018 prestó declaración, en la BRIDEC de Talca y declaró que trabajaba en compraventa de autos desde hace diez años, que buscaba un lugar para obtener permisos de circulación y que en el año 2014 se encontró con Martín Arriagada en el Mall de Curicó, lo conocía de años, desde el regimiento. En esa oportunidad, le contó que hacía a Martín, éste le indicó que fuera a sacar permisos a la comuna, que necesitaba el dinero para arcas municipales, le señaló que parte de los autos tenían multas vigentes, Martín le dijo que no había problema, que las puertas estaban abiertas. En marzo del mismo año, fue a la municipalidad, Martín le presentó a Enzo Hormazábal o Felipe Paredes, le dijo que tendría trato especial. Refirió que iba todas las semanas para obtener permisos de circulación, sin problemas, lo hizo hasta el año 2015, después le dijeron que no podían dar más, que había una investigación en la Fiscalía de Curicó. Además, el Comisario Nogues González, dio cuenta de una segunda instrucción particular, sobre la interceptación de los teléfonos celulares de Martín Arriagada, Felipe Paredes y Enzo Betancourt, en estas escuchas, se obtuvo un llamado que está en el informe, que hizo Felipe Paredes al Alcalde y le dijo que lo dejaron de lado, que estaba solo con el juicio, Martín Arriagada le señaló que no se preocupara, Felipe le respondió que a Enzo le proporcionaban un abogado, mientras a él, lo dejaron solo. Exhibida la prueba documental N°2 del Ministerio Público, al testigo, reconoció la transcripción del llamado telefónico antes referido, entre Felipe Paredes y Martín Arriagada, de fecha 30 de agosto de 2019. Destacó, que lo relevante de la conversación fue lo expresado respecto de Betancourt, Felipe le dice a Martín, que “me llamó su amigo, este caballero de Talca”. Martín responde “No es amigo mío ese weon, nos metió a todos en un cacho y el weon anda arrancando, es un estafador, tiene la cagá en varios lados”. Felipe contesta “recuerde que el mismo nos dijo y don Enzo también nos dijo, que él había sido compañero suyo en la aviación”. Martín señala “si po weon si el weon vendió la pescá y cuando chucha.... Este weon no lo conozco y creo que el weon tiene hartó, tiene hartó...”, en otro pasaje de la conversación Felipe dijo “Pero el perjudicado acá fui yo po’ don Martín, porque ustedes fueron los que me mandaron”. Martín contesta, “haber, mira Felipe, yo por teléfono no voy hablar contigo esta cuestión,

porque yo lo único que quiero es que el compadre no siga defraudando a nadie. Extracto de la transcripción de conversación telefónica, de fecha 30 de agosto de 2019, entre Felipe Paredes Baeza y Martín Arriagada Urrutia. Incorporada como prueba documental N°2, conjuntamente con la copia de orden de interceptación telefónica respectiva, de 03 de julio de 2019, autorizada por el Tribunal de Garantía de Curicó, por la Magistrado, Mariel Molina Guerrero, como prueba documental N°1, ambos del Ministerio Público.

Ciertamente, los testimonios expuestos, permiten a estos juzgadores sostener que la conducta del acusado aparece como dolosa y que las operaciones en las que intervino, las verificó por razón de su cargo, dirigiendo órdenes claras, en la mayoría de los casos de forma directa, a funcionarios municipales de contratación transitoria, para que emitieran permisos de circulación, obviando la multas impagas que el sistema automáticamente les evidenciaba, conociendo la ilegalidad de su actuar, pero conminados por la jerarquía del solicitante y la necesidad de disponer de una fuente laboral, siendo éstos, determinados a saltar el paso o hito del sistema computacional y vender los citados permisos. De ello se desprende, que el acusado con su actuar, se alejó del estándar que el desempeño de una alcaldía exige, faltando a la fidelidad en la gestión del patrimonio público, que resultó objetivamente perjudicado en la suma de \$ 16.456.268.

Así también los elementos probatorios incorporados al juicio por los acusadores permitieron atribuir a la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, participación en los hechos que se han descrito relativos a ella, en calidad de autora, por haber obrado de una de una manera inmediata y directa, en los términos descritos en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Para comprobar la autoría material de la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, fue considerada la declaración de la perito auditor del LACRIM, que dio cuenta al tribunal del informe pericial contable N°5 -2020, de 05 de febrero de 2020, complemento de los informes previos N°21, 6, 12 y 30, en el sentido de indicar los respectivos giradores de los permisos de circulación objetados, en los años 2014 y 2015, teniendo en vista las planillas confeccionadas en los informes previos, que dan cuenta de los permisos de circulación renovados con multas impagas, en los años señalados. De tal modo, el informe, estableció que en al año 2014, en los 397 permisos de circulación emitidos con multas impagas, se identificaron 10 perfiles que habrían girado los respectivos documentos,

identificados con sus iniciales, registrando el girador “AVASQU”, 35 permisos de circulación con 71 multas impagas por un monto de \$3.077.350.

Efectuado el mismo estudio con los 939 permisos emitidos con multas impagas el año 2015, el girador “AVASQU”, registraba un permiso con una multa por un valor de \$43.068.

Luego, el informe de seguimiento del informe N°1.121/2016, de 10 de octubre de 2017, ambos realizados por la Contraloría Regional del Maule, respecto de la observación 1-3-a-b), que dice relación a la constatación de cinco perfiles vigentes, respecto al programa de permisos de circulación, que no forman parte de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, entre ellos menciona “Alejandra Vásquez”. Como respuesta de la Municipalidad se consigna, que los perfiles, cita entre ellos “AVASQU”, ya no se encuentran activos, por tanto, se entiende que, a la fecha del requerimiento, es decir, en tiempo inmediato a la fecha del informe de seguimiento, incorporado como prueba documental N°3 de la Defensa del acusado Arriagada Urrutia. Entonces, el antecedente comentado, permite concluir la calidad de giradora de la acusada Vásquez Espinoza en el período comprendido entre 01 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016, que fue el período objeto de auditoría por la entidad de control. Asimismo, la información del informe de seguimiento de la contraloría permite, determinar que la clave “AVASQU”, consignada en los 36 permisos de circulación girados con multas impagas, observados en el informe 5-2020, del LACRIM, corresponden a los girados por Isabel Alejandra Vásquez Espinoza.

En el mismo sentido, el “Informe Auditoría Permisos de Circulación Vehicular”, de 4 de junio de 2015, elaborado por la Unidad de Control Interno de la Municipalidad de Sagrada Familia, cuya directora suplente a la fecha y encargada de instruir el citado informe era la propia acusada, establece en la página 1, las respuestas del personal a la consulta de haber participado o no, en la campaña de permisos de circulación 2015, consignando en el puesto quinto de los consultados, el nombre de Alejandra Vásquez Espinoza, individualizada como funcionaria de tránsito, control interno (s) y como respuesta a la consulta “participando como giradora y recaudadora en terreno, oficina de tránsito y apoyo en módulo Shell, Ruta 5 Sur, caja auxiliar N°8”. Prueba documental N°29 de la Defensa de Vásquez Espinoza.

Para concluir, debe ser valorado lo expresado por la propia acusada al prestar declaración en la audiencia de juicio oral, quien sin reconocer de forma expresa que obró como giradora de permisos de circulación con multas impagas durante las campañas 2014 y 2015, admitió que las patentes de los 36 permisos de circulación girados con multas impagas en el año 2014 y 1 durante el año 2015, que mencionan los certificados del Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas exhibidos en la audiencia de juicio oral, corresponden a su caja giradora auxiliar.

En consecuencia, unidos los antecedentes de cargo expuestos, más los testimonios consignados en el razonamiento cuarto, para los efectos de establecer los hechos, que dieron cuenta de las actividades de giro, capacitación y coordinación desempeñadas por la acusada en las campañas de venta de permisos de conducir en los años 2014 y 2015, se tiene por comprobada la participación que en calidad de autora de la acusada Vásquez Espinoza en los hechos, conforme lo establece el artículo 15 N°1 del Código Penal.

**OCTAVO:** Que, beneficia a los acusados Martín Abdón Arriagada Urrutia y Isabel Alejandra Vásquez Espinoza la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, por gozar de una irreprochable conducta anterior, circunstancia que fue reconocida por los persecutores en la acusación y posteriormente reiterada en la audiencia sobre determinación de penas.

De la misma forma, se consideró que los pagos posteriores de la multas, no importan una reparación celosa de mal causado, como tampoco impiden sus ulteriores perniciosas consecuencias, por estimar que la satisfacción de gran parte de las multas o todas ellas, en el caso de la acusada Vásquez Espinoza, asociados al hecho establecido por el tribunal, son producto de acciones no atribuibles a los acusados, más bien a pagos efectuados por terceros con fines ajenos a la reparación de las consecuencias ocasionadas por el delito. A su vez, se tuvo presente, en el caso del acusado Arriagada Urrutia, que éste solo pagó cuatro de las trescientas setenta y ocho multas asociadas a los hechos en que se atribuyó la calidad de autor, por ende, no es posible estimar que se trata de una reparación celosa como requiere el artículo 11 N°7 del Código Penal, para su configuración.

Igualmente, no se configura en favor de la acusada Vásquez Espinoza la circunstancia atenuante de artículo 11 N°9 del Código Penal, por estimar que su declaración en la audiencia de juicio oral no fue suficiente para configurar la atenuante, que requiere

aportes de antecedentes que contribuyan de forma eficiente al esclarecimiento de los hechos, lo que no aconteció, por el contrario, trató de eludir su responsabilidad, escudándose en errores de sistema y supuesta diligencia para enfrentar y corregir las prácticas observadas por el organismo de control, sin admitir que aquellas constituyeron operaciones malintencionadas, realizadas en razón de la función pública que desempeñaba, faltando a la probidad esperada y ocasionando un detrimento en el patrimonio del Estado.

Respecto a las alegaciones de las defensas, relativas a la prescripción total de la acción penal, estos sentenciadores las desestimarán por extemporáneas, ello por cuanto al haberse comunicado la decisión de condena en esta causa, el motivo de término del juicio ha sido precisamente ése, siendo improcedente o extemporáneo alegar una forma de término distinta, como sería, en este caso, el sobreseimiento definitivo del artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal, que es lo que correspondería declarar por haberse extinguido la acción penal. En efecto, el sobreseimiento definitivo es un equivalente jurisdiccional que tiene como efecto poner término al litigio, lo que sería incompatible con otra forma de término ya declarada como es la sentencia condenatoria, o, en rigor en este caso, la decisión de condena. En consecuencia, no podría condenarse y sobreseerse a la vez porque, de declararse esto último, no habría condena posible, y, por el contrario, si se dicta una condena entonces no podría terminarse la causa por otro motivo a aquél, en este caso, el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. En otras palabras y para mayor claridad, no podría declararse el sobreseimiento por haberse extinguido la responsabilidad penal, en circunstancias que ya se ha hecho efectiva dicha responsabilidad mediante la decisión de condena. En ese orden de ideas, las defensas debieron abogar por la extinción de la responsabilidad penal de sus representados antes que el Tribunal la diera por establecida, resultando, por tanto, extemporánea una solicitud posterior.

A mayor abundamiento, el Código Procesal Penal regula expresamente esta materia y su oportunidad para alegarla ya sea en el juicio mismo o en fase preparatoria, por la vía de las excepciones de previo y especial pronunciamiento del artículo 264 del Código Procesal Penal, específicamente la prevista en la letra e) que es la de “extinción de la responsabilidad penal”. Así, el artículo 263 del código referido, al establecer las facultades del acusado, señala con toda claridad la oportunidad procesal para oponer la excepción en cuestión, que no es otra que en forma previa o durante la audiencia preparatoria de juicio

oral. A su turno, el artículo 265 del mismo cuerpo legal permite, respecto de las letras c) y e) del artículo 264, oponerlas durante el juicio oral. Y, como es sabido, el juicio oral termina con la decisión de absolución o condena, constituyendo la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que fue la oportunidad elegida por ambas defensas, una audiencia posterior al juicio. El mismo estatuto, en su artículo 271, permite incluso diferir la resolución de algunas de dichas excepciones – entre ellas la que nos concierne – para el juicio oral. Pero nada de ello se planteó en este caso.

En definitiva, este Tribunal estima que cualquier causal de extinción de responsabilidad penal debe necesariamente plantearse y conocerse en forma previa, o a lo más coetánea, con la discusión de fondo, por lo que, desde el momento que esta última es zanjada – como se hizo al decidir condenar – resulta extemporáneo una alegación al respecto.

Sobre lo mismo, valga decir que la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal – que fue la oportunidad escogida por las defensas para plantear esta cuestión – tiene por exclusivo objeto abrir debate sobre circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible, además de factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena que ya se decidió imponer; mas no para eximirse de ella o de la responsabilidad penal ya declarada. Así lo dispone expresamente el inciso final de la norma en comento. La denominada “audiencia del 343”, entonces, no tiene por objeto ventilar cuestiones que incidan en la decisión de condena misma, sino únicamente en cómo se hará efectiva.

Por último, hacer presente que si bien es un criterio asentado la facultad genérica de solicitar el sobreseimiento definitivo en cualquier etapa del procedimiento, comprendiendo actuaciones ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal –lo que se desprende de diversas normas del código– dicha facultad debe entenderse procesal y naturalmente circunscrita a la vigencia del proceso, por cuanto, como ya se dijo, su objetivo es ponerle fin; cuestión que resulta inoficiosa o carente de oportunidad en caso de ya haber operado otra causal de término, como en la especie fue la decisión de condena.

Dicho lo anterior, sobre la solicitud de media prescripción, en lo que respecta a la acusada Vásquez Espinosa, considerando que el término de la prescripción empieza a correr desde el día 31 de marzo de 2015, hasta la fecha de su suspensión, que obedeció a la

presentación de la querella en su contra, interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 13 de agosto de 2021, operó la media prescripción, por haber transcurrido más de la mitad del tiempo previsto por la ley para extinguir la acción penal, que aquí era de dos años y medio, dado que estamos ante un simple delito, que prescribe en cinco años. En consecuencia, se deberá aplicar la pena considerando al hecho previsto de dos minorantes muy calificadas, que es el valor que pareció proporcional en este caso.

Conforme con lo decidido en el párrafo anterior, se desestimó que una referencia de perfil de usuario “AVASQU”, señalado en el informe pericial contable N°5-2020 del LACRIM, que no generó en su momento diligencias que afectaran a la acusada, constituya un acto de procedimiento válido para suspender la prescripción de la acción penal dirigido en contra de una persona.

En el caso del acusado Arriagada Urrutia, la solicitud de media prescripción se funda en haber transcurrido más de la mitad del tiempo previsto por la ley para extinguir la acción penal, contado desde el 01 de abril de 2015 al 12 de noviembre de 2020, que corresponde a la fecha de presentación de la querella en su contra, por el Consejo de Defensa del Estado, esto es, más de cinco años, en el evento que la pena que aplique el tribunal fuera de crimen y con mayor razón, si la pena a imponer corresponda a simple delito. Luego, considerando que en la audiencia sobre determinación de pena el Ministerio Público y el acusador particular, se opusieron a la solicitud de prescripción (total y media) de la acción penal, por hallarse interrumpida, con fecha 20 de abril de 2017, oportunidad en que el acusado, prestó declaración ante el Ministerio Público en calidad de imputado, cuestión que no fue objetada por la defensa. Entonces, coincidiendo el tribunal con la opinión de los acusadores, se rechazará la solicitud, por entender que efectivamente el procedimiento se dirigió en contra del acusado con esa actuación inequívoca y provocó la suspensión del término prescriptivo, que afecta tanto el tiempo de la prescripción total como el de la media prescripción, que es uno mismo.

**NOVENO:** Que, la pena asignada al delito de fraude al fisco, a la época de perpetración del ilícito, es la de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.



Es importante señalar, que el tribunal impondrá la pena a los acusados conforme establece el inciso 1 del artículo 239 del Código Penal, por creer que es la sanción penal que responde a la gravedad del injusto cometido por los acusados, como a la necesidad de expresar un reproche ético-social.

Establecido lo anterior y para el caso de la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, concurriendo dos circunstancias minorantes muy calificadas y ninguna agravante, de conformidad con el artículo 103 del Código Penal, se rebajará la pena corporal en dos grados desde el mínimo, quedando en la de prisión en su grado máximo, y considerando la circunstancia atenuante genérica concurrente, de acuerdo con el artículo 68 del Código Penal, se impondrá la pena en el límite inferior de ese grado, a saber, cuarenta y un días de prisión en su grado máximo.

En cuanto al acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante, no se aplicará el grado máximo y se impondrá la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, atendida su relevancia en la coordinación y ejecución de los hechos.

En cuanto a la multa, de conformidad con el artículo 70 del Código Penal, se impondrá a los acusados una multa inferior al monto señalado en la ley, cuya cuantía se regulará en el cinco por ciento del perjuicio causado. Para adoptar esa decisión, respecto del acusado Martín Arriagada Urrutia, se valoró la circunstancia atenuante concurrente y la capacidad económica de éste. Para tal efecto, se tuvo en consideración que se encuentra suspendido del cargo público que ostentaba y consiguientemente privado de remuneración, debiendo afrontar los gastos que su grupo familiar inmediato le demanda, especialmente por concepto de educación de sus tres hijos. Tratándose de la acusada, Isabel Vásquez Espinoza, fue valorado, además de las circunstancias atenuantes concurrentes, el informe social de fecha 6 de diciembre de 2023, elaborado por la trabajadora social Laura Oyarzún Serrano, quien conforme con los antecedentes examinados y que se adjuntan a la pericia, concluyó que la peritada es una profesional en vías de jubilar como funcionaria pública, con una hoja de vida funcionaria intachable, sin medidas disciplinarias en su contra, que cumple funciones de jefe de hogar, asumiendo íntegramente el cuidado y manutención de sus dos hijos, ambos mayores de edad, uno trabajando y el otro recién titulado. Conforme con lo anterior, fue del parecer de la profesional, que la peritada presenta condiciones

personales y socio familiares no compatibles con actividades delictivas. Por los mismos fundamentos, se otorgará a los acusados diez parcialidades para el pago, dentro de un plazo de un año, bajo el apercibimiento que el mismo artículo establece.

Finalmente, se impondrá al acusado Martín Arriagada Urrutia, la pena cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio, en consideración a la circunstancia atenuante concurrente.

Teniendo presente que concurren en favor de la acusada Isabel Vásquez Espinoza, dos circunstancias atenuantes muy calificadas, se rebajará la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio a máximo, en dos grados y se impondrá la pena de dos años y un día de suspensión en su grado máximo, en atención a la irreprochable conducta anterior de la acusada.

**DÉCIMO:** Que, por concurrir los requisitos del artículo 4 de la ley N°18.216, procede sustituir las penas privativas de libertad que resulten impuestas a los acusados por esta sentencia, por la sanción sustitutiva de remisión condicional, que consistirá en la observación y asistencia de cada uno de los condenados ante la autoridad administrativa por un plazo no inferior a la pena que se imponga por esta sentencia al acusado Arriagada Urrutia y por el término de un año para la acusada Vásquez Espinoza, debiendo ambos cumplir con las condiciones que señala el artículo 5 de la norma citada.

En este punto, se desestimarán las alegaciones planteadas por las defensas, relativas al sentido y alcance de las penas sustitutivas a imponer las que, en su concepto, debiesen abarcar todas las sanciones declaradas por el tribunal-entre ellas, por cierto, las inhabilitaciones-. Lo anterior, en primer término, por cuanto el artículo 1° de la Ley N°18.216 es claro y perentorio en cuanto a que “la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad” (el subrayado es nuestro) podrá sustituirse por algunas de las consignadas en dicha norma en cuestión que, por tanto, excluye expresamente sanciones de distinta naturaleza que aquellas; y, en segundo lugar, toda vez que el propio artículo 239 inciso final del Código Penal estipula, al menos para el caso de las multas, que se aplicarán “en todo caso”.

**UNDÉCIMO:** Que, el tribunal condenará en costas a los acusados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 del Código Penal y 47 del Código Procesal Penal. Por otra parte, no resultó acreditado en el juicio que los acusados fueran titulares de privilegio de pobreza.

**EN LO CIVIL:**

**DUODÉCIMO:** Que, el Abogado Procurador Fiscal José Isidoro Villalobos García-Huidobro, por el Fisco de Chile, dedujeron en estos autos demanda civil de indemnización de perjuicios contra ambos encausados en los siguientes términos:

Conforme al derecho que le confieren a este interviniente los artículos 59, 60, 61 y 261 letra d) del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, vengo en deducir demanda civil de indemnización de perjuicios con carácter de solidaria, en contra de los acusados Martín Abdón Arriagada Urrutia, alcalde la Municipalidad de Sagrada Familia, cédula nacional de identidad número 9.540.040-k, domiciliado en calle San Francisco N°15, de la comuna de Sagrada Familia, representado en este proceso por su abogado defensor penal privado don Marco Rivera Baeza; y de Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, ignoro profesión u oficio, cédula nacional de identidad número 9.525.418-7, domiciliada en calle Luis Cruz Martínez N° 1517 de la comuna de Molina, representada en este proceso por el abogado defensor privado, don Juan Carlos Manríquez González, todos ellos con domicilio y forma de notificación señalados ante el Tribunal, a fin de que sean condenados a pagar solidariamente a mis representados, los perjuicios ocasionados por el ilícito que se investiga en la especie, según paso a exponer:

**I.- Los hechos:**

Los hechos que fundamentan la presente acción civil deducida por este acusador particular se encuentran descritos en lo principal de esta acusación particular los que doy por enteramente reproducidos para todos los efectos legales, y consisten básicamente en que entre los días 30 de marzo y 01 de abril de 2015, mientras Felipe Andrés Paredes Baeza desempeñaba funciones como cajero encargado del giro y recaudación de Permisos de Circulación al interior de la Municipalidad de Sagrada Familia, concertado previamente con Raúl Alejandro Betancourt Diaz, actualmente fallecido, procedió el primero a renovar a este último, los Permisos de Circulación de 8 vehículos : PPU BSSB.83-3, BWFR.71-5, CLTF.43-K, CYPB.98-1, NY.6788-K, LW.8279-K, UR3964-7 Y RF.4076-4, en circunstancias que Paredes Baeza se encontraba impedido de hacerlo, toda vez que dichas patentes presentaban numerosas multas de tránsito impagas cursadas por diversos Juzgados de Policía Local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°18.287, que prohíbe la renovación de Permisos de Circulación de vehículos que presenten multas de

tránsito no pagadas, defraudando de esta manera al Fisco de Chile en la suma de \$19.122.192.-

Además, Raúl Alejandro Betancourt Díaz, durante el proceso de renovación de permisos de circulación del año 2015, concurrió en forma reiterada a la Municipalidad de Sagrada Familia para adquirir múltiples Permisos de Circulación de otros vehículos que mantenían multas impagas, siendo atendido, la mayoría de las veces, por Felipe Andrés Paredes Baeza, quien vendió esos Permisos de Circulación sin cobrar o exigir el pago de las multas pendientes de pago.

La venta de Permisos de Circulación a Raúl Alejandro Betancourt Díaz por parte de Felipe Andrés Paredes Baeza, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedecía a una autorización previa efectuada por el alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia Martín Abdón Arriagada Urrutia.

Asimismo, durante diversos períodos del año 2014 Felipe Paredes Baeza vendió, a diversos contribuyentes, 37 Permisos de Circulación con 180 multas impagas por un monto de \$7.804.807.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 581 Permisos de Circulación con 11.433 multas impagas por un monto de \$531.629.789.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, don Julio Enrique Hormazábal Muñoz, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 121 Permisos de Circulación con 959 multas impagas por un monto de \$46.121.504.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 155 Permisos de Circulación con 1.623 multas impagas por un monto de \$78.471.607.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Del mismo modo, Sonia Jimena Cuevas Jara durante diversos períodos del año 2014 vendió, a diversos contribuyentes, 74 Permisos de Circulación con 1189 multas impagas por un monto de \$52.754.407.- y, en diversos períodos del año 2015, vendió, a diversos contribuyentes, 151 Permisos de Circulación con 605 multas impagas por un monto de \$29.322.023.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Fabián Elías Riquelme Solís, durante diversos períodos del año 2014 vendió 39 Permisos de Circulación con 198 multas impagas por un monto de \$8.797.538.-

y, en diversos períodos del año 2015, vendió 19 Permisos de Circulación con 134 multas impagas por un monto de \$6.132.514.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Asimismo, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez, durante diversos períodos del año 2014 vendió 35 Permisos de Circulación con 496 multas impagas por un monto de \$25.225.755.-en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas.

Por su parte, Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionaria municipal, desarrollando labores específicamente en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia, durante diversos períodos del año 2014, vendió, a diversos contribuyentes, 35 Permisos de Circulación con 71 multas impagas por un monto de \$3.077.350.- y, en el año 2015, vendió 1 Permiso de Circulación con 1 multas impaga por un monto de \$43.068.-, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas; asimismo, instruyó a los funcionarios a su cargo Felipe Paredes, Julio Hormazábal, Fabián Riquelme, Sonia Cuevas y Leticia Saavedra a realizar dicha acción ilícita durante los años 2014 y 2015.

El monto total defraudado al fisco, por concepto de multas de tránsito no cobradas por los todos los imputados, los que actuaron concertados en esta causa, asciende a una suma no inferior a los \$805.382.136.-

En efecto, los acusados Martín Abdón Arriagada Urrutia, e Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, en su calidad de funcionarios públicos al igual que los imputados Felipe Andrés Paredes Baeza, Julio Enrique Hormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez tenían pleno conocimiento de la existencia de dichas multas pendientes de pago, debido a que dicha información había sido remitida a todos los Municipios de Chile por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación Nacional en forma previa al inicio del proceso de venta de Permisos de Circulación del año 2014 y 2015, tal como lo hace todos los años y además está disponible para cualquier persona que lo requiera, y aun así instruyeron los primeros y procedieron a la venta de permisos sin cobrar las multas vigentes por el monto referido en el párrafo anterior.

Con fecha 30 de agosto de 2022, se arribó a una suspensión condicional del procedimiento con los imputados Felipe Paredes Baeza, Julio Hormazábal Muñoz, Sonia Cuevas Jara, Fabián Riquelme Solís y Leticia Saavedra Ramírez.

II.- El derecho:

Fundo la presente demanda en el artículo 2314 y siguientes, en especial, el artículo 2329, todos del Código Civil. Los hechos relatados en el párrafo precedente configuran además de un ilícito penal, un ilícito civil.

A través de los hechos materia de la acusación y demanda civil, se ocasionó un perjuicio al FISCO DE CHILE que asciende a un monto no inferior a la suma de \$805.382.136.- que deberán indemnizar los acusados y demandados civiles Martín Arriagada e Isabel Vásquez.

Habiendo incurrido los acusados en un hecho ilícito que se encuentra directamente vinculado con una relación de causa a efecto con los perjuicios ocasionados, deberán reparar los perjuicios ocasionados al patrimonio de mis representados.

La suma antes mencionada, debido al fenómeno inflacionario que afecta a nuestra moneda, se encuentra actualmente desvalorizada, por lo que resulta procedente que esta parte interviniente sea indemnizada con el correspondiente pago de reajustes, única manera de mantener indemne su patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314 y demás preceptos que se citarán del Código Civil.

En efecto, de los preceptos legales mencionados, se desprende que quien ha cometido un delito debe ser condenado a repararlo (artículo 2314) y que la indemnización debe ser completa (artículo 2329), de manera tal que el patrimonio de la víctima quede en las mismas condiciones que se encontraría de no haberse cometido el delito que le perjudicó.

Por otra parte, el daño que sufrieron mis representados con la perpetración del delito no sólo los privó injustamente de una parte de su patrimonio, sino que también del uso, goce y disposición del mismo, correspondiendo que éstos sean indemnizados mediante el pago de intereses. Para estos efectos, S.S. debe tener presente que este pago de intereses se solicita en el carácter de indemnizatorios, por lo que no procede aplicar para su determinación las normas de la responsabilidad contractual, sino precisamente las disposiciones contenidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, solicitando

concretamente que en la especie se fijen los intereses corrientes sobre la suma demandada, debidamente reajustada.

Con relación al pago de reajustes e intereses solicitados, cabe señalar que su procedencia ha sido ampliamente aceptada por la jurisprudencia nacional, pudiendo destacarse los fallos de Excma. Corte Suprema publicados en el ejemplar N° 174 de la Revista “Fallos del Mes”, N° 2, página 77; Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código Civil, Tomo X, N° 381, página 125; N° 411, página 131; N° 414, página 133.

Finalmente, VS., debe tener presente que la responsabilidad que emana del delito cometido, es de carácter solidaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil, por lo que cada uno de los acusados debe responder solidariamente por cada delito que hubiere cometido junto a otro u otros de los restantes acusados individualizados en la presente acusación particular, por los montos que se expondrán en el petitorio y según la intervención que les ha cabido en la comisión del delito descrito en lo principal y que constituyen el fundamento de la presente demanda civil.

En mérito de los hechos expuestos y de acuerdo con lo que disponen los artículos 59, 60, 67, 259 y 261 del Código Procesal Penal; artículos 1437, 2284, 2314, 2316, 2317, 2329 y siguientes del Código Civil, solicitó, tener por interpuesta la presente demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de los acusados Martín Arriagada Urrutia e Isabel Vásquez Espinoza, ya individualizados, darle tramitación y, en definitiva, acogerla declarando que se los condena solidariamente a pagar a mi representado, las siguientes cifras, o aquellas que VS., determine de acuerdo a derecho y al mérito del proceso: a) La suma de \$805.382.136.- correspondiente al daño ocasionado a mis representados, o la suma mayor o menor que se fije en definitiva conforme a derecho y al mérito del proceso; b) El reajuste de la cantidad indicada precedentemente, conforme la variación del IPC, entre la fecha de comisión de los ilícitos y la fecha de pago efectivo y total, en subsidio, entre las fechas que SSA. fije conforme a derecho y al mérito del proceso; c) Los intereses corrientes sobre las sumas señaladas en las letras a), y b) precedentes, calculados entre la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo y total; y d) Las costas de la causa.

**DÉCIMOTERCERO:** Que, los demandados solicitaron el rechazo de la demanda civil en todas sus partes.

Agregó la parte demandada Vásquez Espinoza, que, si alguna intervención tuvo por omisión de un deber no penal, debió ejercerse la acción en un juicio de cuenta, pero considerando que todas y cada una de las multas están pagadas y no hay perjuicio fiscal. Además, hizo presente la necesidad de distinguir las que son de pórtricos, de las de tránsito, en proporción de 80-20 y 50-50, cuyo destinatario del 80% es el Fondo Nacional Municipal y en las otras las municipalidades más carentes del país y ninguna se ha querellado, tampoco hay víctimas, por tanto, su representada debe ser absuelta de la demanda civil.

**DÉCIMOCUARTO:** Que, la parte demandante rindió prueba testimonial, pericial documental y material, las que se encuentran consignadas en el considerando quinto precedente, que se tiene por reproducido.

A su vez, la parte demandada Martín Arriagada Urrutía, incorporó cuatro comprobantes de pago de multas asociados al vehículo PPU FGYL85, efectuados con fechas, 26 de enero de 2015 y 11 de abril de 2016, incorporados como prueba N°3.

Lo mismo hizo la demanda Isabel Vásquez Espinoza, rindiendo prueba documental consistente en 36 certificados de multas de tránsito no pagadas, que dicen relación con las placas patentes KL6741; DPST38; BTPJ21; BRPH23; CJYL25; DBKW10; CCFV60; XP7025; CTCS81; RL3352; DLKP34; DBHV31; CBCJ24; DTBY10; ZK4900; CWFJ21; DRXD32; BFFW72; TT4176; CKBL34; DFVS21; DDYB87; PG5428; KW3632; DLRG77; DGLP28; DTSV24; KF3099; CWLD74; BZYC27; BRFC30; FP4792; YW9526; RT6284; PW5073 y CTKJ81, asociadas a los permisos de circulación renovados con multas impaga, girados por la demandada Isabel Vásquez Espinoza, que dan cuenta “que no registran multas impagas”, según información al 30 de noviembre de 2022. Incorporados como prueba documental N°18.

**DÉCIMOQUINTO:** Que, en orden a establecer los perjuicios ocasionados al Estado, por causa de la renovación de permisos de circulación con multas impagas, durante el año 2014 y 2015, por los funcionarios públicos demandados, fue valorado el informe pericial contable, realizado por la perito contador auditor Pamela Pino Salinas, quien dio cuenta en la audiencia de juicio oral del contenido y conclusiones de su informe, antes referido en la motivación quinta de esta sentencia, que se tiene por reproducido, más la



prueba documental N° 20 y 21, consistente en los legajos de los comprobantes de permisos de circulación y sus anexos, asociados a los hechos que el tribunal dio por establecidos.

Luego, los antecedentes de convicción expuestos permitieron probar que las acciones descritas, realizadas por orden del acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia, implicaron un perjuicio para el Fisco de Chile de la suma total de \$16.456.268, en tanto que las realizadas por la acusada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza produjeron un perjuicio total de \$3.123.118.

Al así concluirlo se analizó que la obligación de indemnizar resulta una consecuencia de la aplicación del principio de que todo daño causado por una persona debe ser reparado por ésta, principio recogido en nuestra legislación en diversas disposiciones, siendo la más importante la que contempla el artículo 2.314 del Código Civil –invocada por cierto por la parte demandante-, norma que dispone específicamente que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

En el caso sublite, se acreditó la existencia del delito cometidos por los demandados, un daño emergente definido en el monto indicado para cada uno de éstos y una relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño al Fisco de Chile, que se tradujo en privarlo de ingresos por concepto multas de tránsito impagas, las que no fueron exigidas al momento de renovar determinados permisos de circulación en los años 2014 y 2015.

Por todo lo anterior, **se regulará la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente**, en lo que dice relación con el demandado Martín Arriagada Urrutia, en la suma de \$16.273.258, más reajustes, interés corriente y las costas del juicio, reajuste calculado desde la fecha de comisión del delito hasta el efectivo pago, e interés corriente por concepto de las cuatro multas pagadas; y en lo que concierne a la acusada Isabel Vásquez Espinoza, resultó acogida la demanda y solo se dará lugar, en cuanto al pago del interés corriente devengado y costas, desde la perpetración de los hechos ilícitos a la fecha del pago efectivo, por haber deducido del monto de perjuicio determinado (\$3.123.118), igual suma por concepto de encontrarse pagadas la totalidad de las multas.

**DÉCIMOSEXTO:** Que, no fueron objeto de valoración por el tribunal, por ser ajenos al establecimientos de los hechos y participación de los acusados, las pruebas

documentales N° 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de la Defensa de Vásquez Espinoza; 4, 5 y 21 de la Defensa de Arriagada Urrutia; y 29, 30 y 31, de la acusadora particular.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N°6, 14 N°1, 15 N°1 y 2, 18, 30, 47, 50, 52, 68, 70, 103 y 239 del Código Penal; artículo 24 de la Ley N°18.287; artículos 24, 51, 295, 297, 325, y siguientes, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; y los artículos 1437, 2284, 2314, 2316, 2329 y siguientes del Código Civil, se declara:

**En lo Penal.**

1.- Que, se **condena** al acusado **Martín Abdón Arriagada Urrutia**, ya individualizado, a la pena de **tres años** de presidio menor en su grado medio, al pago de una **multa equivalente al cinco por ciento** del perjuicio causado, es decir, **\$813.663**, y a **cinco años y un día** de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para cargos, empleos u oficios públicos, más las costas, como autor de un delito de Fraude al Fisco, perpetrado durante los años 2014 y 2015, en la comuna de Sagrada Familia.

2.- Que, se **condena** a la acusada **Isabel Alejandra Vásquez Espinoza**, ya individualizada, a la pena de **cuarenta y un días** de prisión en su grado máximo, al pago de **multa del cinco por ciento** del perjuicio causado, es decir, **\$156.156**, y a **dos años y un día** de suspensión en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos, más las costas, como autora de un delito de Fraude al Fisco, perpetrado durante los años 2014 y 2015, en la comuna de Sagrada Familia.

3.- Que, en relación a la multa impuesta a cada uno de los sentenciados, se concede diez parcialidades para el pago, durante el término de un año, en la forma prevista en el considerando noveno de esta sentencia.

Para el evento que los sentenciados no tuvieren bienes para satisfacer la multa, se impondrá, por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella nunca pueda exceder de seis meses.

4.- Que, por concurrir los requisitos del artículo 4 de la Ley N°18.216, se sustituyen las penas privativas de libertad impuestas a los acusados por la sanción de **remisión condicional**, que consistirá en la observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa por un plazo no inferior a la pena impuesta, en el caso de Martín Arriagada

Urrutia, y por el término de un año, para la condenada Vásquez Espinoza, debiendo ambos cumplir con las condiciones que señala el artículo 5 de la ley citada.

No existen abonos que considerar respecto de ambos acusados, según el considerando sexto del auto de apertura de juicio oral.

Devuélvase a los acusadores y defensas, los documentos y evidencias aportados como prueba al juicio.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y remítase los antecedentes al Tribunal de Garantía de Curicó, para su cumplimiento y ejecución, a fin de comunicar lo resuelto a los organismos correspondientes.

Se deja constancia para los efectos de la publicación de esta sentencia en el sitio web del Poder Judicial y de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 N°2 de la ley 20.285 y acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema, que no contiene presupuestos de anonimización.

#### **En lo civil**

**1.-** Que, se **acoge** la demanda civil de indemnización de perjuicio en beneficio de la parte demandante, el Fisco de Chile, resultando condenado el demandado Martín Abdón Arriagada Urrutia, al pago de la suma de \$16.275.258, más reajuste conforme a la variación del IPC, interés corriente y costas, además, del interés corriente devengado, por concepto de las cuatro multas pagadas.

**2.-** Que, se **acoge** la demanda civil de indemnización de perjuicio en beneficio de la parte demandante, el Fisco de Chile, resultando condenada la demandada Isabel Alejandra Vásquez Espinoza, solo en cuanto al pago del interés corriente devengado y costas, entre la fecha de comisión de los hechos y el pago efectivo, por encontrarse pagadas la totalidad de las multas.

Redacción de la jueza Paulina Rodríguez Rodríguez.

Ruc N°1500342994-3

Rit N° 20-2023

**Poder Judicial**  
**Tribunal de Juicio Oral en lo Penal**  
**Curicó**

---

Pronunciada por los magistrados, Rodrigo Gómez Marambio, Rodrigo Tordecilla Gaete y Paulina Rodríguez Rodríguez.